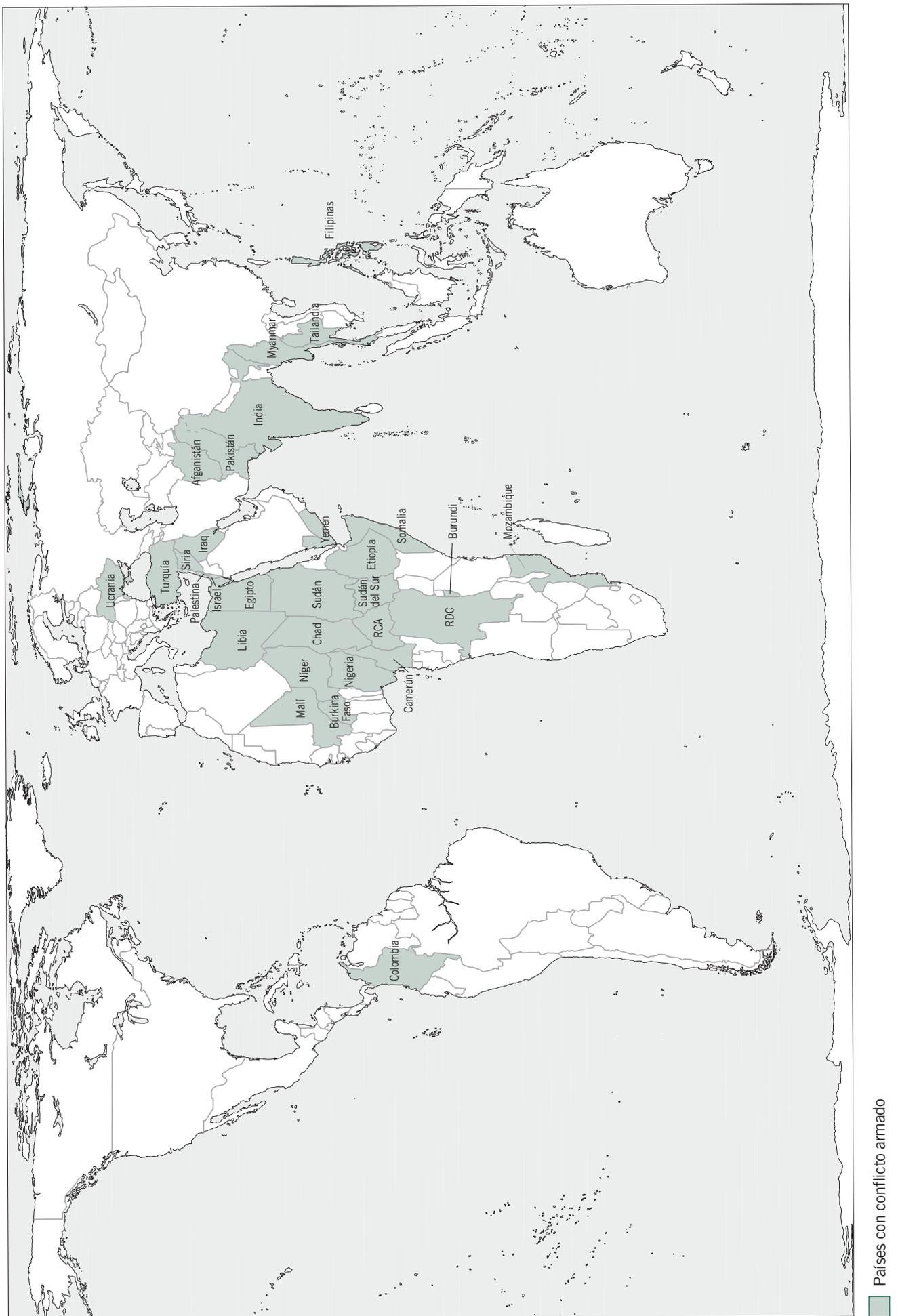


Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

1. Conflictos armados

- Durante 2021 se registraron 32 conflictos armados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Por primera vez en una década los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (53%) del total de casos a nivel mundial.
- En noviembre las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) cometieron varios atentados en la capital ugandesa, Kampala, lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones del grupo y que desencadenó el despliegue militar ugandés en RDC.
- Continuó la escalada del conflicto en la región etíope de Tigré en el que todas las partes cometieron atrocidades que incluyen masacres de civiles, violencia sexual y el uso del hambre como arma de guerra.
- En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, se desplegó la misión regional de la SADC así como tropas ruandesas para ayudar al Gobierno mozambique en la contención de violencia.
- La firma de un acuerdo militar entre Malí y Rusia amenaza con transformar las coaliciones militares internacionales en el Sahel.
- Los talibanes tomaron el poder en Afganistán tras una intensificación de su ofensiva y la retirada de las tropas estadounidenses e internacionales.
- Un golpe de Estado militar derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi en Myanmar y dio lugar a una escalada de la violencia.
- Se incrementó la militarización en torno al conflicto en Ucrania, con el despliegue masivo de tropas rusas junto a la frontera y alertas sobre una posible ofensiva militar de Rusia.
- La violencia directa asociada al conflicto palestino-israelí y a la ocupación israelí de territorio palestino se incrementó y causó los peores niveles de letalidad en siete años.
- El conflicto armado en Yemen siguió siendo uno de los más graves, con más de 20.000 víctimas mortales en 2021, y fracasaron los intentos por imponer un alto el fuego en todo el país.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2021. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2021, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2021.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2021

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebiale Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Tigré) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	2
	Gobierno, Recursos, Sistema		↓
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)-, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		=

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2021 con la del 2020, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2021 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM).	3
	Sistema, Identidad		↓
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansarul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Ruanda, Rusia (Wagner Group)	3
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiye, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNITAMS	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	2
	Sistema		↑
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (K), Frente Nacional de Resistencia (NRF)	3
	Sistema		↑
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraike, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MND AA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	2
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		=
EUROPA			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		=
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↑
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel	1
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional ⁶	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLF, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen ⁷ -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al expresidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

6. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina

7. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* el conflicto armado protagonizado por los al-houthistas y el de AQPA se abordaban por separado. Este año se analizan conjuntamente por la convergencia en las dinámicas de conflictividad.

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2021

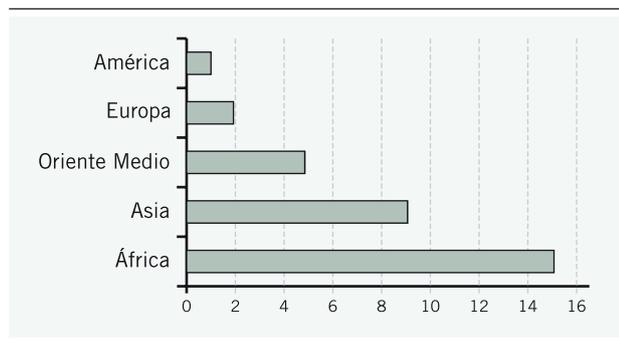
En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2021, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2021 se registró un ligero descenso en el número de conflictos armados respecto a años precedentes. En total se contabilizaron 32 casos, frente a los 34 contextos identificados en 2020, 2019 y 2018. El principal cambio en comparación con el período anterior es que la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj dejó de ser considerada como conflicto armado. Tras la intensa guerra de seis semanas entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 y sus severos impactos –más de 5.000 personas fallecidas y decenas de miles desplazadas forzosamente por la violencia–, en 2021 la situación pasó a ser de tensión militarizada, en un contexto de alto el fuego frágil y en el que persistían numerosos retos de carácter humanitario,⁸ así como en el ámbito negociador. Adicionalmente, en la presente edición del informe los casos de Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) se analizan de manera conjunta por la progresiva interrelación de las dinámicas de conflicto armado en el país.⁹ Al finalizar el año, los 32 conflictos armados identificados en 2021 permanecían activos.

África concentró prácticamente la mitad de los conflictos armados en 2021, con un total de 15 casos (47%), seguida de Asia (nueve), Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno)

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2021



En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (15) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (47%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2021 tres de los 32 casos (9%) eran conflictos armados internos y todos ellos transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros dos casos, que suponen un 6% del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental y la disputa palestino-israelí en Oriente Medio. Los 27 casos restantes, que representan un 85% de los casos, fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza – como ISIS, al-Qaeda o Boko Haram, entre otros.

En línea con lo observado en años previos, durante 2021 se mantuvo una presencia destacada de misiones internacionales de Naciones Unidas, especialmente en el marco de conflictos armados en África. A lo largo del año la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA), Sudán del Sur (UNMISS) o Sudán (Darfur). En este último caso, la misión híbrida de la ONU y la UA (UNAMID) se retiró de manera definitiva de la zona el 31 de diciembre de 2020 después de más de una década de actividades –operaba desde 2007–, dando paso a una misión de la ONU de asistencia a la transición en Sudán (UNITAMS). Organizaciones regionales también continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia– o la Unión Europea (UE) –EUNAVFOR en Somalia.

8. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) en el capítulo 2 (Tensiones).

9. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* Los casos de Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) se analizaban por separado.

También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, Ocean Shield, liderada por EEUU, pero en la que también participan la UE, la OTAN y países como Japón, India y Rusia. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS, formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria. Esta coalición cuenta con 84 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE.¹⁰

Respecto a la implicación de terceros países, durante 2021 cabe destacar el repliegue de EEUU de varios conflictos armados emblemáticos. El más destacado fue, sin duda, Afganistán. Tras el anuncio del Gobierno de Joe Biden de que las tropas estadounidenses abandonarían el país de manera definitiva el 11 de septiembre –dos décadas después de los atentados contra Washington y Nueva York que alentaron la intervención y ocupación de territorio afgano–, la violencia se recrudeció en el país y los talibanes tomaron militarmente el poder. En este contexto, la misión Rolute Support de la OTAN también retiró sus fuerzas del país entre mayo y septiembre de 2021. A principios de enero de 2021, EEUU también puso fin a su presencia militar en Somalia, con la retirada de los cerca de 800 efectivos de fuerzas especiales que mantenía en el país africano. Al finalizar el año también se anunció que EEUU retiraría las tropas que mantenía en misión de combate en Iraq y los militares que permanecerían en el país limitarían sus actividades a tareas de entrenamiento y asistencia. Sin embargo, fuentes diplomáticas y de seguridad consideraron que el cambio de papel no sería significativo por la escasa participación de tropas de EEUU en actividades de combate en Iraq en los últimos años. Mientras, algunos actores iraquíes –incluyendo milicias próximas a Irán– continuaron demandando la salida total de las fuerzas estadounidenses.

Por otra parte, durante 2021 se observó una mayor actividad militar de Rusia en diferentes contextos. En algunos conflictos Moscú mantuvo su implicación de manera directa y su ascendente sobre grupos armados locales, como por ejemplo en Siria, donde Rusia continuó siendo un actor protagónico y apoyo clave para el régimen de Bashar al-Assad. En casos como el de Ucrania, en 2021 Rusia desplegó decenas de miles de soldados y equipamiento militar cerca de la frontera, en el marco de su disputa con el Gobierno ucraniano y sus crecientes tensiones con la OTAN, EEUU y UE. A finales de año se intensificaron las alertas sobre riesgos de una posible invasión militar rusa a Ucrania. En diversos contextos también se identificó una creciente presencia rusa a

través del grupo de seguridad privada Wagner. Así, por ejemplo, el despliegue de mercenarios de esta compañía causó severas tensiones entre el Gobierno maliense y sus socios occidentales en 2021, en particular con Francia. Paralelamente, el grupo Wagner desplegó a algunas de sus fuerzas en RCA y en los últimos años se ha informado también de su presencia en Libia. En este contexto, al finalizar el año la UE aprobó una serie de medidas restrictivas contra el Grupo Wagner, al que acusó de reclutar, entrenar y enviar a fuerzas militares privadas a zonas de conflicto, favoreciendo las dinámicas de violencia, el expolio de recursos y la intimidación de civiles. En diciembre de 2021, el Consejo de la UE acusó a algunos individuos vinculados al grupo de torturas, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales y actividades desestabilizadoras, en particular en Libia, Siria, Ucrania (Donbás), RCA y en la región del Sahel.¹¹

Siguiendo la tendencia de años previos, la inmensa mayoría (84%) de los conflictos armados en 2021 fueron de carácter interno internacionalizado

Las dinámicas de internacionalización también se observaron en otros contextos, como por ejemplo en el conflicto de Turquía (sudeste), donde el Ejército turco lanzó numerosas operaciones militares contra fuerzas kurdas ubicadas en el norte de Iraq. Turquía también continuó teniendo un papel determinante en la guerra en la vecina Siria. Irán también mantuvo su implicación en el conflicto armado en Siria y continuó teniendo un papel clave en las dinámicas del conflicto armado en Iraq por su ascendencia sobre numerosas milicias shííes. Asimismo, Teherán parecía cada vez más implicado en Yemen por su proximidad con los al-houthistas y su interés en este escenario en el marco del pulso de poder con Arabia Saudita y de las negociaciones sobre su programa nuclear. Riad, en tanto, continuó teniendo un papel protagónico en la coalición internacional involucrada en el conflicto armado yemení, en el que también mantuvo un papel destacado Emiratos Árabes Unidos. Desde hace varios años países como Siria, Iraq, Yemen y también Libia han sido escenarios de “proxy wars” –“guerras por delegación”– en los que fue especialmente evidente la proyección de disputas regionales e internacionales en las dinámicas de conflicto. Otra de las contiendas que destacó por las dinámicas de internacionalización en 2021 fue la de Etiopía (Tigré), tras la implicación de Eritrea en apoyo del Gobierno etíope y la ampliación de las hostilidades a la zona fronteriza entre Etiopía y Sudán, donde se produjeron enfrentamientos entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán con milicias sudanesas. También destacó el caso de Mozambique (norte), donde se registró la implicación de diversos actores internacionales, algunos de los cuales aportaron contingentes militares y/o policiales –la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) o Ruanda– o unidades de entrenamiento –Portugal, EEUU, UE– para apoyar la lucha contrainsurgente de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas.

10. Más información en [The Global Coalition Against Daesh](#) (website).

11. European Council, *EU imposes restrictive measures against the Wagner Group*, 13 de diciembre de 2021.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2021, siguiendo la tendencia de años anteriores la mayoría de tuvo entre sus principales motivaciones las disputas en torno a **las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o bien al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado**, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Una de estas causas o ambas estuvieron presentes en el 72% de los casos, es decir, en 23 de los 32 conflictos armados contabilizados en 2021. En 17 de estos contextos había actores armados que aspiraban a una transformación del sistema, entre los cuales la mayoría contaban con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Pese al debilitamiento del grupo armado Estado Islámico en su núcleo de origen en Oriente Medio en los últimos años, las filiales de ISIS o entidades afines a la organización –que en algunos casos adoptaban denominaciones específicas– se mantuvieron activas en numerosos conflictos armados en todas las regiones del mundo, a excepción de América. Así, se identificaron filiales de ISIS en los casos de Mozambique (norte), Región Sahel occidental, Región Lago Chad, RDC (este-ADF), Libia, Somalia, Afganistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. También continuaron operativas, aunque con un menor perfil y acciones más limitadas, organizaciones vinculadas a al-Qaeda como al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) –en Malí y Libia– o al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) –en Yemen. Otros grupos armados activos de línea similar, con agendas yihadistas que aspiran a un cambio de sistema, fueron Abu Sayyaf en Filipinas (Mindanao), al-Shabaab en Somalia, Boko Haram en la Región Lago Chad, y los talibanes en Pakistán y Afganistán. Este último caso fue especialmente destacado y emblemático en 2021, ya que los talibanes consiguieron tomar militarmente el poder en Afganistán 20 años después de su derrota y tras dos décadas de ocupación extranjera, después de la retirada de las fuerzas militares estadounidenses a mediados de año.

Adicionalmente, otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron –una de ellas o ambas– en 20 de los 32 de los casos (63%). Ejemplos de conflictos con este trasfondo son el que enfrenta al Gobierno de Camerún con movimientos secesionistas político-militares en las dos regiones anglófonas del oeste del país (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), el que afecta a la región etíope de Tigré, el de Mindanao en Filipinas, el de Jammu y Cachemira en India, el de Baluchistán en Pakistán, el del sur de Tailandia, la cuestión kurda en Turquía, por mencionar solo algunos.

Un 41% de los conflictos armados en 2021 evolucionaron hacia mayores niveles de violencia respecto al año anterior

En 2021 se profundizó la tendencia de aumento de conflictos armados de alta intensidad, que por primera vez en una década representaron más de la mitad de los casos

Por último, también hubo conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 34% –11 de los 32– del total de conflictos. Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos, con numerosos enfrentamientos relacionados con la extracción de oro y coltán, entre otros minerales. Zonas de actividad minera también fueron escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas. También en el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y el CPI-M se dieron dinámicas de violencia vinculadas al extractivismo en varios estados indios. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel.

Cabe destacar que **18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género**, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.¹² Las desigualdades de género se manifestaron en aspectos como los impactos específicos de género de la violencia y la utilización de la violencia sexual por las partes contendientes en diferentes conflictos armados, en un contexto internacional de pandemia por la COVID-19 que puso en evidencia las graves desigualdades de género a nivel internacional.

En materia de **evolución**, la mayor parte de los conflictos armados en 2021 –13 de los 32 casos, equivalentes a un 41%– presentaron un aumento en los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Entre los casos en que se observó un deterioro de la situación se cuentan conflictos armados de todas las regiones: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Tigré), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Ucrania (este) e Israel-Palestina. Otros 12 conflictos armados –que representan un 37% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2020. Solo en siete contextos –22% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia y sus impactos: Libia, Mozambique (Norte), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M) y Egipto (Sinaí). En algunos de estos casos la reducción de los incidentes violentos estuvo

12. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

relacionada con acuerdos de alto el fuego o declaraciones unilaterales de cese el fuego –Libia, Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)– en el marco de procesos de negociación.¹³ En otros casos, como Mozambique (Norte), si bien la violencia siguió siendo de alta intensidad, el número de eventos violentos y las muertes asociadas en 2021 reflejó un descenso en comparación al año anterior en el que se registró la tasa de muertes más alta de la última década en el país.

En cuanto a la **intensidad de los conflictos armados**, durante 2021 se acentuó la tendencia observada en los últimos diez años de incremento de casos graves. Es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas mortales anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si hace una década los conflictos armados de alta intensidad representaban en torno a un cuarto del total de casos, en los últimos años esta proporción se ha ido incrementando hasta representar prácticamente la mitad de los contextos (ver gráfico 1.4). En el marco del último lustro, los conflictos armados graves supusieron un 40% en los años 2016 y 2017, descendieron entre 2018 y 2019 –a 27% y 32%, respectivamente–, y aumentaron de manera significativa en 2020, cuando alcanzaron el 47%. **En 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad fue incluso más elevada, llegando al 53% y superando la mitad de los casos por primera vez en la última década.** En línea con lo observado en 2020, durante 2021 el mayor porcentaje de casos graves se concentró en África. El continente albergó 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 71% del total de casos. Respecto al número de casos del continente africano, 12 de sus 15 conflictos armados (80%) eran de alta intensidad, un porcentaje muy superior al observado en años recientes –en 2019, solo un 44% de los conflictos armados africanos eran de intensidad elevada. Después de África, la segunda región en albergar el mayor número de casos de alta intensidad fue Oriente Medio, con un total de tres contextos –9% del total global de casos, pero 60% de los conflictos de la zona. En Asia se identificaron dos conflictos armados de alta intensidad, mientras que en América y Europa no se registraron casos de este tipo –si bien se incrementaron los niveles de tensión militarizada, de la mano del masivo despliegue de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana y las alertas sobre una posible invasión. Los 17 casos de conflictos armados graves en 2021 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (Norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.

En 2021 Afganistán continuó siendo el conflicto armado que provocó más víctimas mortales a nivel global durante el año (40.000), seguido de Yemen (22.000) y Siria (entre 3.800 y 5.700 personas fallecidas)

Cabe destacar que, en muchos de los conflictos armados de alta intensidad, las hostilidades y múltiples dinámicas de violencia causaron unos niveles de letalidad muy superiores al umbral de mil víctimas mortales anuales. Solo en Afganistán, el caso en el que se identificó un mayor número de personas fallecidas en 2021, el balance fue de más de 40.000 personas muertas a causa del conflicto armado. El conflicto afgano ya había sido el más letal en 2020, aunque con una cifra inferior de 20.000 víctimas mortales, y en 2019, año

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2021

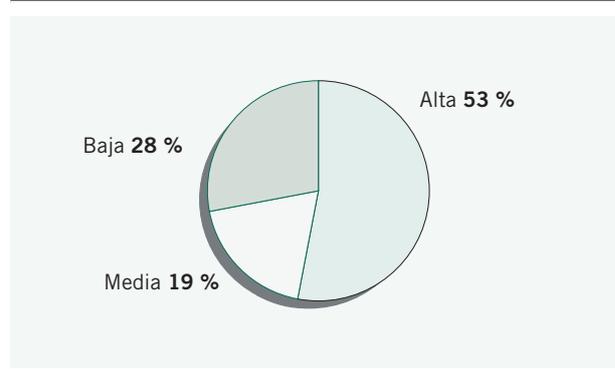
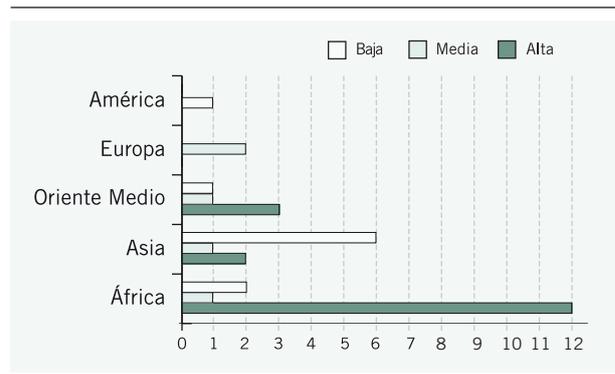


Gráfico 1.3. Proporción de conflictos armados graves en la última década



Gráfico 1.4. Intensidad de los conflictos por regiones



13. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo la tendencia registrada en períodos precedentes, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 15 casos, que representan el 47% del total. • Se mantuvo el incremento de casos de conflictos armados de alta intensidad en el continente. Si en 2016 estos casos representaban un 44% (siete de los 16 casos de entonces), en 2021 el porcentaje se elevó hasta el 80% (12 de los 15 casos en la región). Esta cifra está por encima del 73% registrado en 2020. • Prácticamente la mitad de los casos –siete de 15– evolucionaron hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad. En tres contextos –Mozambique (Norte), Sudán (Kordofán y Nilo Azul) y Libia– registraron un descenso en las hostilidades, mientras que en el resto la evolución fue similar a la del año anterior. • Todos los conflictos armados de África fueron internos internacionalizados, a excepción del que transcurre en la Región Sahel Occidental, que se considera de carácter internacional • En el trasfondo de los conflictos armados en África se identifican diversas motivaciones, entre las cuales destacan las aspiraciones a un cambio de gobierno o de sistema –una de estas categorías o ambas estaban presentes en 12 de los 15 de los casos (80%)– y las demandas de autogobierno o identitarias, identificadas en 9 de los 15 de los casos (60%). En la mitad de los casos –ocho, equivalentes a 53%– se identificaron motivaciones relativas al control de recursos, convirtiendo a África en el continente donde esta dimensión tiene el peso más significativo.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. Este caso representó un 3% del total global de conflictos armados. • El conflicto armado colombiano evolucionó negativamente en 2021 y registró mayores niveles de violencia, incrementando su intensidad respecto al año anterior, principalmente como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, el grupo armado ELN, grupos disidentes de las FARC y organizaciones paramilitares de diverso signo. • Si bien en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de África, el continente concentró el mayor número de conflictos armados, albergando nueve casos, es decir 28% del total global. • En materia de intensidad, destacó el conflicto armado en Afganistán, que fue el más letal a nivel mundial, con más de 40.000 víctimas mortales en 2021. El caso de Myanmar también fue considerado de intensidad alta, mientras que el resto de los contextos fueron de intensidad baja a excepción de Pakistán, que registró una intensidad media. • En contraste con el año anterior, en que solo un caso evolucionó hacia mayores niveles de violencia y hostilidades, en 2021 un total de cuatro conflictos armados asiáticos empeoraron: Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Myanmar. En otros tres contextos se identificó una disminución en los niveles de violencia –India (Jamu y Cachemira), India (CPI-M) y Filipinas (Mindanao) y el resto evolucionó de manera similar al período anterior. • Asia continuó siendo la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En Asia prevalecieron los conflictos armados en los que se pretendía un cambio de sistema –motivación presente en cinco de los nueve conflictos (56%)– o en los que estaban en juego demandas de autogobierno o identidad –también en un 56% de contextos. En un caso –Pakistán (Baluchistán)– el tema de los recursos fue especialmente relevante.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un conflicto armado menos que el año anterior, teniendo en cuenta la guerra de seis semanas entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj en 2020, que en 2021 derivó a una situación de tensión. Los dos conflictos armados en Europa representaron un 6% del total de casos a nivel mundial. • Si en 2020 tanto Turquía (sudeste) como Ucrania (este) habían registrado menores niveles de violencia, en 2021 este último fue escenario de una significativa escalada, de la mano del despliegue masivo de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania; mientras que el primero presentó una evolución similar a la del año anterior. Ambos contextos fueron considerados de intensidad media. • Europa siguió siendo una región caracterizada por albergar conflictos con causas vinculadas a cuestiones de autogobierno e identidad, motivaciones presentes en la totalidad de casos de la región. No obstante, en el caso de Ucrania, sobresalía la disputa entre Moscú y Kiev y entre Moscú y actores euroatlánticos en torno a cuestiones de política local e internacional como la orientación política y de seguridad y la arquitectura de seguridad en el continente. • Los dos conflictos armados en Europa fueron de carácter interno internacionalizado.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la región se contabilizaron cinco conflictos armados, que representaron un 16% del total de casos a nivel mundial. Cabe destacar que el número de casos descendió respecto al año anterior porque las dinámicas del conflicto armado en Yemen pasaron a ser analizadas conjuntamente, dada la imbricación de las hostilidades protagonizadas por diversos y numerosos grupos armados en el país. En la edición anterior del informe Alerta! el conflicto protagonizado por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y, en menor medida por la filial de ISIS en Yemen, se analizaba por separado. • Oriente Medio fue la segunda zona del mundo, después de África, en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. Más de la mitad de los casos de la región –tres de cinco, equivalentes a 60%– fueron de intensidad elevada: Iraq, Siria y Yemen. Estos dos últimos fueron los conflictos armados más letales en 2021, después de Afganistán. • La mayor parte de los casos presentaron niveles de violencia similares a los de 2020. Solo en un caso, Egipto (Sinaí) se identificó una disminución relativa de las hostilidades, aunque persistieron las dificultades para obtener información sobre los acontecimientos en este caso. Mientras, en el caso de Palestina-Israel se observó una escalada de violencia que resultó en los peores niveles de letalidad en siete años. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas a la búsqueda de un cambio de gobierno o sistema o con demandas identitarias o de autogobierno –presentes en cuatro de los cinco casos (80%). En otros dos casos (40%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

en el que también había superado las 40.000 personas fallecidas a causa de la violencia. En 2021, el segundo conflicto armado más cruento fue el de Yemen, donde se contabilizaron más de 22.000 personas fallecidas. Desde 2020 el conflicto armado yemení viene superando en letalidad al de Siria, que durante años se había situado como el más cruento de la región. En 2021, el conflicto armado en Siria continuó superando con creces el umbral de mil víctimas mortales anuales y diversos cómputos indican que habrían muerto entre 3.800 y 5.700 personas a causa de la violencia armada. Estas cifras son, sin embargo, significativamente menores a las registradas en años precedentes, cuando las hostilidades arrojaban cifras de letalidad estimadas muy superiores (30.000 en 2018; más de 50.000 en 2016 y 2015, respectivamente; más de 70.000 en 2014). Otros conflictos armados que destacaron por sus niveles de letalidad en 2021 fueron el de la Región de Sahel occidental, donde se estimaban en torno a 5.000 víctimas mortales ese año; RDC (este), con más de 4.800 personas fallecidas por la violencia; Somalia, con más de 3.000; y la Región Lago Chad (Boko Haram), con entre 1.800 y 3.800 víctimas fatales, según diversos recuentos. En otros contextos no se ofrecieron balances anuales, pero las informaciones también apuntaban a miles de muertes en 2021, como en el caso de Etiopía (Tigré).

En 2021 el panorama general de conflictos armados no se vio tan influido por la COVID-19 como en 2020. En el segundo año de la pandemia, y en un escenario caracterizado también por la progresiva disminución de las restricciones de movilidad, quedó en evidencia la escasa acogida en la práctica al llamamiento del secretario general de la ONU de marzo de 2020 para poner en marcha un alto el fuego global con el que concentrar los esfuerzos en la respuesta al coronavirus. Ello, a pesar del apoyo formal que concitó la interpelación de António Guterres: la iniciativa fue apoyada por 180 Estados, más de 800 entidades de la sociedad civil y una veintena de organizaciones armadas y fue refrendada en dos ocasiones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –resoluciones 2532 (2020) y 2565 (2021). Diversos análisis resaltaron que, pese a su gravedad, la pandemia no pareció afectar los cálculos estratégicos de las partes implicadas en conflictos armados ni se consideró como una razón suficiente para suspender las hostilidades.¹⁴ Datos dados a conocer en 2021 también confirmaron que la COVID-19, pese a sus profundas consecuencias económicas, no derivó en una disminución en los gastos militares ni en el comercio de armas, que se mantuvieron en niveles similares a años previos.¹⁵ El análisis de la conflictividad global en 2021 permite identificar algunas repercusiones de la pandemia en las dinámicas de los conflictos

armados, por ejemplo, en los flujos de combatientes en algunos contextos –en Filipinas las restricciones de movilidad por la pandemia habrían dificultado la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao–, y en la utilización e instrumentalización del coronavirus por parte de algunos gobiernos para intensificar medidas restrictivas y acallar voces críticas de la oposición, la sociedad civil y minorías.¹⁶ En lo que respecta a los conflictos armados, las consecuencias de la COVID-19 en 2021 apuntan mayoritariamente a una incidencia en el agravamiento de crisis humanitarias y afectaciones para la población civil en contextos de conflicto armado.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Siguiendo la tónica de años previos, y tal y como vienen denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, en 2021 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Durante el año los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19 y por la confluencia con otras crisis, como la emergencia climática, lo que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados.¹⁷ El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2021 y que analiza los hechos de 2020, subrayó que los conflictos armados han continuado caracterizándose por altísimos niveles de víctimas mortales civiles, además de numerosas personas heridas y seriamente afectadas por traumas psicológicos; torturas; desapariciones; violencia sexual; destrucción de viviendas, escuelas, mercados, hospitales y otras infraestructuras civiles esenciales como sistemas de agua potable y electricidad. Cabe recordar que los civiles han sido identificados por Naciones Unidas como las principales víctimas mortales de los conflictos armados.¹⁸

La evolución de los diversos conflictos armados en 2021 permite confirmar la persistencia de este patrón de abusos sistemáticos contra la población civil. Destacaron casos como el de Etiopía (Tigré), donde todas las partes involucradas en la disputa han sido acusadas de cometer atrocidades, incluyendo masacres de civiles y uso del hambre como arma de guerra, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. En Myanmar, las fuerzas de seguridad intensificaron la represión de la población civil tras el golpe de Estado

14. Richard Atwood, *A Year of COVID and Conflict: What the Pandemic Did and Didn't Do*, International Crisis Group (ICG), 2 de abril de 2021.

15. Stockholm International Peace Research (SIPRI), *World military spending rises to almost \$2 trillion in 2020*, 26 de abril de 2021, y SIPRI, *International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most*, says SIPRI, 15 de marzo de 2021.

16. Véase por ejemplo los casos de Egipto, Túnez y Chad en el capítulo 2 (Tensiones). Para más información, véase Iván Navarro Milián, "COVID-19 y vulneración de derechos humanos", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, Número 15, diciembre de 2021.

17. Para más información, véase María Villellas Ariño, "Conflictos, COVID-19 y cambio climático", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, Número 12, julio de 2021.

18. Secretario general de la ONU, *Protection of civilians in armed conflicts*, S/2021/423, 3 de mayo de 2021.

militar. Grupos armados siguieron utilizando los ataques contra civiles como instrumento para propagar el terror –como los ataques de ISIS-K contra mezquitas shiíes en Afganistán o las ejecuciones de civiles por la filial de ISIS en el Sinaí, en Egipto–, mientras que actores armados estatales también fueron señalados por abusos contra la población civil. En Egipto (Sinaí), por ejemplo, las Fuerzas Armadas fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos por indicios de ejecuciones extrajudiciales a sospechosos acusados de “terrorismo”. Actores armados de seguridad privada, como instructores militares rusos del grupo Wagner o de la compañía militar sudafricana Dyck Advisory Group también fueron acusados de abusos contra la población civil y de prácticas discriminatorias. El uso de armas explosivas tuvo un especial impacto en la población civil. Estudios recientes apuntan a que las víctimas civiles a causa del uso de este tipo de armamento en áreas pobladas representaron el 89% del total de víctimas de armas explosivas en 2020.¹⁹

Durante 2021 se alertó sobre un importante número de víctimas civiles y sobre un aumento en esta cifra en muchos casos de conflictos armados. Así, por ejemplo, en Malí, solo entre abril y junio se contabilizaron más de 500 civiles asesinados, heridos, secuestrados o desaparecidos, cifra que suponía un incremento del 25% respecto al trimestre anterior. En toda la región del Sahel Occidental las muertes de civiles –1.332 en 2021– se duplicaron respecto a 2020. En RDC (este), solo en los primeros meses del año ya se habían contabilizado más de un millar de civiles fallecidos por la violencia, la mayoría en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Uno de los casos más destacados fue Afganistán, donde solo en el primer semestre de 2021 murieron 1.659 civiles a causa de la violencia, lo que representó un aumento de 50% respecto al año anterior. En Yemen se documentaron más de 2.500 víctimas civiles a causa del conflicto en 2021, de las cuales 769 fallecidas, y diversas voces advirtieron sobre el significativo aumento de las bajas civiles en el último trimestre del año. En Siria, aunque las cifras de letalidad por el conflicto armado han bajado en los últimos años, las estimaciones apuntaban a más de 1.500 civiles fallecidos a causa de las hostilidades en 2021.

Durante 2021 continuaron las agresiones y amenazas contra personal médico, así como los ataques contra infraestructuras hospitalarias, prácticas que se consideran atentatorias contra el derecho internacional humanitario. En 2021 se registraron ejemplos en diversos contextos como Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) –donde soldados perpetraron abusos contra personal sanitario en un hospital durante una operación de búsqueda de milicianos–, Afganistán –donde un atentado contra un hospital militar en Kabul provocó decenas de muertos al

finalizar el año– o Siria –el ataque contra un hospital en la zona de Afrin provocó serios daños a la infraestructura y la muerte de al menos 18 personas. A la violencia directa contra personal sanitario y centros de salud y las presiones al sistema sanitario derivadas de las hostilidades se sumaron las consecuencias de la pandemia. En numerosos casos, se estima que los niveles de propagación de la COVID-19 eran muy superiores a lo que indicaban los datos disponibles, debido a las dificultades o imposibilidad de hacer pruebas diagnósticas. Las cifras de letalidad por coronavirus también eran más difíciles de estimar en contextos de conflicto armado. Los conflictos armados continuaron provocando y/o empeorando situaciones de crisis humanitarias, en un contexto agravado por otros condicionantes como la pandemia, la crisis económica o la emergencia climática. Según las previsiones de la principal agencia humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, en 2022 más de 274 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria, un incremento significativo respecto a los 235 millones previstos para el año anterior, que ya era la cifra más alta en décadas.²⁰ OCHA reiteró que los conflictos armados continuaban siendo la principal causa de las necesidades humanitarias a nivel global y alertó especialmente sobre el aumento sin precedentes de la inseguridad alimentaria debido a la confluencia de conflictos, impactos de la pandemia, eventos climáticos extremos y dificultades para acceder a la población necesitada, entre otros factores. Según sus estimaciones, en 2020 un total de 811 millones de personas presentaron problemas de desnutrición y en 2021 la situación continuaba deteriorándose.

Según los datos disponibles de OCHA hasta septiembre de 2021, en los primeros meses de 2021 cerca de 161 millones de personas en 42 países afrontaban inseguridad alimentaria aguda, cifra que previsiblemente se agravaría y llegaría hasta más de 280 millones debido al empeoramiento de la situación en diversos contextos al finalizar el año. Parte del incremento se atribuye a las crecientes cifras de inseguridad alimentaria en contextos como Afganistán, Myanmar y Somalia. Asimismo, se identificaron situaciones críticas, de práctica hambruna, en contextos como Etiopía, Sudán del Sur y Yemen. Según los datos de OCHA, a mediados de 2021 al menos 5,5 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria aguda en las regiones etíopes de Afar, Amhara y Tigré. Afganistán se convirtió en una de las peores crisis a nivel global, con más de 22,8 millones de personas –más de la mitad de la población– en situación de inseguridad alimentaria aguda y se esperaba que al finalizar el año hubiera 3,2 millones de menores de cinco años padeciendo malnutrición aguda. La población de Yemen, en tanto, siguió viéndose afectada por una profunda crisis humanitaria, con 16,2 millones de personas

19. Jennifer Dathan, *Explosive Violence Monitor 2020*, Action on Armed Violence, 2021.

20. OCHA, “Hunger is on the Rise. Unprecedented Levels of Food Insecurity Require Urgent Action to Prevent Famine”, *Global Humanitarian Overview 2022*, diciembre de 2021.

afrontando niveles de inseguridad alimentaria aguda, de las cuales cinco millones en situación de emergencia. Las consecuencias de la violencia del conflicto, la COVID-19 y la crisis humanitaria y económica también fueron patentes en contextos como Siria, donde aumentó en un 21% la población necesitada de asistencia respecto al año anterior. En este caso, el precio de la canasta básica de alimentos aumentó en un 128% en comparación con 2020. Se estima que el 90% de la población siria vivía en una situación de pobreza y que 12,4 millones de personas –casi el 60% de la población– afrontaba inseguridad alimentaria. En Myanmar, el golpe de Estado militar derivó en una enorme crisis económica a la que se sumó el agravamiento del impacto de la pandemia.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado a mediados de 2021 documentó casi 26.500 violaciones graves contra menores en 21 contextos (de las cuales unas 24.000 correspondían a 2020 y otras 2.500 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2020).²¹

El reclutamiento forzado de menores, los menores muertos o heridos a causa de la violencia, la denegación de acceso a ayuda humanitaria y la detención de menores por asociación o sospechas de vínculos con grupos calificados como terroristas estuvieron entre las vulneraciones más frecuentes. Especial preocupación causó el significativo incremento de los secuestros de menores –que aumentó un 90%– y de la violencia sexual –70%. Este último fenómeno afectó principalmente a niñas, que constituían el 98% de las víctimas de la violencia sexual contra menores. El reclutamiento forzado, en cambio, afectó de manera especial a los niños, 85% de los menores afectados por esta práctica. Según el informe del secretario general de la ONU, los conflictos armados en los que se identificó y verificó un mayor número de vulneraciones contra menores de edad fueron Afganistán, RDC, Somalia, Siria y Yemen. Los datos sobre los conflictos armados en 2021 apuntan a una persistencia de estos abusos, con ejemplos en diversos contextos. En Mozambique, grupos de defensa de la infancia alertaron sobre el reclutamiento de niños y el uso de menores como objetivos de guerra; en RCA se denunciaron ejecuciones de menores de edad por parte de las fuerzas gubernamentales y el grupo de seguridad Wagner; en RDC (este) la ONU reiteró las denuncias sobre el uso de menores como combatientes; en Myanmar se registró la muerte de menores en el marco de la represión gubernamental a las protestas pacíficas contra el golpe de Estado; en Yemen se insistió en los impactos de las armas explosivas y del

Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas

fuego de artillería en los niños y niñas; y en contextos como Iraq o Israel-Palestina se subrayó el importante porcentaje de menores entre las víctimas civiles. Por otro lado, la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicó un informe, resultado de una investigación de ocho años, sobre los abusos cometidos contra población de mayor edad, a partir de 50 años, en contextos de conflicto.²² Tras analizar antecedentes de diversas vulneraciones en contextos como Camerún, RCA, Etiopía, Malí, Mozambique, Sudán del Sur, Myanmar, Ucrania, Israel-Palestina o Siria, HRW concluyó que tanto fuerzas gubernamentales como actores armados no estatales han perpetrado múltiples abusos, entre ellos ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos, violencia sexual, secuestros y destrucción de sus hogares y propiedades. El informe destaca que durante las hostilidades muchas personas de mayor edad deciden no abandonar sus hogares porque piensan que no serán objeto de violencia o con la intención de proteger los bienes de sus familias. En otros casos se niegan a abandonar sus lugares de residencia por la experiencia de desplazamientos forzados previos o simplemente son incapaces de huir, debido a limitaciones de movilidad o porque sus familias no pueden ayudarles.

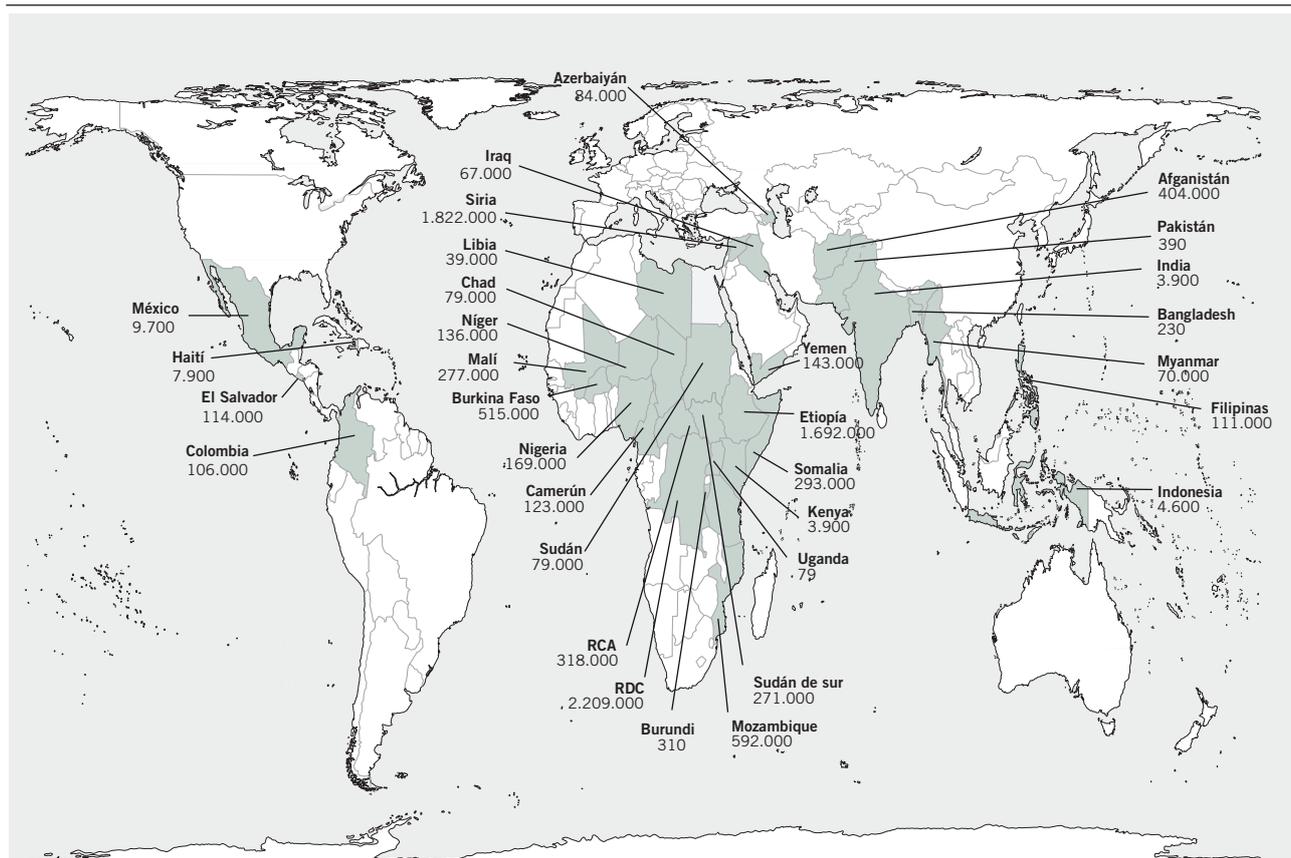
Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas. El informe del secretario general de la ONU que anualmente aborda esta problemática –y que analiza los hechos transcurridos en 2020– destacó los efectos de la pandemia en la amplificación de las desigualdades de género, que están en la base de la violencia sexual tanto en tiempos de guerra como de paz. De manera particular, la COVID-19 generó nuevas preocupaciones en el ámbito de la violencia sexual debido a sus repercusiones en términos de militarización, por el aumento de controles y cierres fronterizos; la restricción del espacio de trabajo para las organizaciones de mujeres; el acoso sexual a trabajadoras de la salud; o la violencia sexual contra mujeres detenidas por vulnerar los períodos de confinamiento. El secretario general de la ONU llamó la atención especialmente sobre el impacto de la pandemia en las poblaciones desplazadas por conflictos armados, dado el incremento en los riesgos de violencia sexual, explotación sexual y tráfico de personas, acentuados por la crisis económica y la reducción y/o dificultades de acceso de la ayuda humanitaria. Asimismo, se constataron los problemas añadidos para documentar la problemática de la violencia sexual debido a las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19 y la falta de acceso a servicios de asistencia.²³

21. UN secretary general, *Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict*, A/75/873-S/2021/437, 6 de mayo de 2021.

22. Human Rights Watch, *No One is Spared. Abuses Against Older People in Armed Conflict*, febrero de 2022.

23. Secretario general de la ONU, *Conflict-related sexual violence*, S/2021/312, 30 de marzo de 2021.

Mapa 1.2. Nuevos desplazamientos por conflictos y violencia en 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2021*, GRID, mayo de 2021.

El informe sobre violencia sexual presentó los antecedentes que la ONU logró documentar en 18 contextos y que involucraron a 52 actores armados, en su mayoría grupos no estatales, aunque como en años anteriores también se identificó la implicación de fuerzas militares y de seguridad en diversos conflictos. En línea con períodos previos, se confirmó el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, tortura y terrorismo. Se destacan casos como Etiopía (Tigré) tras el inicio de las operaciones militares en la región en noviembre de 2020, Camerún, RCA o RDC. También se alerta sobre los mecanismos negativos para paliar la crisis económica acentuada por la pandemia, en particular sobre los matrimonios de niñas de hasta 10 años de edad de poblaciones desplazadas internamente en casos como Iraq, Siria o Yemen. Asimismo, se llama la atención sobre los vínculos entre violencia sexual, tráfico de personas de contextos en conflicto y extremismo violencia de género y sus impactos desproporcionados en mujeres y niñas. En esta línea, se alerta sobre la situación de las viudas y de los hijos e hijas de presuntos extremistas en contextos como Afganistán e Iraq, afectadas por el estigma social y, en muchos casos, por detenciones sin debido proceso. En

cuanto al análisis de casos en 2021, se denunciaron nuevos episodios de violencia sexual en contextos como Etiopía (Tigré), RCA, RDC (este), Libia, Siria o Yemen. Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. A finales de 2020 se contabilizaban 82,4 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial –más del doble que una década atrás– y las previsiones de ACNUR con los datos disponibles del primer semestre de 2021 apuntaban a que la cifra ya había superado los 84 millones de personas.²⁴ Cabe destacar que las cifras de desplazamiento forzado se redujeron temporalmente a causa de la pandemia y las medidas de restricción de movilidad orientadas a contener el virus, pero a partir de finales de 2020 ya se observó una recuperación de la tendencia previa.²⁵ Según los datos de ACNUR, en el primer semestre de 2021 se habían producido más de 4,3 millones de nuevos desplazamientos, un significativo incremento respecto al año anterior y una cifra más alta que en el período pre-pandemia. La escalada de violencia y hostilidades en escenarios como Afganistán, RDC, Etiopía, Mozambique, Sudán

24. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

25. Para más información, véase Pamela Urrutia Arestizábal, "Conflictos, COVID-19 y desplazamiento forzado", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, número 13, octubre de 2021.

del Sur y países de la región del Sahel motivaron importantes desplazamientos forzados en los primeros seis meses de 2021. Solo en RDC se registró el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas en la primera mitad del año. En Afganistán el avance talibán motivó el desplazamiento de centenares de miles de personas y en el período previo a la toma de Kabul se estimaba que unas 30.000 personas estaban abandonando el país semanalmente. Según ACNUR, el 82% de las personas que cruzaron fronteras para huir de situaciones de conflicto, violencia o persecución procedían de tan solo diez países. El primero de ellos siguió siendo Siria, con más de 6,8 millones de personas refugiadas, la mayoría en países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania e Iraq, pero también en Alemania. Después de Siria se ubicó Venezuela, Afganistán –que se convirtió en el tercer país de origen de población refugiada, con más de 2,6 millones de personas–, Sudán del Sur, Myanmar, RDC, Sudán, Somalia, RCA y Eritrea.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) — anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM)
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han

acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

El año estuvo caracterizado por un ligero descenso de la violencia armada en la provincia de Cabo Delgado en relación al año anterior, así como por el despliegue de fuerzas militares de distintos actores internacionales para ayudar a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en la lucha contra la insurgencia yihadista. En 2021, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) registró 1.067 muertes violentas en la provincia de Cabo Delgado, lo cual significa una reducción en relación a las 1.639 producidas en 2020, año en el que se registró la tasa de muertes más alta de la última década en el país.²⁶ Sin embargo, la intensidad de la violencia en 2021 siguió siendo muy superior a la registrada en la zona en los primeros años de la insurgencia, cuando se contabilizaron 119 muertes en 2017, 126 en 2018 o 689 en 2019. En total, a finales de 2021 se estimaba que unas 3.500 personas habían perdido la vida desde el estallido de la violencia a finales de 2017 y que alrededor de 800.000 personas habían tenido que desplazarse forzosamente de sus hogares.

Entre los acontecimientos más significativos registrados durante el año, en el mes de enero se produjeron intensos ataques yihadistas contra una importante planta de gas natural en Quitunda, **distrito de Palma**, operada por la compañía francesa de petróleo y gas Total, que obligó a la suspensión de las actividades del proyecto de gas natural licuado. Dichos ataques generaron que el presidente Filipe Nyusi sustituyera al jefe de las Fuerzas Armadas, Lázaro Menete, por el general Eugenio Mussa, quien falleció apenas tres semanas después de su nombramiento a causa de COVID-19, según fuentes oficiales. Su muerte hizo que Nyusi nombrara el 12 de marzo a Joaquim Rivas Mangrassa como nuevo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. A principios de febrero las fuerzas mozambiqueñas **lanzaron una ofensiva en los distritos de Muidumbe y Mocimboa da Praia en un intento por recuperar la capital del distrito, Mocimboa da Praia, que ha estado bajo el control de los insurgentes desde agosto de 2020. En marzo se volvió a registrar una nueva ofensiva yihadista contra la ciudad de Palma, reivindicada por ISIS, que dejó decenas de**

26. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

muertos –incluidos extranjeros por primera vez desde que comenzó el conflicto– y alrededor de 70.000 personas desplazadas por la violencia. El Gobierno mozambiqueño informó que había recuperado el control de la ciudad el 4 abril, después de una intervención militar conjunta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y la compañía militar privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG). La ONG Amnistía Internacional denunció que la operación de rescate de la ciudad llevada a cabo por la empresa DAG se vio empañada por la discriminación racial, siendo evacuados los contratistas blancos antes que los negros.

De manera paralela, durante el año la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) llevó a cabo diversas cumbres sobre la situación de seguridad en Cabo Delgado. Después de varias reuniones canceladas debido a la COVID-19, el 8 de abril, en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la SADC, el organismo regional acordó enviar una misión técnica a Cabo Delgado para elaborar un plan de apoyo a la seguridad. La misión recomendó enviar una fuerza regional militar-policial compuesta por 3.000 efectivos. Posteriormente, en una nueva cumbre extraordinaria celebrada el 23 de junio, la SADC aprobó el despliegue de una Fuerza de Reserva a la región norteña, sin determinar el número de tropas. Un día después, el Gobierno de **Ruanda** anunció un acuerdo bilateral con el Gobierno de Mozambique para el despliegue de una fuerza conjunta del Ejército y Policía ruandesa compuesta por mil efectivos para ayudar a combatir la insurgencia en Cabo Delgado, que se hizo efectivo el 9 de julio desarrollando acciones militares en los distritos de Palma, Muidumbe y Mocimboa da Praia. De forma paralela, fuerzas especiales de **Sudáfrica** se desplegaron el 19 de julio en Pemba, capital de Cabo Delgado, con el objetivo de facilitar el camino para el despliegue de la Fuerza de Reserva de la SADC. El Gobierno sudafricano se comprometió a enviar 1.495 soldados como parte de la fuerza regional. El 8 de agosto, Mozambique y Ruanda anunciaron que las fuerzas conjuntas habían recuperado el control total de la ciudad estratégica de Mocimboa da Praia. Un día después del anuncio, la **Fuerza de Reserva de la SADC (SAMIM)** se desplegó oficialmente en Cabo Delgado, compuesta inicialmente por 757 soldados, muy lejos de los 3.000 recomendados por el equipo técnico de la SADC. De forma paralela, otros actores internacionales también contribuyeron durante el año a reforzar la estrategia securitaria. **Portugal y EEUU** proporcionaron entrenamiento militar a las tropas mozambiqueñas, y también la **UE** estableció formalmente el 12 de julio una misión militar de entrenamiento a las Fuerzas Armadas mozambiqueñas compuesta por mil efectivos europeos que estará dos años en el país. También a principios de año los Gobiernos de Mozambique y **Tanzania** acordaron reanudar y fortalecer la comisión conjunta de defensa y seguridad. El Departamento de Estado de EEUU había designado en marzo a los insurgentes de Cabo Delgado

Actores internacionales como la SADC o Ruanda desplegaron fuerzas militares en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado

como organización terrorista vinculada con ISIS bajo liderazgo del tanzano Abu Yasir Hassan.

El despliegue de las tropas internacionales fue seguido de varios ataques reivindicados por ISIS en diferentes distritos de la región (Mocimboa da Praia, Muidumbe y Palma), en los cuales se utilizaron **artefactos explosivos improvisados** que supuestamente contenían elementos de minas terrestres, lo cual supuso una nueva táctica por la insurgencia en la zona. A principios de septiembre las operaciones conjuntas de las tropas de Mozambique, Ruanda y SAMIM se ampliaron a la **provincia de Niassa** (frontera con Cabo Delgado), después de información de inteligencia que alertaba sobre una posible expansión de las acciones yihadistas.

Finalmente, durante el año se volvieron a registrar diferentes incidentes relacionados con la **vulneración de derechos humanos** en la región. En marzo, Amnistía Internacional acusó a las insurgencias, así como al Gobierno mozambiqueño y a la empresa DAG de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra en 2020. También la ONG Save the Children en Mozambique acusó a los grupos armados que operan en el norte de utilizar a menores como objetivos de guerra. En este mismo sentido, UNICEF y Human Rights Watch (HRW) denunciaron a principios de octubre que la insurgencia había secuestrado y reclutado a cientos de niños y niñas en la región noreste. También un informe de HRW denunció que desde 2018 la insurgencia había secuestrado a más de 600 mujeres y niñas, y solicitó a las autoridades que investiguen las denuncias de explotación sexual y abuso de mujeres desplazadas a cambio de ayuda humanitaria en Cabo Delgado.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebiallem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

Persistió la escalada de la violencia en las dos regiones anglófonas del oeste de Camerún como consecuencia de las acciones de los actores armados secesionistas, así como del excesivo uso de la fuerza, abusos y ejecuciones extrajudiciales en el marco de las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y las milicias locales. Los grupos armados también cometieron algunos ataques fuera de ambas provincias. Según el centro de investigación ACLED, en 2021 murieron 915 personas como consecuencia del conflicto que afecta la región y sus alrededores (provincias de Noroeste, Suroeste y las vecinas Litoral, Oeste y Centro). Diversos líderes insurgentes fueron ejecutados o capturados en diferentes momentos del año, como los generales Nokia y Cobra (capturados en marzo y abril, respectivamente), o Small Pikin (ejecutado en enero), Blink y Idi Amin Dada (ejecutados en abril), y Rambo (ejecutado en julio), entre otros. En abril, la coalición opositora Consejo de Gobierno de Ambazonia (Ambazonia Governing Council, AGovC) y el grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) anunciaron una alianza a la que Yaoundé y Abuja respondieron en agosto anunciando la colaboración de los cuerpos de seguridad de ambos países contra las insurgencias

respectivas. Durante el año fue en aumento el uso de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) por parte de la insurgencia contra vehículos y destacamentos militares, causando decenas de víctimas mortales. En septiembre la facción Gobierno Interino de Ambazonia (IG Sisiku) declaró tres semanas de cierre total de la actividad en ambas provincias. Las acciones insurgentes se incrementaron en vísperas del cuarto aniversario de la proclamación de la independencia en la región autodenominada Ambazonia (que forman las dos regiones de mayoría anglófona, Noroeste y Suroeste) el 1 de octubre, aumentando la presencia de puestos de control de la insurgencia y los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Ese día, los movimientos separatistas forzaron el cierre (huelga general y toques de queda) y realizaron desfiles en ambas provincias. La celebración del torneo futbolístico Copa de África de Naciones en Camerún entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022 hizo temer una escalada de la violencia en las regiones anglófonas, ya que algunos encuentros se disputaban en localidades de las regiones anglófonas.

Las organizaciones humanitarias continuaron operando en unas condiciones muy difíciles, debido a la persistencia de la violencia, el uso de artefactos explosivos, así como las demandas de pagos ilegales y extorsión en los puestos de control irregulares dentro de algunas comunidades, que continuaron exponiendo a los trabajadores humanitarios y a la población civil a altos riesgos y obstaculizaron su libre circulación. La muerte de una niña de cinco años en un puesto de control de Buea (capital de la región del Suroeste) tras ser tiroteado el coche por parte de un policía militar por negarse el conductor a pagar la extorsión, provocó la reacción de miles de personas denunciando los abusos del Ejército, disturbios y el linchamiento y ejecución del policía. Dicho incidente intensificó las tensiones intercomunitarias entre la comunidad anglófona y francófona en el país y en los medios de comunicación. OCHA destacaba en diciembre que había 2,2 millones de personas afectadas por la situación humanitaria en las provincias de Noroeste y Suroeste, con prácticamente 600.000 personas desplazadas internas en ambas provincias y casi 70.000 personas refugiadas en la vecina Nigeria. La neutralidad de infraestructuras civiles como hospitales y escuelas fue violada de forma permanente por ambas partes. Un ejemplo de ello fue la irrupción de soldados en el hospital de Kumbo, en Noroeste, en noviembre, cometiendo abusos contra el personal sanitario en busca de milicianos, que fue condenada por la Iglesia Católica y las delegaciones diplomáticas presentes en el país, acción calificada por el diputado británico David Alton como crimen de guerra; Alton cuestionó a su Gobierno por la inacción ante el conflicto, a lo que el Gobierno británico tuvo que responder afirmando que el 15 de noviembre, junto a las delegaciones de Canadá, Suiza y EEUU, había condenado los ataques a civiles y habían instado a las partes a promover el diálogo. En agosto, más de 60 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos hicieron un

llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para intentar que el conflicto esté más presente en la agenda internacional.²⁷ La disputa es considerada como una de las crisis humanitarias más olvidadas de la actualidad, según diversos análisis, como señala Norwegian Refugee Council. Además, se produjeron numerosas iniciativas por parte de los actores de la sociedad civil y de los grupos político-militares para relanzar el proceso de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, los contactos entre el Gobierno y los grupos político-militares para promover una solución negociada al conflicto continuaron estancados.²⁸

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Belgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente

desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Un año más se mantuvo la situación de inestabilidad en el país, caracterizado por tres importantes dinámicas:

el mantenimiento de la situación de inseguridad, concentrando la mayor violencia en la región central y aumentando en la región sur; la crisis de gobernanza que dio lugar a un nuevo golpe de Estado en el país; y el aumento de las tensiones al interior del complejo de seguridad internacional. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el 2021 se registraron 995 eventos violentos, incluyendo batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados en todo el país, concentrados en las regiones norte, centro y sur, que dejaron un balance de 1.887 personas fallecidas. Si bien el número de eventos violentos registrados fue similar al año anterior, la letalidad de los mismos fue significativamente menor (2.731 muertes en 2020). Estos datos representan un descenso importante en relación al número de muertes registradas durante el 2020, año que se caracterizó por ser el que más muertes provocó en el país desde que estalló la última ola de violencia. En total, desde el inicio del conflicto armado en el año 2012, alrededor de 12.000 personas han perdido la vida en el país. Asimismo, la inestabilidad y la inseguridad siguieron forzando el **desplazamiento de miles de personas**, así como aumentando las necesidades humanitarias. En lo relativo al número de personas desplazadas internamente, estas casi se han cuadruplicado en dos años, registrándose, a finales de 2021, 400.000 personas. Este aumento se explica principalmente por el deterioro de la situación de seguridad en las regiones centrales de Ségou y Mopti, así como en la norteña Tombuctú. Del mismo modo, en octubre, más de 154.000 malienses se encontraban refugiadas en los países vecinos, sobre todo en Burkina Faso y Mauritania. Paralelamente, Malí también proporciona refugio a casi 45.000 refugiados de Burkina Faso (13.000), Níger (17.000) y Mauritania (15.000). La violencia y los efectos del cambio climático en el país también generaron una **alarmante crisis humanitaria**. A finales de 2021 se estimaba que alrededor de 1,3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria, principalmente en las regiones de Gao (el 41,5% de la población), Mopti (40,8 %), Kidal (29,6 %), Tombuctú (26,5%) y Kulikoró (26,1%). Según datos del secretario general de la ONU sobre la

27. Global Centre for the Responsibility to Protect, *Cameroon: Multilateral action is urgently needed*, 17 de agosto de 2021.

28. Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

situación económica del país, se estima que en el año 2020 el 41,9% de la población se encontraba en la pobreza extrema, sin embargo, el gasto en materia de seguridad en el presupuesto nacional de 2022 aumentó un 21%, hasta los 357,7 millones de dólares, superando los aumentos presupuestarios en otras partidas como salud (11%) o educación (4,4%).²⁹

En relación al desarrollo de los **escenarios de conflictividad armada**, durante el año se mantuvo la tendencia de deterioro de la seguridad en Malí, caracterizada por el aumento de ataques contra civiles y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. En este sentido, la MINUSMA informó que, entre abril y junio, al menos 527 civiles fueron asesinados, heridos, secuestrados o desaparecidos –lo cual representa un aumento de más del 25% desde el primer trimestre de 2021– debido principalmente a la acción de Jamaat Nusrat al-Islam walMuslimin (JNIM) y otros grupos yihadistas como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Por otro lado, en términos generales, la región central (Mopti y Ségou) siguió siendo el epicentro de la violencia, aunque en el segundo semestre del año se registró un desplazamiento de la violencia hacia la región sur del país (Sikasso).

Entre los eventos más destacados del año, a principios de enero se produjo un ataque con drones francés en una boda en el pueblo de Bounti, en Mopti (centro), que dejó 19 muertos y generó una ola de protestas antifrancesas en el país. El 15 de marzo, en la región de Gao (norte), presuntos militantes del ISGS tendieron una emboscada a una patrulla del Ejército cerca de la ciudad de Tessit, distrito de Ansongo, matando al menos a 33 soldados, en el ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad en meses. El 13 de abril, hombres armados no identificados asesinaron a Sidi Brahim Ould Sidati, líder de la ex-rebelde Coordinación de Movimientos Azawad (CMA), firmante del acuerdo de paz de Argel de 2015, en la capital Bamako. En las regiones del centro, se logró una tregua en abril entre Katiba Macina y miembros de grupos de autodefensa donso en el distrito de Niono, Ségou, aunque esta no logró contener la violencia durante el resto del año. En agosto, la operación francesa Barkhane informó de la muerte del líder del ISGS, Adnan Abu Walid al-Sahraoui, en un ataque con drones en el norte de Malí, información que fue confirmada en octubre por el ISGS. También se informó de la muerte, a mediados de octubre, de Nasser al-Tergui, uno de los líderes de JNIM, afiliada a al-Qaeda.

A las dinámicas de inseguridad en el país, se sumó en mayo una **nueva crisis política debido a un nuevo golpe de Estado** que se tradujo en el aumento de las tensiones entre la nueva Junta militar y la comunidad

internacional, cuyos efectos se trasladaron al complejo militar de seguridad. El 24 de mayo, el coronel Assimi Goïta –hasta entonces vicepresidente de transición y líder del golpe de Estado de agosto de 2020– encabezó un nuevo golpe militar que derrocó al primer gobierno de transición presidido por Bah N’Daw, autoproclamándose nuevo presidente del país, y nombrando a Choguel Kokalla Maïga como primer ministro. El golpe generó reacciones diferentes en el interior y exterior del país. En el interior, se produjeron manifestaciones de apoyo a los militares que expresaban la frustración con el anterior gobierno. A nivel internacional, los principales socios de Malí, incluido el bloque regional CEDEAO, UA, UE, Francia o EEUU, entre otros, condenaron la acción de la Junta. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una condena por unanimidad, pero no llegó a incluir medidas coercitivas tras el bloqueo de Rusia y China. La UA y la CEDEAO suspendieron a Malí del organismo. El Banco Mundial congeló los pagos al país. Francia suspendió temporalmente, el 3 de junio, las operaciones militares conjuntas con las tropas malienses, que se reanudaron un mes después. El 16 de septiembre la CEDEAO impuso las primeras sanciones, que generaron manifestaciones en contra. Posteriormente, tras el anuncio de Goïta de que no se cumpliría el plazo para la celebración de las elecciones previstas para febrero de 2022, el 7 de noviembre la CEDEAO impuso nuevas sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos a 149 funcionarios estatales (sin incluir a Goïta, en un aparente intento de mantener abierta la línea de comunicación). La UE también anunció el 15 de noviembre la imposición de sanciones a “aquellos que obstruyen” la transición de Malí.

De forma paralela, el golpe militar y la negativa de la junta a respetar la fecha de la celebración de elecciones, así como las manifestaciones antifrancesas en el país, generaron importantes **tensiones entre los gobiernos de Malí y Francia**. El 10 de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el fin de la Operación Barkhane en el Sahel en su formato actual, informando del fortalecimiento de la fuerza europea Takouba. El 9 de julio, durante la cumbre del G5 Sahel, Macron detalló la reconfiguración de la presencia militar francesa en el Sahel, informando que reduciría a la mitad el número de tropas y cerraría tres bases militares en el norte de Malí a principios de 2022. Días después, el 15 de julio, el secretario general de la ONU solicitó al Consejo de Seguridad que aumentara la fuerza autorizada de la MINUSMA en 2.069 efectivos. A este respecto, Chad anunció el 18 de diciembre el envío de 1.000 soldados adicionales para reforzar la MINUSMA. En octubre Francia comenzó la retirada de las fuerzas francesas de la Operación Barkhane de la región de Kidal, posteriormente de Tessalit, y el 14 de diciembre

El nuevo golpe de Estado producido en Malí en el mes de mayo y la llegada de fuerzas rusas al país tensionó las relaciones entre el Gobierno maliense y sus socios occidentales

29. Secretario general de la ONU, *La situación en Malí*, S/2021/1117, 4 de enero de 2022.

abandonó oficialmente Tombuctú, entregando las bases al Ejército maliense.

En medio de las tensiones con Francia y los socios europeos, el Gobierno de Malí anunció un **acuerdo con Rusia para el despliegue de fuerzas rusas en el país** –que según informes de prensa serían al menos mil militares de la empresa de seguridad privada rusa Wagner Group, aunque tanto el Gobierno de Malí como el de Rusia lo negaron. 16 países europeos y Canadá condenaron conjuntamente el 23 de diciembre el presunto despliegue de mercenarios de Wagner en Malí, y Francia declaró que su presencia sería “incompatible” con la continuidad francesa. Anteriormente, el 13 de diciembre, la UE impuso sanciones a Wagner Group por presuntamente cometer graves abusos contra los derechos humanos en varios países, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. En el país se produjeron varias manifestaciones en apoyo del acuerdo con Rusia.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la región del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas

Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Persistieron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria, la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y violaciones generalizadas de los derechos humanos. La muerte del líder del grupo armado JAS, Abubakar Shekau, desencadenó la rendición de miles de combatientes y el reclutamiento de parte de ellos por el grupo rival ISWAP. El fiscal de la CPI en diciembre de 2020 había dictaminado que había bases razonables para considerar que tanto los cuerpos de seguridad nigerianos como las facciones de BH habían cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en el país. La rendición de gran parte de los miembros del JAS y la reestructuración de ISWAP repercutió en una reducción de la violencia en el noreste de Nigeria en algunos momentos del año. JAS, Ansaru y, principalmente, ISWAP, continuaron con su dinámica de ataques contra bases militares y destacamentos, incluidos ataques suicidas, secuestros y ejecución sumaria de civiles y trabajadores humanitarios.

En el caso de Nigeria, las autoridades alertaron de que las acciones de Boko Haram se extendieron más allá del noreste y se ampliaron a regiones circundantes del Middle Belt nigeriano (Cinturón Central). Coincidiendo con el Ramadán, entre mediados de abril y mediados de mayo se produjo un incremento de los ataques por parte de los grupos yihadistas. Según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST), el número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa se redujo respecto a años anteriores (1.810 en 2021 frente a 2.603 en 2020, 2.607 en 2019, 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017). El balance de las acciones de BH y de los enfrentamientos entre las facciones de BH y las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 solo en estos estados nigerianos es de 41.932 víctimas mortales, según la base NST. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2021 se registraron 3.792 víctimas mortales en la región (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad). En el conjunto de Nigeria, el país más afectado por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,73 millones de personas desplazadas internas a diciembre de 2020 según IDMC, de los cuales cerca de dos millones se encontraban desplazados en el noreste del país, según OCHA, y unas 257.000

personas habían buscado refugio en los países vecinos. **OCHA alertó que el noreste estaba afectado por la peor crisis humanitaria de los últimos cuatro años**, y destacó que 5,1 millones de personas se encontraban en una grave situación humanitaria. La situación de seguridad se había deteriorado como consecuencia del conflicto afectando a la mayoría de las regiones del norte más allá de las regiones tradicionalmente afectadas.

Así, entre enero y junio se produjeron alrededor de 294.000 nuevos desplazamientos, un significativo incremento respecto a los 169.000 nuevos desplazamientos para todo el 2020.

El hecho más destacado del año fue la muerte el 20 de mayo del líder de la facción JAS, Abubakar Shekau, quien se suicidó para escapar de la captura por parte del grupo rival ISWAP en el estado de Borno (noreste). Esta acción vino precedida de una importante ofensiva de ISWAP en el bastión de Shekau en Sambisa Forest y la toma de territorios que anteriormente estaban bajo su control. ISWAP confirmó el 6 de junio el suicidio de Shekau, y el 26 de junio se emitió un video de combatientes rivales de ISWAP y JAS que juraban lealtad al Estado Islámico (ISIS). Su muerte provocó que en los meses siguientes miles de combatientes del grupo abandonaran las armas y se entregaran a las autoridades, a la vez que la facción ISWAP incrementara el reclutamiento en masa de combatientes de JAS e intentara ocupar el espacio que JAS estaba abandonando.

El Ejército anunció el 2 de septiembre la rendición de unos 6.000 combatientes del JAS en las semanas y meses previos, y las autoridades señalaron que el programa de DDR en marcha desde 2016, Safe Corridor, se estaba viendo desbordado por la situación. Un mes después de la muerte de Shekau, el joven de 24 años Bakura Modu fue nombrado como nuevo líder del JAS en sustitución de Shekau.³⁰

El nuevo líder, que apareció en un video, habló de la disposición del grupo a trabajar en colaboración con ISIS. La muerte de Shekau debilitó al grupo, que manifestó sus dudas sobre la capacidad del nuevo líder para dar continuidad al grupo armado. Semanas antes de su muerte, Shekau había ejecutado a diversos comandantes del JAS por supuesta traición, entre ellos Abu Fatimah, y había nombrado a Abu Muhammad como nuevo comandante militar. En julio se constató una pausa en los ataques por parte de ISWAP en el estado de Borno, ya que, según destacó el centro de investigación International Crisis Group, el grupo reorganizó su liderazgo según las instrucciones del Estado Islámico (ISIS), y el ISWAP restituyó a Abbah Gana como líder del llamado Califato Islámico de África (región que engloba la cuenca del Lago Chad, entre Nigeria, Chad, Níger y Camerún).

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Mali, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de inseguridad e inestabilidad en el Sahel occidental mantuvo la tendencia de los últimos años debido a la crisis de gobernanza en la región, la persistencia de los episodios de violencia y la crisis en

30. Maina, Maina, *Bakura Modu replaces late Shekau as Boko Haram's leader*, *Daily Post*, 19 de junio de 2021.

el complejo militar regional-internacional de seguridad debido a la llegada de Rusia a la región. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos (ACSS), durante el 2021 se registraron 2.005 eventos violentos en el Sahel (específicamente Burkina Faso, Malí y el oeste de Níger) relacionados con acciones de grupos armados de corte yihadista, lo cual representa un aumento del 70% con respecto al año anterior, cuando se registraron 1.180 episodios violentos. Burkina Faso concentró el 58% de todos los eventos violentos en la región. Estos episodios de violencia generaron 4.839 muertes, lo cual representa un 17% más que el año anterior (4.250), y sitúa a la región del Sahel occidental como la más mortífera por acciones vinculadas a grupos yihadistas que cualquier otra región de África (Lago Chad, Somalia, África Central o Mozambique). De hecho, si bien en toda África las muertes reportadas vinculadas a acciones armadas de estos grupos se redujeron en un 7% en 2021 con respecto al año anterior, Sahel fue la excepción. De manera particular, los ataques contra población civil (833) y las muertes relacionadas (1.332) en el Sahel, se duplicaron desde 2020.

También se destaca que el número de batallas entre las fuerzas de seguridad y los grupos yihadistas en la región aumentaron durante el 2021, con dos características: por un lado, aumentaron en un 50% los enfrentamientos con los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'at Nusrat al Islam walMuslimin (JNIM o GSIM)–, mientras que los enfrentamientos con el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) experimentaron una disminución del 45%. De forma específica por país, según datos facilitados por ACLED en 2021 (que registra un mayor número de eventos violentos que los señalados por ACSS (2.448), así como de muertes (5.279) en la región), en Burkina Faso se registraron 1.289 episodios de violencia que dejaron un balance de 2.290 víctimas mortales; en Malí se produjeron 995 eventos violentos concentrados en las regiones norte, centro y sur del país que costaron la vida a 1.887 personas; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillabéri –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 164 eventos violentos, ocasionando al menos 1.102 muertes.³¹

Una de las principales consecuencias que sigue generando el incremento de la inestabilidad fue el desplazamiento forzado de personas. A finales de 2021 alrededor de 2,5 millones de personas se encontraban desplazadas de sus hogares, incluidos 190.000 personas refugiadas y 2,2 millones desplazadas

La ONU alertó sobre el deterioro de la crisis de seguridad, climática y humanitaria en la región del Sahel que ha generado que millones de personas se encuentren en situación de inseguridad alimentaria aguda

La firma de un acuerdo militar entre Malí y Rusia amenaza con transformar las coaliciones militares internacionales en el Sahel

internas, siendo Burkina Faso el país más afectado, con aproximadamente 1,6 millones de personas desplazadas, lo cual representa el 60% del total. Desde el año 2013, cuando se registraron 217.000 personas desplazadas, se ha multiplicado por diez la cifra de desplazamiento forzado. En 2021 se registraron casi medio millón de nuevos desplazamientos.

En Níger, el número de desplazados internos en las regiones de Tillabéri y Tahoua aumentó un 53%, mientras que Malí registró un aumento del 30% con respecto al año anterior. Asimismo, la situación humanitaria en toda la región siguió siendo muy preocupante debido a los impactos combinados de la inestabilidad, la violencia, los desplazamientos forzados, la malnutrición y las enfermedades, impactando en la creciente inseguridad alimentaria que está afectando a millones de personas en África Occidental y el Sahel. La ONU estima que, para el próximo año, cuando llegue la temporada de sequía en la región, unos 35,8 millones de personas padecerán inseguridad alimentaria aguda, lo cual representa un aumento alarmante del 24% en comparación al 2020, según la última encuesta de Clasificación de Fase de Seguridad Alimentaria Integrada (IPC) que las agencias humanitarias utilizan para medir los niveles de necesidad.

En lo que respecta a los episodios de violencia, a pesar de las misiones militares nacionales, regionales e internacionales, la situación de la seguridad siguió siendo compleja. Las acciones armadas siguieron ampliándose en la triple frontera de Liptako-Gourma, dirigidas principalmente contra las fuerzas de seguridad y la población civil. En Malí, la misión de la ONU (MINUSMA) siguió siendo objetivo de ataques armados por parte de organizaciones yihadistas. El 9 de julio AQMI y JNIM realizaron un llamamiento conjunto (el primero después de tres años sin ninguna comunicación importante) en el que instaban a sus combatientes a seguir luchando contra las fuerzas locales e internacionales. El 25 de julio, JNIM reivindicó la autoría de ocho atentados en el norte de Malí contra bases y convoyes de la MINUSMA.

También en las regiones centrales del país (Mopti y Ségou) la situación de la seguridad se deterioró considerablemente. En Níger, en 2 de enero se produjo la mayor masacre contra civiles perpetrada en ocho años en el país, en donde alrededor de 100 personas fueron asesinadas en dos comunidades en la región de Tillabéri. Los ataques generaron el desplazamiento de 10.000 personas, y la OCHA alertó de que 12 de los 13 departamentos en la región estaban en estado de emergencia. Posteriormente, el 21 de marzo, en otro

31. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

ataque en la región de Tahoua, 141 personas fueron asesinadas. Según los medios locales, ambos ataques tenían el sello de la rama del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISGS o ISWAP).

En **Burkina Faso**, dentro de los múltiples incidentes producidos en el año, destacaron el ataque el 4 de junio en la comunidad norteña de Solhan en donde al menos 132 personas fueron asesinadas; la emboscada el 18 de agosto en la provincia de Soum a un convoy de 80 vehículos en la carretera Arbinda-Gorgadji, que causó al menos 86 víctimas mortales, entre ellas 65 civiles; y el asalto a un campamento militar en Inata que causó la muerte a 49 militares y cuatro civiles, siendo la mayor pérdida de las fuerzas de seguridad burkinesas registrada. Durante el año también se registraron ataques a bases militares en **Costa de Marfil** (21 de abril) y en **Benín** (1 de diciembre).

En lo referente al **complejo de seguridad en la región**, el año estuvo marcado por el impacto del golpe de Estado en Malí, así como por el anuncio de la contratación de fuerzas rusas para el combate a las insurgencias, lo que generó una crisis entre Malí y sus socios regionales e internacionales.³² De forma paralela, la nueva Junta militar maliense anunció un **acuerdo militar con Rusia** para el despliegue de combatientes rusos en el país, lo cual también generó reacciones adversas en sus socios militares. Según noticias de prensa, al finalizar el año unos 400 mercenarios rusos de la compañía privada de seguridad Wagner Group –que también se encuentran en conflictos armados como Libia, Mozambique y la República Centroafricana– se desplegaron en la región central de Ségou, y otros lo hicieron en Tombuctú, en el norte.

La llegada de estos supuestos mercenarios rusos a Malí fue condenada por 16 gobiernos europeos, quienes emitieron una declaración conjunta para condenar el despliegue de este tipo de fuerzas en la región. Francia anunció cambios en la misión Barkhane en el país, informando que para finales de 2022 habrá retirado al 40% de los 5.100 efectivos de la misión, mientras que a fuerza europea Takouba Task Force –desplegada desde finales de 2020 y compuesta por fuerzas especiales de Malí y Níger y 11 países europeos– tomará el relevo de la retirada parcial de Francia en Menaka y Gao. Al finalizar el año, diversos países de la fuerza europea amenazaron con retirarse de la misión si las fuerzas rusas se mantenían en el país. Por el contrario, durante el año se produjeron manifestaciones en contra de la presencia francesa en Malí, Chad o Burkina Faso, así como muestras de apoyo a la llegada de Rusia para combatir a la insurgencia.

Cuerno de África

Etiopía (Tigré)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF, por sus siglas en inglés), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés), que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigré percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara.

Un año después del inicio de la ofensiva en la región etíope de Tigré continuó la escalada del conflicto que ha provocado miles de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas (cerca de 1,2 millones de personas según la ONU), parte de las cuales, más de 63.000 personas, han buscado refugio en la vecina Sudán huyendo del clima de violencia. Todas las partes cometieron atrocidades que incluyen masacres de civiles, violencia sexual y el uso del hambre como arma de guerra, según organizaciones de derechos humanos. El conflicto ha adquirido dimensiones regionales por la participación de Eritrea en apoyo del Gobierno etíope así como por

32. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.

los ataques perpetrados por el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) en la vecina Amhara y la implicación en el conflicto de los cuerpos de seguridad y milicias de esta región de Etiopía. La inestabilidad se extendió a los estados fronterizos de Amhara y Afar. Además, se produjeron enfrentamientos en la zona fronteriza entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán y milicias sudanesas. En noviembre Naciones Unidas señaló que más de 9,4 millones de personas dependían de la asistencia humanitaria (3,7 millones en la región de Amhara, 534.000 en Afar y 5,2 millones en Tigré), de las cuales al menos 400.000 personas de la región de Tigré se encontraban en situación de hambruna.³³ Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han documentado graves violaciones de derechos humanos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las resoluciones y críticas a la vulneración de los derechos humanos se producen en un contexto donde las organizaciones humanitarias son objetivo de ataques por parte de los diferentes actores enfrentados.

Pese a la toma de la capital de Tigré, Mekelle, y la declaración de victoria por el Gobierno tres semanas después del inicio de la confrontación en noviembre de 2020, posteriormente en 2021 se reanudaron los combates. El empeoramiento de la situación humanitaria llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrase su primera reunión pública sobre el conflicto, días después de que el TPLF retomara el control de la capital regional, Mekelle, y de la mayoría de Tigré. De forma paralela, el Gobierno Federal declaró el 28 de junio un alto al fuego unilateral, anunciando la retirada de las tropas del Ejército de la región. La medida supuso el primer cese de hostilidades tras el inicio del conflicto armado ocho meses antes. El TPLF respondió al alto el fuego deteniendo y exhibiendo a cerca de 7.000 soldados del Ejército en las calles de Mekelle, así como exigiendo al Gobierno diferentes condiciones para sumarse al alto el fuego, incluyendo la retirada de las tropas eritreas y de la región de Amhara, una investigación independiente de la ONU y el inicio de investigaciones Tigré.³⁴ En paralelo, el 21 de junio se celebraron elecciones regionales y parlamentarias, en las que Abiy Ahmed ganó 410 de los 436 escaños. Los comicios se habían pospuesto dos veces debido a la pandemia de la COVID-19 y problemas logísticos, el conflicto en Tigré y la inseguridad en algunas partes del país, lo que provocó que no se celebraran en tres de las 10 regiones del país. La oposición y países como EEUU denunciaron irregularidades. El líder del principal partido opositor, Birhanu Nega, de Ciudadanos Etopes por la Justicia Social, fue derrotado y partidos opositores como Ezema y el Movimiento Nacional de Amhara (NAMA) obtuvieron menos de 10 escaños. Aunque el

Gobierno de Abiy Ahmed trató de comprar más armas y alistar a más reclutas, las fuerzas de Tigré rompieron el bloqueo de su región y en noviembre se apoderaron de ciudades en la región de Amhara en dirección hacia Addis Abeba, al sur. También podrían intentar tomar el corredor de Djibouti, la principal arteria comercial, según analistas, lo que les permitiría desviar la ayuda a Tigré, donde persiste una desesperada escasez de alimentos, y potencialmente afectar a la distribución de suministros a la capital. Tigré está bajo un bloqueo de facto que impide el acceso de la mayor parte de la ayuda, según la ONU. Las autoridades etíopes y el TPLF se culparon mutuamente por obstruir la asistencia humanitaria. Los funcionarios etíopes también acusaron a la comunidad internacional de ignorar los supuestos abusos del TPLF. Ante el avance de las tropas del TPLF hacia la capital, el 2 de noviembre el primer ministro Abiy Ahmed declaró el estado de emergencia nacional por seis meses y animó a la población a organizarse y promover la creación de milicias y grupos de autodefensa. La declaración del estado de emergencia, permitió, entre otras cosas, el establecimiento de controles de carreteras, la interrupción de los servicios de transporte, la imposición de toques de queda y el control militar en determinadas zonas, la detención sin una orden judicial de cualquier persona sospechosa de tener vínculos con grupos calificados de terroristas, o el llamamiento a filas de cualquier ciudadano que hubiera alcanzado la edad del servicio militar.

El 5 de noviembre, ocho grupos insurgentes antigubernamentales prometieron aliarse con el TPLF, aunque el actor más significativo, el Frente de Liberación de Oromo (OLF), ya combatía a las tropas federales junto al TPLF. La alianza, el Frente Unido de Fuerzas Federalistas y Confederalistas de Etiopía (UFEFCF) reúne a miembros de grupos étnicos anteriormente rivales. La creación de esta alianza fue presentada en Washington por Berhane Gebrechristos, representante de la insurgencia de Tigré y ex ministro de Exteriores etíope entre 2010 y 2012. A raíz de los acontecimientos, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó su preocupación por la situación en un comunicado en el que solicitó un alto el fuego y la creación de condiciones para el inicio de un diálogo nacional etíope inclusivo para resolver la crisis.

Se constataron graves vulneraciones de los derechos humanos que podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad por todos los actores implicados en el conflicto. Además de ejecuciones en masa de población civil en Mai-Kadra (suroeste de Tigré) responsabilidad del TPLF,³⁵ y en Axum,³⁶ en enero, Amnistía Internacional en colaboración con la CNN confirmó que el Ejército etíope habría cometido

33. VOA, *UN Food Stocks Looted in N. Ethiopia; Some Aid Distribution Halted*, 8 de diciembre de 2021.

34. The East African, "TPLF gives five conditions for ceasefire, wants transition process", The East African, 31 de julio de 2021.

35. Amnesty International, "Ethiopia: Investigation reveals evidence that scores of civilians were killed in massacre in Tigray state", AI, 12 de noviembre de 2020.

36. Amnesty International, "Ethiopia: Eritrean troops' massacre of hundreds of Axum civilians may amount to crime against humanity", AI, 26 de febrero de 2021.

ejecuciones extrajudiciales contra la población civil en Mahibere Dego, cerca de Axum. El Gobierno etíope bloqueó el acceso y silenció las comunicaciones en la región desde noviembre. Desde que se permitió el acceso a Tigré a finales de febrero, medios internacionales y organizaciones de derechos humanos han reportado y confirmado las graves atrocidades cometidas, entre ellas el uso de violencia sexual por parte de las tropas etíopes y eritreas.³⁷ Amnistía Internacional denunció en agosto la comisión de violaciones y otros actos de violencia sexual de forma generalizada por las fuerzas combatientes afines al Gobierno etíope (Ejércitos de Etiopía y de Eritrea, la Policía Especial de la región de Amhara, y Fano, una milicia amhárica).³⁸ La violación y violencia sexual se han utilizado como arma de guerra para infligir un daño físico y psicológico persistente a las mujeres y niñas en Tigré, con el objetivo de degradarlas y deshumanizarlas, según Amnistía Internacional. Cabe añadir que se han recabado testimonios de fuentes médicas sobre casos de esclavitud sexual y cautiverio, así como de violaciones múltiples.³⁹ También se incluyen actos de limpieza étnica⁴⁰ en la parte occidental de Tigré, zona que estuvo bajo control de la policía de la región de Amhara y de la milicia amhárica Fano. Además, se informó de arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones y discriminación y estigmatización de miembros de la comunidad tigré en todo el país. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución solicitando el fin inmediato de todas las violaciones a los derechos humanos en Tigré, el cumplimiento del DIH.⁴²

A raíz de la entrada en vigor del estado de emergencia el 6 de diciembre, Australia, Canadá, Dinamarca, EEUU, Países Bajos y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta manifestando su preocupación por los informes recientes de la detención por parte del Gobierno etíope de un gran número de ciudadanos etíopes de la comunidad tigré sobre la base de su origen étnico y sin cargos, tal y como había destacado la Comisión Etíope de Derechos Humanos. No obstante, en diciembre se produjo una evolución positiva de los acontecimientos que podrían contribuir al comienzo de negociaciones de paz. A principios de mes, el Gobierno federal obtuvo importantes avances territoriales y recuperó todo Amhara. Posteriormente, detuvo su ofensiva contra las fuerzas de Tigré después de que estas últimas anunciaran su retirada. El 20 de

diciembre, las fuerzas de Tigré anunciaron la retirada completa de las regiones vecinas de Afar y Amhara, replegándose hacia su feudo en Tigré y pidieron un alto el fuego. El 24 de diciembre, el Gobierno federal dijo que los cuerpos de seguridad federales se detendrían en las posiciones actuales y se abstendrían de avanzar más hacia Tigré. El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el mismo día a las partes a aprovechar esta oportunidad para cesar las hostilidades y garantizar la provisión de la asistencia humanitaria. El Departamento de Estado de EEUU dijo a finales de diciembre que los acontecimientos recientes ofrecían una oportunidad para que las partes se sentaran a negociar. Las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusaron conjuntamente el 16 de diciembre a las fuerzas progubernamentales de detenciones masivas, asesinatos y expulsiones forzadas de personas de la etnia tigré.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región etíope de Tigré han documentado graves violaciones de derechos humanos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de

37. Véase BBC, "Ethiopia's Tigray crisis: 'I lost my hand when a soldier tried to rape me'", *BBC*, 15 de febrero de 2021; Feleke, Bethlehem; Mackintosh, Eliza; Mezzofiore, Gianluca; Polglase, Katie; Elbagir, Nima; Arvanitidis, Barbara and Platt, Alex, 'Practically this has been a genocide', *CNN*, 22 de marzo de 2021; Kassa, Lucy, "'A Tigrayan womb should never give birth': Rape in Tigray", *Al-Jazeera*, 21 de abril de 2021.

38. Amnesty International, "Ethiopia: 'I don't know if they realized I was a person': Rape and sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia", *AI*, 11 de agosto de 2021.

39. Al-Jazeera, "Top Ethiopia health official alleges 'sexual slavery' in Tigray", *Al-Jazeera*, 15 de abril de 2021.

40. Walsh, Declan, "Ethiopia's War Leads to Ethnic Cleansing in Tigray Region, U.S. Report Says", *New York Times*, 26 de febrero de 2021.

41. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Resolución sobre la situación de los derechos humanos en la región de Tigré de Etiopía, *AI/HRC/47/L.20/Rev.1*, 13 de julio de 2021.

paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia registró una intensidad similar a la del período anterior. El año se vio marcado por la persistencia de los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab, por las operaciones de la misión africana en el país (AMISOM) y el Ejército Nacional Somalí, la retirada de las tropas estadounidenses y etíopes del país y el futuro de la AMISOM, así como la grave crisis política derivada de los retrasos en el proceso electoral. En 2021 persistieron las operaciones militares de los cuerpos de seguridad federales y de los estados federados junto a AMISOM, así como atentados por parte de al-Shabaab contra las fuerzas de seguridad somalíes y la AMISOM, incluyendo atentados mediante el uso de artefactos explosivos improvisados en el centro y sur del país, y especialmente en Mogadiscio. En el caso de la capital, el modus operandi de al-Shabaab consistió principalmente en ataques selectivos consistentes en atentados suicidas con explosivos que causaron decenas de víctimas. El centro de investigación ACLED señaló que se produjeron 3.144 víctimas mortales durante el año 2021.

Por otra parte, ante la escalada del conflicto en Tigré,⁴² Etiopía retiró 3.000 soldados en noviembre de 2020, efectivos que estaban dando apoyo al Gobierno Federal somalí en su lucha contra al-Shabaab pero no encuadrados bajo el mandato de AMISOM. En enero de 2021 EEUU puso fin a su presencia militar en el país, entre 650 y 800 fuerzas especiales, parte de las cuales estaban dedicadas al entrenamiento de las tropas somalíes. Este hecho generó un clima de preocupación en torno a un posible vacío en términos de seguridad en el país. Sin embargo, EEUU reanudó sus actividades en el país seis meses después, cuando el 20 y el 23 de julio lanzó ataques aéreos en el estado de Galmudug ejecutando un número indeterminado de militantes de al-Shabaab. A finales de 2021 había prácticamente

tres millones de personas desplazadas en todo el país según OCHA. Cerca de un millón eran nuevos desplazamientos de población generados en 2020 vinculados a la emergencia climática (inundaciones y la plaga de langostas, la peor en 25 años). La situación humanitaria en el país siguió siendo grave debido a múltiples factores, como las perturbaciones climáticas, el conflicto, las enfermedades y la plaga de langostas. Casi la mitad de la población, 5,9 millones de personas, necesitaba asistencia humanitaria. Los efectos combinados de la irregularidad de las lluvias, las inundaciones y el conflicto han provocado una inseguridad alimentaria generalizada. En este sentido, numerosas voces alertaron de los efectos del cambio climático y las condiciones climáticas extremas en el país, por sus consecuencias en torno a la construcción de paz y al desarrollo en un país donde la mayoría de la población depende de la agricultura para su subsistencia, por lo que el carácter polifacético del cambio climático estaría reconfigurando el contexto local social, político y económico, amplificando los agravios locales, los conflictos intercomunitarios entre agricultores y ganaderos y la marginalización de la población. Estas cuestiones eran instrumentalizadas por los actores político-militares y por al-Shabaab.⁴³

El Grupo de Expertos sobre Somalia publicó un informe demoledor en septiembre⁴⁴ en el que destacó que el grupo armado seguía manteniendo toda su capacidad para completar ataques complejos y asimétricos en el país. Según el grupo, al-Shabaab se había aprovechado de las profundas diferencias políticas que salieron a la luz durante el prolongado período de incertidumbre electoral y seguía preparado para mantener su ritmo de operaciones en Mogadiscio, así como en los estados miembros federados, a medio y largo plazo. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por promover el diálogo político y hacer avanzar el proceso electoral, seguían presentes los intereses subyacentes y difíciles de conciliar y el grupo armado armado al-Shabaab. Según el Grupo de Expertos, el grupo armado, por tanto, seguía siendo un síntoma del conflicto político en curso, no su causa fundamental, y todas las partes implicadas en Somalia deberían reajustar sus prioridades para anular las condiciones específicamente locales que permiten que al-Shabaab siga operando. Por otra parte, durante el año se produjeron diversas reuniones y pronunciamientos por parte del Gobierno en torno al proceso gradual de transformación y retirada de la AMISOM del país. En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre extendió las sanciones que pesan sobre Somalia por un año más,

El Grupo de Expertos sobre Somalia destacó que al-Shabaab no era la causa fundamental, sino un síntoma del conflicto político entre los intereses irreconciliables entre los clanes y élites políticas del país

42. Véase la síntesis de Etiopía (Tigré) en este capítulo.

43. Véase Cedric H. de Coning et al, *Climate, Peace and Security Factsheet. Somalia*, Norwegian Institute of International Affairs, Stockholm International Peace Research Institute, febrero de 2021; Escola de Cultura de Pau, "Cambio Climático, paz y seguridad en Somalia", ECP visual explainer, julio de 2021.

44. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 16 de septiembre de 2021 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia por el Grupo de Expertos sobre Somalia, Naciones Unidas*, S/2021/849 de 6 de octubre de 2021.

bloqueando el acceso a la compra de armas –en contra de la voluntad del Gobierno, que pretende asumir la reforma del sector de la seguridad y poder equipar directamente a sus cuerpos de seguridad. Somalia se opone a la extensión de la presencia de AMISOM en el país o su transformación en una misión híbrida de UA/ONU, lo que significaría que todavía permanecerían soldados y asesores extranjeros en el país. El Consejo de Seguridad de la ONU justificó su decisión debido a que el proceso de construcción del Estado somalí se ha visto manipulado por al-Shabaab, grupo que se ha infiltrado en las instituciones locales. A principios de noviembre una delegación del Consejo de Paz y Seguridad de la UA visitó Mogadiscio, a quien el Gobierno reiteró su voluntad de reducir las fuerzas extranjeras e incrementar el apoyo a sus fuerzas para que puedan ser las garantes de la seguridad en el país, en el marco del traspaso gradual de tareas de AMISOM a los cuerpos de seguridad nacionales previsto para 2023. El mandato de AMISOM culminó a finales de 2021, por lo que discutieron cuatro opciones para transformar el mandato de la misión, propuestas que estaría elaborando el Cuarteto (Consejo de Seguridad de la ONU, la UE, la UA y los cuatro países africanos que en 2021 formaban parte del Consejo de Seguridad).

En relación al proceso electoral, este sufrió numerosos momentos de crisis, reveses y retrasos durante el año. En febrero expiraba el mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed alias Farmajo, lo que desencadenó una crisis constitucional, donde el bloque opositor de los 15 candidatos presidenciales, así como otros sectores de la sociedad civil exigieron la formación de un Consejo de Transición Nacional que condujera a la celebración de elecciones, mientras que el presidente y el Gobierno consideraban que el Gobierno Federal debía mantenerse en el poder hasta los comicios. Las diferentes rondas negociadoras entre el primer ministro Roble y el bloque opositor celebradas en febrero y marzo para atajar la situación fracasaron. Esta situación derivó en una escalada de la violencia en febrero y marzo y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y opositores a la continuidad de Farmajo y su Gobierno, violencia que se trasladó a los cuerpos de seguridad federales, incluso con enfrentamientos en abril entre las Fuerzas Armadas leales a Farmajo y Fuerzas Armadas leales a la oposición, causando decenas de víctimas mortales. A finales de abril el Consejo de Seguridad de la ONU instó a todas las partes a rechazar la violencia y reanudar el diálogo político. La UNSOM y otros socios internacionales alertaron que la fragmentación de los cuerpos de seguridad según divisiones clánicas podía desviarles de su principal objetivo, al-Shabaab. Finalmente, la comunidad internacional rechazó la extensión del mandato presidencial por dos años, lo que forzó a Farmajo a solicitar al Parlamento el 28 de abril la anulación de la extensión del mandato presidencial y la reapertura del diálogo con los estados miembros

federales para fijar un nuevo calendario electoral. La anulación de la extensión del mandato fue aceptada de forma unánime por el Parlamento, lo que redujo la tensión (con el acantonamiento de las tropas federales pro-opositoras) y facilitó la reanudación del diálogo en el marco del NCC el 22 de mayo.⁴⁵ El NCC alcanzó un acuerdo el 27 de mayo según el cual las elecciones parlamentarias indirectas se celebrarían en un periodo de 60 días. Finalmente, el proceso electoral se inició con retrasos, aunque las elecciones a la Cámara Alta comenzaron el 29 de julio en todos los estados miembros federados, habiéndose elegido a 52 de los 54 escaños, 14 de los cuales correspondieron a mujeres; ello supone una representación femenina del 26 %, inferior a la cuota mínima del 30% para las mujeres a la que se habían comprometido los actores en el seno del NCC. Las elecciones a la Cámara Baja se iniciaron en noviembre, pero a finales de diciembre todavía no habían culminado, por lo que también se pospuso la elección indirecta del nuevo presidente del país.⁴⁶

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder

45. El consejo consultivo nacional (NCC) sobre las elecciones es un espacio de diálogo y concertación en el que está presente el Gobierno Federal y los estados federados.

46. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Pierre Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Domitien Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Durante el año persistieron la violencia política y los ataques esporádicos por parte de actores armados y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales, así como actos de represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). El centro de investigación ACLED dio un balance de 285 víctimas mortales durante el año 2021 en el país como consecuencia de estas acciones.⁴⁷ El CNDD-FDD nombró en enero como nuevo secretario general del partido al antiguo presidente del Senado, Révérien Ndikuriyo, sustituyendo en el cargo al actual presidente del país, nombramiento que fue tachado por círculos de derechos humanos como una consolidación de las posiciones más intransigentes desde las elecciones de 2020. El grupo armado RED-Tabara, compuesto por entre 500 y 800 combatientes con base en la provincia congoleza de Kivu Sur, continuó siendo la principal amenaza insurgente, y llevó a cabo acciones y ataques esporádicos durante el año contra miembros de los cuerpos de seguridad, así como contra civiles y sectores próximos al CNDD-FDD. También se produjeron enfrentamientos esporádicos entre milicias de RED-Tabara y las Fuerzas Armadas. Además, continuaron las acciones militares congolezas contra presuntos rebeldes burundeses en Kivu Sur, así como por parte de milicias Imbonerakure, quienes en mayo se enfrentaron con milicianos Mai Mai alineados con RED-Tabara en el territorio congolés de Uvira. El 24 de mayo, el Gobierno de Ruanda afirmó haber matado a dos rebeldes del Frente de Liberación Nacional (FLN) que cruzaban la frontera desde Burundi. El Gobierno burundés negó la presencia de grupos armados hostiles a Ruanda en suelo burundés. En septiembre, fuerzas militares, policiales y miembros de la milicia Imbonerakure se desplegaron cerca de la frontera con RDC en medio de un presunto riesgo inminente de ataque por parte de rebeldes burundeses con base en RDC. En octubre las autoridades de RDC arrestaron a más de 30 presuntos rebeldes burundeses en la provincia de Kivu Sur y el 10 de octubre afirmaron haber matado a dos miembros burundeses del grupo armado RED-Tabara; aunque esta organización desmintió los hechos. Además, se constataron diferentes acciones de violencia, explosiones y ataques por grupos no identificados que el Gobierno calificó de violencia terrorista, incrementando el clima de inseguridad. Un ejemplo de ello se produjo a mediados de septiembre, cuando atacantes no identificados lanzaron al menos

Burundi intentó dar una imagen de mejora de la seguridad y de las libertades en el país en aras de romper el aislamiento económico y político

cuatro ataques con granadas en la capital, Gitega, y la capital económica, Bujumbura, matando al menos a cinco personas e hiriendo a más de un centenar. El 21 de septiembre el Gobierno culpó a “terroristas no identificados” y RED-Tabara negó su participación. Opositores políticos y activistas siguieron siendo víctimas de acoso, intimidación y asesinato en el país, en especial del partido opositor CNL, y muchos políticos y grupos de oposición operan en el exilio, incluso con el riesgo de sufrir la persecución en el extranjero. Las autoridades el 22 de septiembre emitieron una orden de arresto internacional contra el líder opositor exiliado Alexis Sinduhije bajo sospecha de liderar RED-Tabara.

A pesar de la situación de violencia e inestabilidad, Burundi se embarcó durante el año en la mejora de las relaciones con los países vecinos, en especial con Ruanda y RDC, y con los principales actores de la comunidad internacional, con la voluntad de dar una imagen de mejora de la seguridad y de las libertades en el país en aras de romper el aislamiento económico y político. En medio del acercamiento con Ruanda, el 2 de abril el Gobierno acogió con beneplácito la decisión de Kigali a finales de marzo de suspender tres estaciones de radio de Burundi, que habían estado operando desde Kigali desde la crisis política de

2015 en Burundi. Durante la visita del presidente Ndayishimiye a la vecina RDC, Gitega y Kinshasa anunciaron el 13 de julio la cooperación bilateral contra los grupos armados en el este de RDC; acuerdo que podría dar lugar a operaciones conjuntas contra los grupos armados de Burundi en la provincia de Kivu Sur. A nivel internacional, en su discurso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi que tuvo lugar el 11 de marzo reconoció algunas medidas tomadas por las autoridades para mejorar el historial de derechos humanos, pero concluyó que la situación actual era demasiado compleja e incierta para ser considerada una mejora genuina. El 16 de junio el Gobierno levantó las sanciones contra medios como Ikirihó y la BBC, aunque otros permanecieron suspendidos. El 8 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor del nombramiento de un relator especial sobre derechos humanos en Burundi, tras el trabajo de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi (2016-2021). Su informe final se publicó en septiembre, en el que se destacó que a pesar de algunos gestos simbólicos aislados en el ámbito de los derechos humanos, no se había emprendido ninguna reforma estructural para mejorar la situación, destacando que funcionarios del Estado y los Imbonerakure habían seguido cometiendo graves violaciones de derechos humanos con la aquiescencia de las autoridades o incluso a instancias de estas. El estado de derecho continuaba erosionándose progresivamente y los factores de riesgo

47. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

de deterioro de la situación de los derechos humanos, seguían presentes.⁴⁸

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA se reunió el 27 de abril para discutir el posible cierre de la Misión de Observadores de Derechos Humanos y Expertos Militares en Burundi; decisión anunciada en mayo, citando “avances significativos” en la situación política y de seguridad, eliminando al país de la agenda. La Oficina del enviado especial del secretario general de la ONU también cerró el 31 de mayo. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los EEUU, de finales de marzo, registró al menos 205 ejecuciones extrajudiciales en Burundi en 2020 y destacó la impunidad generalizada cometida por parte del Gobierno y afines. En noviembre, EEUU eliminó las sanciones contra ocho altos funcionarios militares y de seguridad, incluido el primer ministro Alain-Guillaume Bunyoni, citando la reducción de la violencia y el regreso a la normalidad política desde las elecciones de 2020. El Gobierno y la UE celebraron en diciembre de 2020 la primera reunión de alto nivel desde la suspensión de la cooperación financiera en 2016, encuentro al que siguieron diversas reuniones con el objetivo de normalizar las relaciones, incluido el levantamiento de las sanciones de la UE y la reanudación del apoyo financiero directo; la UE invitó al ministro de Exteriores de Burundi, Albert Shingiro, a una gira europea a finales de abril. Tras la reunión en junio del jefe de la delegación de la UE con el presidente Ndayishimiye en Bujumbura, se anunció la intención de la UE de iniciar el proceso de reanudación de la ayuda después de que el gobierno presentara una hoja de ruta de reformas aceptada por la UE. No obstante, la UE decidió renovar el 18 de octubre por un año más hasta el 31 de octubre de 2022 las sanciones contra tres funcionarios del Gobierno de Burundi y un exgeneral, impuestas inicialmente en octubre de 2015 por su papel en el clima de violencia política desencadenado en 2015.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Ruanda, Rusia (Wagner Group)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras

militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los 10 años anteriores había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

El año 2021 se vio condicionado por los acontecimientos ocurridos a partir de diciembre de 2020, con la ruptura del proceso de paz y el reinicio de las hostilidades por una parte de los firmantes del acuerdo de 2019. Según el centro de investigación ACLED, desde diciembre de 2020 hasta finales de 2021 se produjeron al menos 1.698 víctimas mortales como consecuencia de la violencia. En el marco de un contexto político dominado por las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de diciembre de 2020, las tensiones aumentaron después de que el 3 de diciembre el Tribunal Constitucional decidiera invalidar cinco de las 22 candidaturas presidenciales, entre ellas la del expresidente de RCA, François Bozizé. El 15 de diciembre, los representantes de seis grupos armados, entre los cuales los principales firmantes del acuerdo de paz de 2019, incluyendo las facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, una facción del FPRC, el MPC y la UPC, firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el Acuerdo Político y criticaban las deficiencias del Gobierno a la hora de hacer avanzar el proceso de paz. El 17 de diciembre anunciaron la formación de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). Algunos de estos grupos apoyaban la candidatura de Bozizé,

48. Naciones Unidas, *Report of the Commission of Inquiry on Burundi*, (A/HRC/48/68), 12 de agosto de 2021.

quien fue acusado de orquestar un intento de golpe de Estado. Entre el 18 y el 23 de diciembre, la CPC lanzó ataques simultáneos y coordinados hacia Bangui y en todo el país, cometiendo graves violaciones contra la población civil, lo que provocó el abandono de los puestos de seguridad por parte de los cuerpos estatales en muchas localidades. Ante esta situación, la MINUSCA recibió refuerzos de la misión de la ONU en Sudán del Sur y se desplegó apoyo adicional de seguridad bilateral, principalmente de Ruanda y Rusia, a través del contratista privado ruso Wagner Group.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se celebró en un contexto de intensificación de la violencia. Se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas ataques de elementos de la CPC contra 14 escuelas usadas como centros de votación. Se declaró reelegido al presidente Archange Touadéra quien, el 18 de enero de 2021, se dirigió a la nación y expresó su voluntad de dialogar y colaborar con todas las partes en el proceso de paz, a excepción de los grupos armados vinculados a la CPC. El Tribunal Constitucional el 1 de febrero proclamó los resultados de las elecciones legislativas afirmando que 22 de los 140 diputados fueron elegidos en primera ronda, mientras que 61 escaños requerían una segunda ronda y se debían celebrar elecciones para los restantes 57 escaños en distritos donde las elecciones no habían tenido lugar debido a las condiciones de seguridad. La principal coalición opositora rechazó los resultados y anunció su retirada del proceso electoral, destacando las numerosas irregularidades y el clima de violencia reinante. El 14 de marzo se celebraron las elecciones legislativas en las circunscripciones pendientes. El 30 de marzo, el presidente Touadéra tomó posesión de su cargo y reiteró su adhesión al Acuerdo Político de 2019. Se confirmó la muerte de al menos 144 civiles a manos de las partes en el conflicto desde el 15 de diciembre de 2020 hasta finales de junio de 2021, y el desplazamiento de 213.000 civiles hasta finales de mayo de 2021 como consecuencia de la crisis electoral y postelectoral. Por otra parte, cabe destacar la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, cometidos por todas las partes en el conflicto, según destacó Naciones Unidas.

A raíz de la formación de la CPC, el presidente Touadéra expulsó del Gobierno a líderes de grupos insurgentes integrantes de la CPC, como Maxime Mokom (antibalaka); a Bi Sidi Souleymane (alias Sidiki), de 3R; Mahamat Hamat Alhisene (alias Al-Khatim), del MPC; y Ali Darassa, de la UPC, entre otros altos cargos. En enero, la CPC lanzó ataques coordinados contra Bangui y la MINUSCA, y las Fuerzas Armadas y los cuerpos paramilitares que le dan apoyo llevaron a cabo contraofensivas que consiguieron expulsar a la CPC y recuperar el control de rutas y localidades estratégicas

cercanas a la capital. Se constató que se habían restringido las libertades civiles y que la situación había dado lugar a denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, incluidos menores, por parte de las fuerzas gubernamentales y del personal de seguridad de Wagner Group. Esa situación creó un clima de temor entre la población. Pese a que 3R, la UPC y el MPC cortaron relaciones con la CPC entre abril y junio, se mantuvieron activos y siguieron cometiendo violaciones y ataques contra civiles y los cuerpos de seguridad, a la vez que las Fuerzas Armadas centroafricanas apoyadas por contratistas privados rusos cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno intentó promover un proceso de diálogo político, aunque este sufrió numerosos retrasos durante todo el año. La Comunidad de Sant Egidio llevó a cabo sus buenos oficios para facilitar la celebración de un encuentro que sentara las bases de un acuerdo para poner fin a las hostilidades e iniciar el proceso de diálogo e invitó a representantes del Gobierno, de la sociedad civil, de la oposición política y líderes religiosos del país entre los días 27 y 29 de septiembre en Roma.⁴⁹ Tras el encuentro, que contó con la presencia del secretario general de la Comunidad de Sant Egidio, Paolo Impagliazzo, los participantes firmaron una declaración conjunta titulada “Hacia el Diálogo Republicano – por la paz y el futuro de la RCA”, en la que hicieron un llamamiento a todas las fuerzas vivas de la nación a preparar el camino del diálogo en un espíritu de apertura, humildad y pragmatismo. Los representantes del Gobierno reafirmaron su rechazo a incluir a la CPC en las consultas celebradas en el foro de Roma. A su vez, la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIGLR) adoptó el 16 de septiembre una hoja de ruta para la paz en el país haciendo un llamamiento al Gobierno a aceptar un alto el fuego con la CPC y revitalizar el acuerdo de paz de 2019. En cumplimiento con las recomendaciones de la comunidad internacional y con la voluntad de promover el proceso de diálogo, el 15 de octubre el presidente Touadéra declaró un alto el fuego unilateral que afectaba a las acciones contra los grupos armados; en respuesta, la CPC acordó respetar el alto el fuego si el Gobierno se comprometía a ello. Sin embargo, en las dos semanas siguientes las fuerzas de seguridad gubernamentales, los cuerpos paramilitares internacionales y los grupos armados violaron reiteradamente el cese de hostilidades.

La situación de emergencia humanitaria en el país alcanzó niveles no vistos desde 2015 debido a las nuevas dinámicas de conflicto observadas desde diciembre de 2020. Las escuelas se usaron sistemáticamente con fines militares, según diversos análisis. Las organizaciones humanitarias se vieron gravemente afectadas por la inseguridad, los

49. Jude Atenmanke, [Rome-based Lay Catholic Association Facilitating “ceasefire, dialogue” in CAR](#), *ACIAFRICA*, 3 de octubre de 2021.

enfrentamientos y las actividades violentas de todas las partes en el conflicto, que atacaron directamente al personal humanitario y sus bienes y dificultaron el acceso a las personas que necesitaban asistencia. Algunas oficinas fueron saqueadas, lo que llevó a varias organizaciones a suspender temporalmente sus actividades. Según OCHA, a 15 de diciembre de 2021 había 3,1 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria, más de 664.000 personas desplazadas internas en el país y 735.000 personas refugiadas en los países vecinos.

La alianza militar que RCA ha ido forjando con Rusia en los últimos años fue motivo de creciente preocupación, tal y como destacaron diversos analistas.⁵⁰ Aunque el uso de mercenarios rusos por parte del Gobierno contribuyó a poner fin al bloqueo que mantenían los grupos rebeldes en la vía de suministro camerunesa al Gobierno y la recuperación del control de numerosas localidades –lo que impulsó el apoyo popular a Touadéra–, esta contraofensiva gubernamental comportó graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil y ejecuciones sumarias por parte de los mercenarios rusos. En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios dio la alarma por primera vez sobre las actividades de Wagner y dijo que había recibido informes de graves abusos contra los derechos humanos,⁵¹ incluidas ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzadas.

En junio, un panel de expertos de la ONU acusó a instructores rusos y soldados de la RCA de saqueos a gran escala, uso de fuerza excesiva y asesinatos indiscriminados. También declaró que mercenarios sirios y libios estaban combatiendo junto con instructores rusos. Rusia negó airadamente las acusaciones. Dos meses después, la MINUSCA y la oficina de derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por los crecientes abusos cometidos por todos los beligerantes, y responsabilizaron al Ejército y a los contratistas privados rusos de flexibilizar el embargo de armas al país, y Rusia continuó bloqueando las iniciativas para volver a dotar de personal al comité de monitoreo de sanciones.

El comité de seguimiento de sanciones anterior había emitido un informe en junio⁵² acusando a los instructores militares rusos de Wagner de cometer abusos contra la población civil. Las tensiones entre la MINUSCA y el Gobierno aumentaron después de un incidente el 1 de noviembre cuando 10 efectivos de mantenimiento de la paz egipcios desarmados resultaron heridos cuando su autobús fue atacado por la guardia presidencial.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Ruanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Ruanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

Los ataques de los grupos armados y la violencia intercomunitaria continuaron presentes en las provincias orientales de la RDC durante 2021.

A pesar de las ofensivas militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, con la asistencia de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUSCO), la violencia siguió aumentando. Más de 120 milicias y grupos armados seguían activos en el este del país, en especial en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika. Según el informe del Grupo de expertos de RDC de junio,⁵³ la población civil continuó sufriendo las consecuencias del ciclo perpetuo de violencia en el este y la población civil transmitió su desesperación, en parte, protagonizando disturbios y manifestándose contra la MONUSCO. Los grupos armados continuaron actuando con casi total impunidad en la zona, según el Grupo de Expertos.

50. Entre otros, véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021; Bax, Pauline, *Russia's Influence in the Central African Republic*, ICG Commentary/Africa, ICG, 3 December 2021.

51. OHCHR, CAR: Experts alarmed by government's use of "Russian trainers", close contacts with UN peacekeepers, 31 de marzo de 2021.

52. Naciones Unidas, *Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana*, cuyo mandato se prorrogó en virtud de la resolución 2536 (2020) del Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/569, 25 de junio de 2021.

53. Naciones Unidas, *Carta de fecha 10 de junio de 2021 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/560, 10 de junio de 2021.

Según el centro de investigación ACLED,⁵⁴ se produjeron 4.865 víctimas mortales como consecuencia del clima de violencia armada en el país, de las cuales 4.723 se circunscribían a estas cinco provincias congoleesas, en más de 2.300 incidentes violentos. Según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) en RDC, durante 2020, unos 2.487 civiles habían sido asesinados por grupos armados en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Tanganyika e Ituri. La ONU registró la muerte de otros 1.043 civiles, incluidas 233 mujeres y 52 menores, en los primeros nueve meses de 2021. La mayoría de las víctimas se encontraban en Ituri y Kivu Norte, donde la violencia intercomunitaria, así como los enfrentamientos entre las FARDC y varias milicias, se intensificaron durante el año. Según ACNUR había 5,6 millones de personas desplazadas internas, incluidos unos 3 millones de menores, a las que se añadían más de 942.000 personas refugiadas en países vecinos, lo que la ha convertido en la mayor crisis de desplazamiento en África de los últimos años. La FAO y el PMA estimaron en noviembre que 27 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave, debido a malas cosechas, desplazamientos provocados por la violencia, enfermedades y colapsos de infraestructuras.⁵⁵

El 30 de abril, el presidente Félix Tshisekedi decretó el establecimiento de un estado de sitio que entró en vigor el 6 de mayo para las provincias de Kivu Norte e Ituri, para aumentar la presencia de las FARDC y mejorar la seguridad. Dos generales, Constant Ndima y Jon Luboya (antiguo grupo RCD-Goma) se hicieron cargo de ambas provincias, decisión muy criticada por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la década de los noventa. Desde entonces, las ADF, CODECO y otros grupos armados continuaron perpetrando ataques violentos y algunas fuerzas de seguridad del Estado se vieron implicadas en graves violaciones de los derechos humanos. El estado de sitio se fue prorrogando durante el año sin que se constataran mejoras de la situación de seguridad.⁵⁶ Por el contrario, los diputados provinciales –suspendidos por el estado de sitio al haberse supeditado el control de la situación a los mandos militares– así como organizaciones de derechos humanos denunciaron la reducción del espacio político y el aumento de las violaciones de derechos humanos bajo el estado de sitio. En junio, el presidente Félix Tshisekedi realizó una gira por las provincias del este

El Gobierno decretó el estado de sitio en el este de RDC, lo que provocó una escalada de la violencia contra la población civil y una reducción del espacio político

ACNUR alertó de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento de África de los últimos años en RDC, con 5,6 millones de personas desplazadas, casi un millón de refugiadas y 27 millones en una situación de emergencia alimentaria grave, según FAO y PMA

sometidas al estado de sitio y pidió perdón a la población civil por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad y los grupos armados, prometió perseguir a los responsables de abusos, y añadió que se había desarrollado una mafia dentro del ejército y la policía, apuntalada por una “ley del silencio”.⁵⁷

Más allá de las actividades de las ADF en Kivu Norte e Ituri,⁵⁸ en el resto de **Kivu Norte**, en los territorios de Masisi, Rutshuru, Walikale y el sur de Lubero continuaron los enfrentamientos violentos entre grupos armados, en los que participaron principalmente facciones de Nduma Defensa del Congo-Renovado (NDC-R) y combatientes del Colectivo de Movimientos por el Cambio (CMC) y que dieron lugar a nuevas alianzas entre grupos y graves abusos contra la población civil. Continuaron las actividades ilícitas relacionadas con el estaño, el tántalo y el wolframio, según el Grupo de Expertos de la ONU. El Grupo de Expertos documentó enfrentamientos armados en las minas de los alrededores de Rubaya durante 2020, así como casos de fraude en las minas de coltán de la zona, lo que pone en duda la eficacia de los esfuerzos del Gobierno y el sector privado para hacer frente a esta cuestión.

En **Ituri**, la falta de avances en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) contribuyó al deterioro progresivo de la situación humanitaria y de la seguridad en el territorio de Djugu. Los ataques contra las bases de las Fuerzas Armadas, el desvío del armamento de las Fuerzas Armadas y el tráfico transfronterizo dispararon el uso de armas ligeras entre las facciones de la CODECO. Los combatientes de Bon Temple, dirigidos por Tuwo, cometieron actos de violación en grupo, matrimonio forzado y esclavitud sexual en Banyali-Kilo, donde abunda el oro. También se documentó la matanza de civiles por parte de combatientes de la CODECO, cuyas facciones atacaron y ocuparon distintas minas de oro y saquearon los centros de comercio de este metal en el territorio de Djugu, en especial en Mongbwalu, un núcleo aurífero. En el territorio de Irumu, la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC) llevó a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y sobre todo contra civiles no pertenecientes a la comunidad bira, y utilizó a menores como combatientes, según la ONU. El grupo de autodefensa Zaire siguió operando en los territorios

54. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

55. FAO/WFP, *Food security crisis in the Democratic Republic of the Congo could worsen in the coming months*, FAO/WFP Joint Statement, 10 de noviembre de 2021.

56. HRW, *DR Congo: Massacres Persist Despite Martial Law*, 15 de septiembre de 2021.

57. Reuters, *Dozens of Congo's rebels lay down weapons in the east*, 23 de junio de 2021.

58. Véase el resumen del conflicto armado de RDC (este-ADF) en este capítulo.

de Irumu y Djugu, y participó en enfrentamientos armados con las facciones de la CODECO y la FPIC, y en ataques contra la población civil de las comunidades bira y lendu. También extrajo oro y defendió distintos yacimientos auríferos en ambos territorios.

Paralelamente, algunos miembros de las fuerzas de seguridad presentes en los territorios de Djugu e Irumu cometieron abusos, que incluyeron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto, en especial contra las poblaciones lendu y bira, consideradas partidarias de la CODECO y la FPIC, respectivamente. Se documentó la presencia ilegal de miembros de las Fuerzas Armadas en zonas mineras en los territorios de Djugu, Irumu y Mambasa, donde las cooperativas locales trabajaban en la extracción de oro con empresas propiedad de inversores particulares chinos.

En **Kivu Sur**, los enfrentamientos violentos y los ataques se intensificaron en los territorios de Hauts-Plateaux de Fizi, Uvira y Mwenga, en especial entre Twirwaneho, que se convirtió en un grupo armado organizado, y una nueva coalición de milicias Mai-Mai, de la que formaba parte la milicia Mai-Mai Yakutumba. Los grupos Mai-Mai y Twirwaneho obtuvieron armas y municiones por distintos medios, por ejemplo, atacando a las Fuerzas Armadas o desviando sus existencias. La connivencia entre algunos de estos grupos y miembros de las Fuerzas Armadas alimentó el conflicto. Los ataques contra la población civil y los enfrentamientos armados desencadenaron desplazamientos forzados masivos y dieron lugar a una segregación étnica del espacio geográfico. Los combatientes de Twirwaneho y de la coalición Mai-Mai cometieron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto y secuestros. Algunos discursos incitaron a la discriminación, la hostilidad y la violencia según la ONU. Mai-Mai Apa Na Pale, bajo la dirección de Mundus Munanga Babuyu, siguió formando parte de la Coalición Nacional del Pueblo para la Soberanía del Congo (CNPSC) y siendo un aliado muy cercano de Yakutumba. Mai-Mai Yakutumba siguió beneficiándose de la tala, los impuestos y el comercio ilegal del palisandro, utilizando también para ello distintas redes delictivas. El Grupo de Expertos de la ONU rastreó madera procedente de las reservas forestales de Kivu Sur, bajo el control de Mai-Mai Yakutumba, y de las redes delictivas del territorio de Irumu del Sur y la provincia de Kongo Central (antes llamada Bas Congo) hasta sus destinos finales (Bélgica y China). Mai-Mai Yakutumba también sacó provecho de la minería y los impuestos gravados a algunas explotaciones auríferas en las zonas de Misisi y Nyange, desde las que se exportó oro a Dubái y Hong Kong. Los grupos armados burundeses RED-Tabara y FNL siguieron ocupando bases de retaguardia en los Hauts-Plateaux de Uvira. RED-Tabara a menudo cambiaba de posición para esquivar las operaciones de las FARDC.

Por último, grupos armados y milicias rivales, que compiten por el control de las zonas mineras o toman

represalias contra las recientes ofensivas del Gobierno, perpetraron actos de violencia en **Tanganica**. Más de 300.000 personas se encuentran actualmente desplazadas por la inseguridad en esta zona.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congolese en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

Durante el año se produjo una nueva escalada de la violencia por parte del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este de RDC y se consolidó su expansión en Ituri. En Kivu Norte, los ataques de las ADF, activas en la región del Grand Nord (norte de la provincia de Kivu Norte) durante más de seis años, se intensificaron después de que las Fuerzas Armadas lanzaran una ofensiva en octubre de 2019. La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) informó que los ataques de las ADF habían sido “sistemáticos y brutales” y podían equivaler a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Del 11 al 12 de noviembre, presuntos combatientes de las ADF perpetraron uno de los ataques más mortíferos en Kivu Norte durante 2021, matando al menos a 38 civiles y destruyendo el único centro de salud en la aldea de Kisunga en Beni.

En la zona del Grand Nord, la situación de seguridad siguió siendo inestable como consecuencia de las acciones de las ADF. Las operaciones ofensivas contra las ADF lanzadas conjuntamente por las FARDC y la MONUSCO contribuyeron a agravar el clima de violencia y represalias por parte de las ADF. Aunque a resultas de las operaciones se infligieron importantes pérdidas a las ADF y se desmantelaron varios de sus bastiones, el grupo mantuvo su capacidad de causar daños a la población civil. Las ADF se dividieron en pequeños grupos mientras conservaban su capacidad de mando y control, ampliaban su zona de operaciones y recurrían con mayor frecuencia a los artefactos explosivos improvisados. Desde noviembre de 2016 y hasta el 15 de noviembre de 2020, no se registró ningún caso de civiles heridos por este método en el este del país, mientras que a partir de esa fecha se produjo una escalada del uso de estos artefactos, con graves consecuencias para la población civil. El grupo consiguió reconstituirse e intensificó sus ataques, sobre todo en el sector de Rwenzori. Con la participación de combatientes procedentes de fuera del país, las ADF perfeccionaron las técnicas de construcción de artefactos explosivos improvisados. Según el informe del Grupo de expertos de RDC publicado en junio,⁵⁹ pese a los intentos de las ADF de proyectar su alineación con el grupo armado Estado Islámico (ISIS), no se pudo establecer si este les daba apoyo directo o ejercía funciones de mando y control sobre ellas. No obstante, cabe destacar que ISIS reivindicó tres ataques en la localidad de Komanda en los que ejecutó a diversas personas entre septiembre y octubre. En todo el territorio de Beni, las ADF llevaron a cabo ataques, ejecuciones y secuestros de agricultores, muchos de los cuales trabajaban los cacaotales, y forzaron a agricultores locales a colaborar.

Sin embargo, en lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones de las ADF, el 16 de noviembre se registraron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala, que fueron reivindicados por las ADF. Las explosiones, producidas por tres atacantes suicidas, se registraron cerca del Parlamento nacional y de la sede central de la Policía ugandesa, dejando un balance de siete personas muertas y 40 heridas. Dos días después, las autoridades ugandesas atribuyeron los ataques al ADF, reaccionando primero mediante arrestos masivos de posibles sospechosos en el interior del país, y posteriormente, anunciando nuevos planes para volver a desplegar al Ejército ugandés en la vecina RDC. El 30 de noviembre las Fuerzas Armadas ugandesas informaron de los primeros ataques aéreos contra posiciones de las ADF en suelo congolés, en una operación supuestamente acordada con las fuerzas congoleesas. A principios de diciembre las tropas ugandesas entraron en territorio de la RDC tras un acuerdo con el Gobierno

En lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones de las ADF, en noviembre efectuaron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala, que provocaron el despliegue de las Fuerzas Armadas ugandesas en RDC

congolés para combatir a la insurgencia. El Gobierno congolés, que había declarado en abril el estado de sitio en las regiones del este del país, defendió que la presencia de las tropas ugandesas sería estrictamente limitada en el tiempo. Durante todo el mes de diciembre los ejércitos de Uganda y RDC atacaron posiciones del ADF en las regiones de Kivu Norte e Ituri, informando del desmantelamiento de diferentes campamentos de la insurgencia. En respuesta, las ADF intensificaron sus operaciones militares, entre las cuales sobresalió un ataque suicida producido el 25 de diciembre en un restaurante en Beni, que dejó un balance de al menos nueve personas muertas en lo que se convirtió en el primer ataque suicida registrado en el país.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados y milicias comunitarias, UNITAMS
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario, concluyendo su despliegue a finales de 2020.

59. Naciones Unidas, Carta de fecha 10 de junio de 2021 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/560, 10 de junio de 2021.

Un año más la región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en el país, registrándose un deterioro de la situación de seguridad tras la finalización del mandato de la Misión Híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID). Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año se registraron 1.027 muertes asociadas al conflicto armado en la región de Darfur. Estos datos muestran un empeoramiento en comparación con años anteriores. En 2020 se registraron 555 muertes provocadas por enfrentamientos armados, ataques contra civiles y ataques con explosivos improvisados (IED), 268 en 2019, 859 durante el 2018 y 996 en 2017, aunque la cifra de 2021 seguía estando muy por debajo de las 2.286 muertes registradas en 2016.⁶⁰ Las razones principales del mantenimiento de las dinámicas de violencia armada en la región seguían estando en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sudanesas y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW) –que se negó a la firma del acuerdo de paz alcanzado en octubre de 2020– así como, sobre todo, al mantenimiento de enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de distintas comunidades árabes y no árabes, principalmente debido a disputas por la propiedad de las tierras o el acceso a los recursos. Según los datos de ACNUR de mediados de 2021, más de 800.000 personas **habían huido de sus hogares en Sudán y se habían refugiado fuera de las fronteras nacionales, principalmente debido al conflicto armado de Darfur. El número de personas desplazadas internas a mediados de 2021 se situó en las 2.552.174.**⁶¹ Estas cifras colocan al país en el séptimo puesto a nivel global, y el tercero en África en relación al número de personas refugiadas por la violencia, por detrás de Sudán del Sur y RDC; y en el noveno a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas. De forma paralela, **Sudán acogía a más de un millón de personas procedentes de RCA, RDC o Etiopía**– manteniendo al país en el sexto puesto a nivel global de países de acogida, siendo el segundo en África por detrás de Uganda.⁶²

El año se inició con la **retirada definitiva de la UNAMID de Darfur**, que culminó sus actividades el 31 de diciembre de 2020 según lo estipulado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (2363 (2017) y 2429 (2018)).⁶³ La retirada de la misión coincidió con nuevos enfrentamientos entre miembros de diferentes comunidades en enero de 2021 que dejaron un balance de alrededor de **250 personas muertas y más de 100.000 desplazados en los estados de Darfur**

La retirada definitiva de la UNAMID de Darfur (Sudán) dejó un vacío de seguridad que provocó un aumento de la violencia en relación a años previos

Occidental y Meridional. También en Darfur del Norte se registraron a mediados de enero enfrentamientos entre el SLM/A-AW y tropas gubernamentales con un saldo de 17 personas muertas. Si bien las labores de protección de los civiles en Darfur, que hasta la fecha realizaba la UNAMID, debían de ser asumidas por el Gobierno de Sudán y por la nueva misión de asistencia de la ONU en Sudán, la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), el incremento de la violencia en enero puso de manifiesto la vulnerabilidad que para las poblaciones locales supuso la retirada de la misión híbrida, hecho sobre el que ya habían alertado organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional denunció en enero el vacío de seguridad creado en Darfur, así como el fracaso de las fuerzas de seguridad sudanesas a la hora de proteger a la población civil, instando al Consejo de Seguridad de la ONU a detener la retirada de la UNAMID

para proteger a los civiles hasta que las condiciones de seguridad lo requirieran. Si bien la UA también propuso realizar una retirada gradual para evitar dejar un vacío, el Gobierno de Sudán ya había manifestado su negativa a mantener la misión híbrida, y desplegó en la región el 22 de enero a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –fuerzas paramilitares sudanesas– para ayudar a restablecer la seguridad. Durante los meses de febrero y marzo los brotes de violencia se siguieron produciendo en la región y, en abril, un nuevo enfrentamiento entre miembros de comunidades árabes y massalit en la capital del estado de Darfur Occidental, el-Geneina, y sus alrededores, volvió a provocar al menos 132 muertos y decenas de miles de desplazados, obligando al Gobierno de Sudán a declarar el estado de emergencia en la región. El jefe del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdul Fatah Al Burhan, y una delegación de oficiales militares y de inteligencia, visitaron El Geneina el 12 de abril en un intento de mediar entre las dos partes, si bien los representantes de la comunidad massalit rechazaron la mediación el 15 de abril, acusando a los paramilitares de las RSF de apoyar los ataques recurrentes contra sus comunidades.

En el mes de junio, con el objetivo de tratar de mantener la seguridad y proteger a los civiles en Darfur tras los repetidos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el primer semestre del año, el Gobierno anunció **la formación de una fuerza conjunta para Darfur** compuesta por unos 20.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, el Servicio General de Inteligencia, las RSF, las fuerzas policiales, así como miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz de octubre de 2020, e inició su despliegue el 14 de septiembre.

60. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

61. UNHCR, *Refugee Data Finder*, 2021.

62. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

63. Según lo estipulado en la resolución 2559 (2020) del Consejo de Seguridad de la ONU, la UNAMID completó su ejercicio de retirada el 30 de junio de 2021. La retirada de la UNAMID coincidió con el establecimiento de la Misión de Asistencia Integrada para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), de conformidad con la Resolución 2524 (2020).

La violencia, sin embargo, se mantuvo en la región hasta finalizar el año, con repetidos enfrentamientos intercomunitarios en diferentes puntos de Darfur. El 19 de octubre, un brote de violencia en las localidades de Tawila y Dar es-Salam, en Darfur Septentrional hizo que las autoridades declarasen el estado de emergencia; y en noviembre, nuevos enfrentamientos entre comunidades pastoralistas en Jebel Moon, fronteriza con Chad, provocaron 43 muertos, más de mil viviendas quemadas en 46 comunidades y alrededor de 4.300 personas desplazadas. Estos últimos brotes de violencia se produjeron en un periodo de **crisis nacional** marcada por el intento de golpe de Estado en septiembre, y otro golpe que logró derrocar a la parte civil del Gobierno de Transición el 25 de octubre, abriendo un proceso de movilizaciones populares en todo el país.⁶⁴ De forma paralela a las dinámicas de violencia en la región de Darfur, durante el año el Gobierno sudanés y el SLM/A-AW siguieron manteniendo **negociaciones de paz, sin lograr avances relevantes**.⁶⁵ Asimismo, al finalizar el año, el Comité Internacional de la Cruz la Cruz Roja (CICR) en Sudán anunció la firma de un Memorando de Entendimiento con las RSF para formar y capacitar a las fuerzas paramilitares sobre derecho humanitario y la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Suport Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Durante el año se extendieron los ceses al fuego unilaterales realizados por rebeldes y Gobierno en las regiones meridionales de Kordofán Sur y Nilo Azul, hecho que ayudó a mantener un bajo nivel de violencia, registrando 193 muertes asociadas al conflicto armado, la mayoría de ellas en la región de Kordofán Sur (182).

A principios de año el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés del Norte dirigido por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N al-Hilu) –uno de los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de octubre de 2020– prorrogó durante cinco meses, a partir del 6 de febrero, el cese unilateral de hostilidades que había iniciado en 2020. Este gesto permitió mantener abiertas las **negociaciones de paz** con el Gobierno de Transición⁶⁶, las cuales se hallaban estancadas debido a discrepancias en relación a la demanda de creación de un Estado aconfesional. El 28 de marzo se logró un importante avance en las negociaciones, cuando las partes firmaron la Declaración de Principios entre el Gobierno de Transición de Sudán y el SPLM-N al-Hilu en el que se acordó el establecimiento de un Estado federal, civil y democrático en Sudán, con la libertad de religión, libertad de creencias y prácticas religiosas y de culto garantizadas para todo el pueblo sudanés. El acuerdo separa las identidades de cultura, región, etnia y religión del Estado, principios que estarán consagrados en la Constitución. Tras la firma de la Declaración, el 26 de mayo se reanudaron las conversaciones entre las partes en la capital de Sudán del Sur, Juba, con miras a integrar al grupo rebelde en el Gobierno de Transición. Sin embargo, las conversaciones se suspendieron a mediados de junio debido a desacuerdos relativos a la delegación de poderes entre el gobierno central y las regiones y a la integración de los grupos armados en el ejército sudanés.⁶⁷

Paralelamente al transcurso de las conversaciones de paz, en la región de Kordofán Sur se siguieron registrando algunos eventos violentos. En junio el Gobierno de Sudán declaró el estado de emergencia y un toque de queda nocturno en Kordofán Sur tras enfrentamientos en el área de Qadir entre miembros de las comunidades de Dar Ali y Kenana. A partir de octubre también se registró un aumento de la violencia en Kordofán Sur, así como en otras regiones del país como Darfur o Kordofán del Oeste, coincidiendo con la **crisis nacional** marcada por golpe de Estado del 25 de octubre, el cual generó un proceso de movilizaciones populares en todo el país.⁶⁸ Entre finales de noviembre y principios de diciembre, nuevos enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de comunidades kenana y hawazma en la localidad de Abu Jubayhah, dejaron al menos seis personas muertas, 14 heridas y unas 15.000 desplazadas, obligando a las autoridades locales a imponer un toque de queda en la localidad y al despliegue de las RSF.

64. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones).

65. Véase resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones).

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año el país presentó unas dinámicas de violencia similares al año anterior, debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, la continuidad de episodios de violencia intercomunitaria o las nuevas tensiones generadas

dentro del SPLA-IO que afectaron principalmente a las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei, la Zona Administrativa de Pibor y Alto Nilo. Según datos de ACLED, durante el 2021 se registraron un total de 699 episodios de violencia armada en el país que costaron la vida a 1.936 personas, cifras muy similares a las reportados en 2020 cuando se registraron 2.252 muertes asociadas a batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados (IED).⁶⁹ Este escenario mantuvo un año más la situación de emergencia humanitaria en el país. Según Naciones Unidas, los altos niveles de violencia, junto con las inundaciones registradas y los efectos de la pandemia de la COVID-19, generaron que alrededor de 7,2 millones de personas (el 60 % de la población) padecieran altos niveles de inseguridad alimentaria. El resurgimiento del conflicto armado en partes de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei y la Zona Administrativa de Pibor siguió dificultando el acceso humanitario y el personal humanitario siguió siendo objeto de ataques.⁷⁰ Por otro lado, según los datos de ACNUR de mediados de 2021, **en Sudán del Sur 2,3 millones de personas se encontraban refugiadas fuera de las fronteras nacionales y otras 1,7 millones estaban en situación de desplazamiento interno.**⁷¹ En el primer semestre del año se registraron 61.7000 nuevas personas refugiadas y 170.400 nuevos desplazamientos internos. Estos datos siguen colocando al país como el escenario de la **mayor crisis de personas refugiadas en África y la cuarta más grande del mundo**, y en el décimo lugar a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas.⁷²

Paralelamente, durante el año se avanzó lentamente en la aplicación de las cláusulas del acuerdo de paz de 2018 y se mantuvieron las conversaciones de paz iniciadas en 2020 en Roma entre el Gobierno y los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de 2018, organizados a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC.⁶⁶ **No obstante, la violencia se mantuvo entre diferentes actores a lo largo del año**, principalmente en enfrentamientos entre el Ejército de Sudán del Sur (SSPDF) y las fuerzas del Frente de Salvación Nacional (NAS) liderado por el general Thomas Cirillo –actor no signatario del acuerdo de paz–, así como choques entre distintas facciones del SPLA-IO después del estallido de luchas internas a principios de agosto. Por otro lado, también se mantuvieron los episodios de violencia intercomunitaria, principalmente concentrados en los estados de Alto Nilo, Warrap, Lagos, Ecuatoria Central y Ecuatoria Occidental, motivados por tensiones entre comunidades aliadas a diferentes facciones del Gobierno, así como a disputas por el acceso a recursos y por robo de ganado. El 19 de febrero, coincidiendo con el primer

69. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

70. Naciones Unidas, *Informe del Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU sobre La situación en Sudán del Sur*, S/2021/784, 9 de septiembre de 2021.

71. UNHCR, *Refugee Data Finger*, 2021.

72. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

aniversario de la creación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, la ONU advirtió que los niveles de violencia en el país eran los más altos registrados desde el comienzo de la guerra, particularmente en los estados de Ecuatoria Central, Warrap, Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor, y solicitó al ejecutivo avances en la implementación del acuerdo de paz. El 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió por unanimidad el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (UNMISS) hasta el 15 de marzo de 2022 y exigió a todas las partes en conflicto el cese inmediato de los enfrentamientos y el inicio de un diálogo político. Asimismo, amenazó con imponer nuevas sanciones y exigió que todos los Estados miembros cumplan con sus obligaciones de prevenir el suministro, venta o transferencia de armas al país, debido al embargo de armas. Posteriormente, durante el mes de mayo se produjo una nueva escalada de violencia en el país –la peor registrada en el año– que dejó más de 400 personas muertas en diferentes eventos violentos. En el área administrativa del Gran Pibor, en la zona de Gumuruk, entre el 10 y el 17 de mayo se registraron enfrentamientos entre miembros de comunidades lou nuer y dinka, por un lado, y murle, por otro, en los cuales más de 150 personas perdieron la vida. Por otro lado, en la región de Ecuatoria Central también se registró un aumento de los ataques a lo largo de rutas comerciales claves contra civiles y vehículos comerciales atribuidos al NAS. Estos hechos provocaron que a finales de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución por la que prorrogó el embargo de armas y las sanciones contra Sudán del Sur por un año, medida que fue cuestionada por el Gobierno sursudanés argumentando que ponía en peligro los progresos del acuerdo de paz y el equipamiento de sus Fuerzas Armadas para la defensa nacional.

En Sudán del Sur se mantuvieron las dinámicas de violencia e inestabilidad que afectaron principalmente a las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei, la Zona Administrativa de Pibor y Alto Nilo

En medio del deterioro de la situación de seguridad, entre el 15 y el 18 de julio se celebró en Roma una nueva ronda de conversaciones de paz entre el Gobierno de Transición y las facciones de la SSOMA dirigidas por Paul Malong y Pagan Amum.. Sin embargo, los intentos de reiniciar las conversaciones de paz entre el Gobierno y la facción SSOMA liderada por Cirillo permanecieron estancados, lo que contribuyó al mantenimiento de la violencia. Asimismo, a las tensiones por la lentitud en la implementación del acuerdo de paz y a las negociaciones a dos bandas entre las diferentes facciones del SSOMA, en agosto se añadió una **división dentro del movimiento del SPLA-IO dirigido por Riek Machar que sumó una nueva crisis en el país**. Miembros del SPLA-IO anunciaron, mediante la Declaración de Kitgwan, la destitución de Machar como líder del movimiento y nombraron en su lugar a Simon Gatwech Dual como líder interino, lo cual abrió

un periodo de luchas y enfrentamientos armados en el estado de Alto Nilo entre las fuerzas leales a Machar y la disidencia comanda por Dual, autodenominada facción “Kitgwan”, con un balance de decenas de muertes. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) pidió al SPLM-IO el cese de las hostilidades dentro de su grupo, pero las hostilidades se mantuvieron en septiembre. El presidente Kiir inició en octubre conversaciones con la facción “Kitgwan”, lo cual aumentó las tensiones dentro del Gobierno de Transición, debido al desacuerdo de Riek Machar. Hasta el cierre de año se siguieron registrando enfrentamientos intercomunitarios en el país, agravando la crisis humanitaria, incrementada por los efectos de las inundaciones que se registraron en el país en octubre y noviembre, las más devastadoras de los últimos 60 años. A finalizar el año, Amnistía Internacional denunció que la violencia en el país, dirigida principalmente contra los civiles, podría equivaler a crímenes de guerra.

Por último, resulta significativo resaltar que en **materia de violencia sexual**, la UNMISS denunció un número preocupante de actos de esta naturaleza perpetrados por todas las partes en el conflicto. Frente a ello, el Ejecutivo sursudanés presentó el 19 de junio el plan de acción para las Fuerzas Armadas sobre la lucha contra la violencia sexual relacionada con el conflicto. El mismo unifica los planes de acción del Ejército y del SPLA sobre la prevención y la eliminación de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)- , milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia registró un significativo descenso en los niveles de violencia y letalidad durante 2021 en comparación con años anteriores, en el marco de la implementación del acuerdo de cese el fuego suscrito entre las principales partes contendientes en Ginebra el 23 de octubre de 2020. Según los datos del centro de estudios ACLED, en 2021 murieron un total de 115 personas a causa de diversos episodios de violencia, una cifra significativamente menor a la registrada el año anterior, en el que perdieron la vida casi 1.500 personas, y a la de 2019, cuando se contabilizaron más de 2.000 personas fallecidas a causa de las hostilidades. Pese a la innegable reducción en los enfrentamientos, a lo largo del año se mantuvieron las incertezas sobre el devenir de Libia por el incumplimiento de otros aspectos del cese el fuego, las continuas denuncias sobre abusos y múltiples formas de violencia por parte de diversos actores armados y por las crecientes tensiones y vaivenes del proceso político. Al finalizar 2021 se imponía un clima de incertidumbre sobre el futuro del país ante la suspensión de las elecciones que debían celebrarse el 24 de diciembre.⁷³

A nivel general, el principal cambio en las dinámicas del conflicto armado en 2021 respecto al año anterior fue la suspensión de las hostilidades entre las fuerzas del GNA, el Gobierno basado en Trípoli –apoyado por Turquía–, y las fuerzas afiliadas al exgeneral Khalifa

Haftar, conocidas indistintamente como LNA o ALAF y con especial fuerza en el este del país –respaldadas principalmente por Egipto, EAU y Rusia–, que habían protagonizado numerosos enfrentamientos en 2019 y 2020. **El cese de hostilidades transcurrió en paralelo a las negociaciones intra-libias sobre temas políticos, económicos y de seguridad auspiciadas por la ONU y diversos actores internacionales que, entre otras cosas, desembocaron en la conformación de un Gobierno de unidad a principios de año.**⁷⁴ El cese el fuego se mantuvo pese a las muestras de desconfianza iniciales, acusaciones cruzadas de incumplimientos y a que ambos sectores continuaron exhibiendo su poderío a través de desfiles armados. Los principales hechos de violencia registrados durante el año fueron choques y disputas entre algunos de los numerosos grupos armados y milicias activos en el país –los incidentes se produjeron principalmente en Trípoli y en la zona fronteriza con Chad–, asesinatos –entre los que destaca el de Mahmoud al-Werfalli, comandante de una milicia afiliada al LNA e investigado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional–, la detonación de restos de explosivos, y acciones armadas de ISIS. La filial de Estado Islámico en Libia reivindicó en junio su primer ataque después de varios meses en Sebha (sur), en el que resultaron muertos seis combatientes de una milicia próxima a ALAF. Tanto ISIS como Al-Qaeda en el Magreb Islámico continuaron operando en todas las regiones del país y lanzaron amenazas a civiles y personal de la ONU. Cabe destacar también que en 2021 se hallaron nuevas fosas comunes en áreas que estuvieron controladas por milicias próximas a ALAF. Amnistía Internacional también denunció que tribunales militares en el este del país sentenciaron a cientos de civiles críticos con ALAF entre 2018 y 2021, incluyendo 22 sentencias de muerte.

Pese al descenso de la violencia por el cese el fuego y la conformación de un gobierno de unidad, el futuro político de Libia parecía incierto al finalizar el año tras las suspensión de las elecciones

Paralelamente, y como en años previos, durante 2021 la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, continuó documentando desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, arrestos arbitrarios, violencia sexual asociada al conflicto, torturas, ataques contra personas defensoras de los derechos humanos por parte de diversos grupos armados y gravísimos abusos contra población migrante y refugiada. **En un contexto de auge de la ruta central del Mediterráneo como vía para alcanzar**

Europa, se incrementó de manera exponencial el número de personas migrantes y refugiadas detenidas en Libia –según datos de UNSMIL, en agosto había más de 5.800 personas migrantes y refugiadas retenidas arbitrariamente solo en centros oficiales, frente a un millar en enero. Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras documentaron y denunciaron los abusos contra este colectivo en centros de detención y MSF incluso suspendió sus actividades en dos de

73. Véase el resumen sobre Libia en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

74. Ibid.

estos recintos ante las vulneraciones identificadas. La Corte Penal Internacional también alertó que había recabado evidencias de graves crímenes en los centros de detención, incluyendo torturas y violencia sexual. En la misma línea se pronunció en octubre la comisión de investigación independiente sobre Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideró que los abusos contra las personas migrantes y refugiadas en el país podían considerarse crímenes contra la humanidad. Tras un año de trabajo en el que se analizaron hechos ocurridos en el país norteafricano desde 2016, la comisión también concluyó que existían evidencias de crímenes de guerra y que todas las partes involucradas en el conflicto –incluyendo terceros Estados, combatientes extranjeros y mercenarios– habían vulnerado principios del derecho internacional humanitario, en particular los relativos a la proporcionalidad y distinción entre civiles y combatientes. La comisión subrayó el grave impacto de la violencia en la población civil, especialmente entre 2019 y 2020, destacando las consecuencias de los ataques aéreos, los remanentes de minas y otros artefactos explosivos y la destrucción de escuelas y hospitales.⁷⁵

Entre las dificultades para garantizar un cambio de largo plazo en las dinámicas del conflicto en Libia cabe destacar el incumplimiento del embargo de armas al país impuesto en 2011 –en marzo un panel de expertos de la ONU consideró que la medida seguía siendo “totalmente inefectiva”– y la elevada presencia de fuerzas extranjeras y mercenarios en Libia. Pese a que el acuerdo de cese el fuego adoptado en octubre de 2020 preveía una retirada total del territorio libio –tierra, mar y aire– en un plazo de tres meses,⁷⁶ diversas fuerzas foráneas continuaron presentes en el país. Entre ellas, fuerzas turcas y mercenarios procedentes de Rusia, Siria, Chad y Sudán. A lo largo del año, Naciones Unidas insistió en la necesidad de poner fin a la intervención extranjera. En el marco de la segunda Conferencia sobre Libia celebrada en Berlín en junio, el secretario general de la ONU apeló a todos los actores implicados en el conflicto –internos y externos– a que acordaran un plan con un cronograma claro de repliegue. No fue hasta octubre que la Comisión Militar Conjunta 5+5 anunció un plan de acción para la retirada “en fases, balanceada y sincronizada” de mercenarios y fuerzas extranjeras. Sin embargo, no trascendieron los plazos para su implementación y la propuesta estaba pendiente de consideración y apoyo por parte de los actores internacionales involucrados en Libia.⁷⁷ También en octubre llegaron a Libia los primeros observadores de la ONU – de un equipo de 60 personas– que se encargarán de supervisar el cese el fuego tras la aprobación de este mecanismo de supervisión en abril (resolución 2570 del Consejo de Seguridad). Naciones Unidas continuó insistiendo también en la importancia

de activar procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de combatientes, de reforma al sector de seguridad (RSS) y de unificación de las fuerzas militares en Libia. Al finalizar el año, la tensión se incrementó ante la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones previstas. Las autoridades electorales no consiguieron publicar la lista definitiva de candidatos en medio de intensas disputas sobre la ley electoral y la elegibilidad de algunos postulantes, entre ellos figuras controvertidas como el general Haftar; Saif al-Islam Gaddafi, uno de los hijos de Muammar Gaddafi; y el primer ministro Dbeibbah, que había anunciado que no se presentaría a los comicios. La suspensión de la votación motivó un despliegue de vehículos y hombres armados en las afueras de Trípoli. Al acabar 2021, no había acuerdo sobre la nueva fecha de las elecciones, ni sobre la continuidad del mandato del gobierno de unidad, que expiraba con los comicios.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Síntesis:	En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

Persistió el conflicto armado en Colombia, con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, el grupo armado ELN, grupos paramilitares de diferente signo y grupos disidentes de la guerrilla de las FARC, desmovilizada tras el acuerdo de paz de 2016. Durante todo el año se registraron enfrentamientos

75. HCHR, *Libya: Evidence crimes against humanity and war crimes committed since 2016, UN report finds*, 4 de octubre de 2021; OHCHR, *Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya*, 1 de octubre de 2021. La comisión continuará su trabajo y se espera que presente un nuevo informe a mediados de 2022.

76. UNSMIL, *Agreement for a Complete and Permanent Ceasefire in Libya*, 23 de octubre de 2020.

77. UNSMIL, *United Nations welcomes the JMC's signing of Action Plan for the withdrawal of mercenaries, foreign fighters and foreign forces*, 8 de octubre de 2021.

entre todos estos grupos en diferentes zonas del país, especialmente en Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Norte de Santander, Santander y sobre todo en el Cauca, donde los enfrentamientos fueron constantes y se registraron una parte importante de las muertes como consecuencia de la violencia. Las disidencias de las FARC, el ELN y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo se enfrentaron durante el año por el control territorial de diversas zonas del país y se intensificaron los enfrentamientos en la costa pacífica. Se produjeron enfrentamientos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y también atentados con explosivos, así como ataques contra infraestructuras. La Fundación Conflict Responses señaló que las disidencias de las FARC se habrían organizado en torno a 30 estructuras surgidas desde el año 2016, sin que pudiera hablarse de un proyecto de alcance nacional que las agrupe y coordine a todas, aunque algunos de estos grupos sí tendrían aspiraciones de establecer una coordinación de todos los grupos disidentes procedentes de la guerrilla desmovilizada, como Segunda Marquetalia o la facción liderada por Gentil Duarte.⁷⁸ Según el centro de análisis CERAC, entre junio y noviembre se produjo un aumento de los combates en los que participó el grupo armado ELN, con un total de 25 enfrentamientos en los que se constató la participación de este grupo. La misión de verificación de la ONU en el país constató una intensificación de la violencia en las zonas afectadas por el conflicto y que han sido priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. La violencia provocó el desplazamiento forzado de población de forma constante y miles de personas tuvieron que huir de sus hogares como consecuencia del conflicto armado. Según la organización CODHES, **entre enero y noviembre de 2021 se desplazaron 82.846 personas, lo que supuso un aumento del 169% con respecto a las cifras de desplazamiento forzado en 2020 y la mayor cifra en los últimos cinco años.** Esta organización señaló que se trató en su mayoría de población afrodescendiente e indígena, siendo los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó y Cauca los más afectados. Además, el ELN persistió en la práctica del secuestro, tanto de civiles como de militares.

El conflicto armado también se vio agravado por la situación de tensión social y política vivida en el país tras el inicio de las protestas sociales conocidas como Paro Nacional. La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió un aumento de los enfrentamientos armados en varios municipios con presencia de actores armados que pudieron aprovechar el hecho de que las fuerzas de seguridad estuvieran concentradas en otros lugares en la contención de las protestas sociales. INDEPAZ identificó que durante 2021 se produjeron 88 masacres en las que murieron 313 personas, lo que supuso una reducción en el número de víctimas mortales con respecto al año anterior. Entre los enfrentamientos destacados del año cabe destacar en marzo, una operación de las fuerzas

de seguridad en el Guaviare contra el frente disidente de las FARC Gentil Duarte, durante la que murieron 12 personas. En junio se produjo un atentado contra instalaciones del Ejército en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. El Gobierno señaló que detrás del atentado se hallaría el ELN o disidentes de las FARC, aunque los primeros negaron la autoría de los hechos. Como consecuencia de la explosión de un coche bomba resultaron heridas 36 personas, 29 de ellas militares. Se trató del atentado más grave en el país desde el que tuvo lugar en Bogotá en enero de 2019 y que fue llevado a cabo por el ELN. Además, se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, el ELN y las fuerzas de seguridad venezolanas en la zona fronteriza entre los dos países en el departamento de Arauca en Colombia y el estado de Apure en Venezuela, que se intensificaron durante el año. Las Fuerzas Armadas venezolanas habrían intensificado sus operaciones militares contra la insurgencia colombiana. También se repitió la violencia contra excombatientes desmovilizados de las FARC y entre enero y septiembre se habían producido 44 asesinatos de personas desmovilizadas según la misión de la ONU en el país, un número ligeramente inferior al del mismo periodo en el año anterior. Desde la firma del acuerdo de paz se produjeron 292 asesinatos de excombatientes (283 hombres y 9 mujeres).⁷⁹ Además, según INDEPAZ, 168 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados durante 2021, de los que 26 eran mujeres. Esta organización destacó que el departamento de Cauca fue en el que se cometió un mayor número de asesinatos, en consonancia con la situación de creciente violencia que se vivió en este departamento durante el año.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (K), Frente Nacional de Resistencia (NRF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en

78. Eduardo Álvarez Venegas. *Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución*, Fundación CORE, 2021.

79. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, *Informe del Secretario General*, S/2021/824, 24 de septiembre de 2021.

1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El año 2021 estuvo marcado en Afganistán por el ascenso al poder de los talibanes 20 años después de su derrota y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses, así como de otros países, tras dos décadas de ocupación. El 15 de agosto los talibanes tomaron el control de Kabul, capital del país, después de que el Gobierno encabezado por el presidente Ashraf Ghani abandonara el país y los intentos de llegar a un acuerdo negociado entre talibanes y Gobierno fracasaran.⁸⁰ Aunque durante todo el año la violencia fue en aumento, la ofensiva militar talibán se intensificó tras el anuncio por parte de EEUU de que la retirada militar completa del país concluiría el 11 de septiembre, cuatro meses después de lo inicialmente previsto en el calendario acordado por la administración Trump y los talibanes en su acuerdo de febrero de 2020. De acuerdo con las cifras de mortalidad relacionadas con el conflicto recopiladas por UNAMA, durante los seis primeros meses del año 1.659 civiles murieron como consecuencia de la violencia, lo que representó un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior y un cambio en la tendencia de reducción de mortalidad de los años anteriores. Según los datos del centro de investigación ACLED, durante 2021 murieron 41.731 personas como consecuencia de la violencia, pero 41.000 de estas muertes se produjeron entre los meses de enero y agosto, con una reducción drástica de la mortalidad como consecuencia de la violencia armada tras la toma del poder por parte de los talibanes. El año se iniciaba

El anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses dio lugar a una escalada en la ofensiva talibán en todo el país que culminó con la caída del Gobierno de Ashraf Ghani

con intensos enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas de seguridad afganas y con ataques por parte de talibanes infiltrados en las fuerzas de seguridad. Además, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo bombardeos aéreos que además de causar muertes entre las filas talibanes también provocaron numerosas muertes civiles, como el que causó la muerte de 18 civiles –la mayoría menores–, en la provincia de Nimroz. Los talibanes fueron expandiendo su control territorial y en febrero lograron controlar varios distritos en la provincia de Zabul e importantes victorias militares en la provincia de Kunduz. Durante los meses siguientes continuaron los enfrentamientos y ataques.

En abril, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que la retirada de las tropas estadounidenses se completaría antes del 11 de septiembre, dando lugar a una intensificación de la violencia que diferentes analistas interpretaron como la preparación de una ofensiva a gran escala en todo el país. A partir del 1 de mayo, fecha inicialmente acordada para la finalización de la retirada militar estadounidense, la ofensiva aumentó y múltiples bases y destacamentos de las Fuerzas Armadas fueron abandonados ante el avance talibán, que progresivamente fueron ganando el control de las zonas rurales del país. Miles de soldados se rindieron en los meses siguientes ante la falta de capacidad militar y el decreciente apoyo militar internacional, especialmente aéreo, en el que habían basado su capacidad de control del territorio. Gran parte del control territorial por parte de los talibanes se logró mediante acuerdos de alto el fuego locales tras los cuales los talibanes pasaban a controlar la zona y los militares a abandonar las instalaciones militares rindiéndose y marchándose. El avance talibán provocó el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas en todo el país y en las semanas previas a la toma de Kabul se estimaba que alrededor de 30.000 personas estaban abandonando el país semanalmente. En julio los talibanes iniciaron ataques contra la ciudad de Kandahar y consolidaron sus posiciones en varias zonas fronterizas del país. A pesar de que se retomaron ataques aéreos de las fuerzas afganas con apoyo internacional no se logró contrarrestar los avances terrestres.

La retirada de las tropas estadounidenses se había completado prácticamente en su totalidad lo que dejó en evidencia la debilidad de las Fuerzas Armadas afganas. A pesar de que oficialmente se señalaba que estaban integradas por 30.000 soldados, algunos medios de comunicación señalaron que la cifra real podría ser un tercio de la oficial. El 6 de agosto se produjo la toma de la primera capital de provincia por parte de los talibanes, que capturaron Zaranj, capital de Nimroz, dando paso en los dos días siguientes a la caída de otras cuatro capitales. Finalmente, tras la

80. Véase el resumen sobre Afganistán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

captura de Kandahar, Herat, Ghazni y otras importantes zonas, el 15 de agosto los talibanes consolidaban su control de la ciudad de Kabul al tiempo que el Gobierno caía, con la huida del país del presidente Ashraf Ghani y otros cargos de alto nivel. Pocos días antes, el Gobierno de EEUU había ordenado el cierre de su embajada y había trasladado su misión diplomática al aeropuerto.

En los días siguientes miles de personas, especialmente colaboradores de las tropas y gobiernos internacionales, trabajadores de organizaciones internacionales, así como activistas, defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres y periodistas, trataban de huir concentrándose en el aeropuerto, desde donde algunos gobiernos llevaron a cabo evacuaciones aéreas y donde se produjeron enormes aglomeraciones y diferentes momentos de tensión. EEUU desplegó a 3.000 soldados en el aeropuerto. El 26 de agosto dos bombas explotaron en el aeropuerto en un atentado reivindicado por ISIS-K, causando la muerte de 200 afganos y 13 soldados estadounidenses. El 30 de agosto se produjo el último vuelo militar estadounidense desde Kabul, dando por concluida la presencia militar de EEUU en el país. A principios de septiembre los talibanes tomaron el control de la provincia de Panjshir, único foco activo de resistencia, aunque en los meses siguientes se produjeron enfrentamientos entre el Frente Nacional de Resistencia (NRF) y los talibanes en las provincias de Parwan, Panjshir y Baghlan. Los talibanes nombraron un Gobierno interino, encabezado por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores del movimiento talibán, como primer ministro y Abdul Ghani Baradar, negociador del acuerdo de 2020 con EEUU, como viceprimer ministro. Tras la marcha de EEUU y del resto de tropas internacionales del país, tanto el Gobierno estadounidense como el Banco Mundial y el FMI congelaron los fondos del país en el extranjero y suspendieron los pagos, dando inicio a una grave crisis humanitaria en el país, debido a la enorme dependencia de la economía afgana de la circulación de dinero efectivo y a la suspensión de la ayuda humanitaria internacional. Además, se produjeron diferentes manifestaciones y protestas sociales en contra del nuevo régimen, algunas de ellas protagonizadas por mujeres que denunciaban su exclusión del ámbito público tras la toma del poder por los talibanes, así como la prohibición del derecho a la educación para las niñas mayores de 12 años. La violencia armada se redujo drásticamente, pero se produjeron diferentes ataques contra las fuerzas talibanes reivindicados por ISIS-K, que se incrementaron notablemente a partir del mes de octubre, cuando un atentado contra una mezquita chif en la provincia de Kunduz causó la muerte de 40 civiles y otro atentado de las mismas características en la ciudad de Kandahar ocasionó la muerte de 50 civiles. En noviembre, un atentado contra el hospital militar Sardar Daud Khan en Kabul causó decenas de muertos. Naciones Unidas señaló que había presencia de ISIS-K en todas las provincias del país.

India (Jammu y Cachemira)

Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en Jammu y Cachemira continuó activo todo el año, aunque se redujo el impacto en términos de mortalidad como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, 274 personas murieron como consecuencia de la violencia. El centro de investigación ACLED recogió cifras similares, registrando un total de 290 fallecimientos. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos armados y operaciones de las fuerzas de seguridad que provocaron fallecimientos y decenas de personas heridas. Además, la situación política y social continuó condicionada por la retirada de la condición de estado y las continuas restricciones impuestas por el Gobierno para contrarrestar la actividad política y armada de la oposición cachemir. En abril se produjo una escalada de la violencia, después de que en un atentado contra un dirigente del partido en el poder BJP muriera un policía, lo que desencadenó que las fuerzas de seguridad mataran a tres insurgentes, incluyendo a dos de los supuestos responsables de la muerte del policía.

Estos acontecimientos derivaron en protestas y manifestaciones. En los días posteriores se produjeron numerosos arrestos de personas acusadas de pertenecer a organizaciones insurgentes y se repitieron los enfrentamientos armados que causaron la muerte de al

menos 10 personas. Además, medios de comunicación denunciaron que la policía les había advertido para que no realizaran coberturas en directo de operaciones de seguridad, en lo que consideraban un ataque a la libertad de prensa y de expresión.

En septiembre, tras la muerte de líder independentista cachemir Syed Ali Shah Geelani, de 92 años, que permanecía bajo arresto domiciliario desde 2010, el Gobierno decretó un bloqueo de las comunicaciones y el toque de queda ante el temor de que se produjeran protestas sociales, ya que la familia declaró que había sido enterrado por las fuerzas de seguridad, pocas horas después de su muerte, sin que se hubieran respetado sus deseos. En octubre escaló de nuevo la violencia, después de que se produjeran varios ataques contra población migrante no musulmana, fundamentalmente hindú y sij, por parte del grupo armado The Resistance Front (TRF), que habría sido creado tras la retirada del estatus de estado y que el Gobierno indio señala como vinculado a los grupos Lashkar-e-Taiba y Hizb-ul-Mujahideen. Tras los ataques el Gobierno indio detuvo a 700 personas para ser interrogadas y 13 personas murieron en operaciones de seguridad. Además, los ataques acrecentaron el temor entre la comunidad local hindú, que en la década de 1990 se desplazó masivamente como consecuencia de la violencia insurgente dirigida contra esta comunidad. Tras los ataques de octubre se produjeron nuevos desplazamientos de población. En noviembre, las fuerzas de seguridad arrestaron al activista y defensor de derechos humanos Khurram Parvez, cofundador de la organización Coalición de la Sociedad Civil de Jammu-Kashmir y presidente de la Federación del Sur Asia contra las Desapariciones Involuntarias.

La detención se produjo tras las denuncias por parte de su organización con respecto al asesinato de varias personas a manos de las fuerzas de seguridad, señalando que se trataba de civiles y no insurgentes, lo que desencadenó también manifestaciones de protesta. En este mes se registraron numerosos incidentes, incluyendo el asesinato de dos civiles por las fuerzas de seguridad en el marco de una operación contra la insurgencia en Srinagar. Las acusaciones de que se trataba de insurgentes derivaron en intensas protestas sociales. Posteriormente se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados. En uno de ellos murió un comandante de Hizbul Mujahideen según señalaron fuentes militares. Por otra parte, el Gobierno indio anunció su intención de convocar elecciones a la asamblea legislativa una vez la comisión de delimitación hubiera concluido su tarea. Esta comisión inició su trabajo para redefinir las circunscripciones electorales tras la pérdida de la categoría de estado de Jammu y Cachemira. Diversos partidos políticos se mostraron contrarios a la convocatoria electoral, exigiendo el retorno al estatus de estado antes de la celebración de comicios.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con el grupo armado naxalita CPI-M continuó activo durante todo el año 2021, aunque se consolidó la tendencia de reducción de la violencia y de la mortalidad asociada al conflicto iniciada en 2019 y se registró la cifra más baja de fallecidos como consecuencia del conflicto armado de las dos últimas décadas. De acuerdo con las cifras de mortalidad registradas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, durante 2021 murieron 237 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y atentados de la insurgencia naxalita. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos que afectaron a distritos de al menos nueve estados indios, aunque los más afectados fueron nuevamente los estados Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha y Telangana. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones contra el CPI-M y se produjeron arrestos durante todo el año. Además, se repitieron de forma esporádica los enfrentamientos, aunque de menor intensidad que en años anteriores y la insurgencia maoísta también llevó a cabo asesinatos selectivos de civiles acusados de colaborar con el Gobierno indio o los gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad. En marzo murieron cuatro comandantes del grupo armado en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad en el distrito de Gaya, estado de Bihar. Días después, el grupo armado señaló que estaba dispuesto a llevar a cabo conversaciones de paz con el Gobierno de Chhattisgarh siempre que se dieran las condiciones para ello, incluyendo el desmantelamiento previo de los campamentos militares en las zonas afectadas por el conflicto; la suspensión de la ilegalización del CPI-M y la puesta en libertad de los dirigentes encarcelados.

En noviembre se llevó a cabo una de las mayores operaciones contra la insurgencia naxalita en el estado de Maharashtra, en la que resultaron muertos 26 integrantes del grupo armado, entre ellos el dirigente Milind Teltumbde, miembro del comité central del CPI-M.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado continuó activo en Pakistán y se registró un aumento de la violencia y de las víctimas mortales, debido fundamentalmente al incremento de acciones del grupo armado TTP, como consecuencia de la victoria talibán en Afganistán, que tuvo repercusiones en las dinámicas del conflicto en el país vecino. Así, la violencia armada fue aumentando progresivamente a lo largo del año, especialmente durante el tercer trimestre, coincidiendo con la toma de control talibán sobre el conjunto de Afganistán.⁸¹ En los últimos años se había reducido la actividad armada de la insurgencia como consecuencia de la intensificación de las operaciones de las fuerzas de seguridad desde 2014, tendencia que podría haber cambiado en la segunda mitad de 2021.

Según las cifras recogidas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, 853 personas murieron en el conjunto del país como consecuencia de la violencia armada, 605 si se excluyen las muertes en la provincia de Baluchistán. De la misma manera que en años anteriores, Khyber Pakhtunkhwa fue la provincia más afectada por la violencia, y especialmente los distritos de las antiguas Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), que son las áreas que concentran la actividad armada de la insurgencia talibán pakistaní. De acuerdo con las cifras recogidas por el centro de investigación ACLED, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, incluyendo los territorios FATA, se registraron 457 muertes durante 2021. Durante todo el año se produjeron operaciones de seguridad, asesinatos selectivos, atentados con explosivos y ataques armados por parte de la insurgencia. Además, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán sobre todo en los distritos de Waziristán Norte y Sur. Aunque se redujo el número de atentados suicidas en el país, que en años anteriores habían ocasionado un elevado número de víctimas mortales, se registraron algunos de consideración como el que llevaron a cabo insurgentes talibanes en abril en Quetta, capital de Baluchistán y que presumiblemente estaba dirigido contra el embajador chino en el país, que se hallaba en la ciudad. Cinco personas resultaron muertas como consecuencia de esta acción, que hirió también a muchas más. De hecho, los atentados contra trabajadores chinos en diferentes infraestructuras del país se repitieron en varios momentos del año. En julio, la explosión de una bomba en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa causó la muerte de nueve ingenieros chinos, en un atentado en el que también murieron dos civiles y dos soldados pakistaníes. La salida de las tropas de EEUU en Afganistán podría conllevar un aumento de los ataques contra trabajadores e infraestructuras chinas en Pakistán, que en los últimos años han sido constantes, tanto por parte de la insurgencia talibán, como por los grupos armados nacionalistas baluchis.

En octubre, el primer ministro Ismail Khan desveló que estaba llevando a cabo negociaciones con facciones talibanes activas en el país, que tuvieron como resultado un acuerdo de alto el fuego de un mes. Sin embargo, el acuerdo no impidió que continuaran los atentados por parte de la insurgencia que provocaron la muerte a varios miembros de las fuerzas de seguridad durante el mes de noviembre, en zonas cercanas a la frontera con Afganistán. Durante las negociaciones, el TTP habría presentado tres exigencias al Gobierno pakistaní: autorización para abrir una oficina política en un tercer país; revocar la fusión de las FATA con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa; y la imposición de la interpretación talibán del islam en Pakistán. El acuerdo había sido facilitado por el Gobierno talibán de Afganistán y se esperaba que durante el periodo de vigencia se llevaran a cabo negociaciones y que el acuerdo de alto el fuego pudiera ser prolongado si las negociaciones

81. Véase el resumen sobre Afganistán en este capítulo.

prosperaban. De hecho, se anunció la formación de una comisión negociadora con representantes de ambas partes. Según los talibanes pakistanés, el Gobierno también se había comprometido a poner en libertad a más de 100 prisioneros del grupo armado. No obstante, en diciembre se rompió el acuerdo con la ruptura unilateral del alto el fuego por parte del TTP, que acusó al Gobierno de haber violado el alto el fuego.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Se mantuvo activo el conflicto armado en la provincia de Baluchistán y se registró un ligero repunte en el número de muertes como consecuencia de la violencia.

De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal se registró la muerte de 313 personas. Por su parte, el Center for Research and Security Studies de Pakistán (CRSSP) señaló que 248 personas habían muerto por la violencia en esta provincia. Durante todo el año las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones contra los diferentes grupos insurgentes activos en la provincia, tanto de carácter nacionalista baluchi como los talibanes. Además, los grupos armados llevaron a cabo ataques y se registraron enfrentamientos armados. Según el CRSSP, el grupo armado Balochistan Liberation Army (BLA) fue la insurgencia más activa durante el año, aunque otros grupos como el Balochistan Republican Army (BRA) o el Baluch Liberation Front (BLF) también protagonizaron actos de violencia. Entre las acciones armadas más

destacadas del BLA se encuentran un ataque en febrero en el distrito Kohlu que causó la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad e hirió a otros seis y un atentado en septiembre en el distrito de Harnai causó la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad al estallar su vehículo. En mayo se anunció que uno de los comandantes más destacados del grupo armado, Mir Abdul Nabi Baduzai Bangulzai, había muerto en Kandahar, Afganistán, tras ser atacado por un grupo de hombres armados sin identificar. En mayo, la explosión de una bomba durante la convocatoria de una manifestación pro Palestina convocada por el partido Jamiat Ulema-e-Islam causó la muerte de siete personas sin que trascendiera la autoría. En octubre, una explosión en las inmediaciones de la Universidad de Baluchistán en Quetta al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad causó la muerte de un policía e hirió a otros 17. El atentado no fue reivindicado. También se constató la acción de ISIS en la provincia. En enero el grupo armado reivindicó el asesinato de 11 mineros de etnia hazara en la ciudad de Mach. La población hazara ha sido objeto de persecución por parte de ISIS por ser mayoritariamente de confesión chií. Los mineros fueron secuestrados previamente a su asesinato. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las violaciones de derechos humanos seguían repitiéndose en la provincia. El Consejo de Derechos Humanos de Baluchistán señaló que durante 2020 se habían producido 480 desapariciones forzadas, aunque las cifras podrían ser más elevadas, ya que se trataba de estimaciones conservadoras. Por otra parte, en julio el primer ministro afirmó que se estaban preparando conversaciones con la insurgencia baluchi y anunció el nombramiento de Shahzain Bugti, miembro de la Asamblea Nacional y nieto de Nawab Akbar Bugti, dirigente de la insurgencia baluchi fallecido, como su asistente especial para la reconciliación y la armonía en Baluchistán, aunque se desconocían las funciones que debía desempeñar. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de dirigentes políticos baluchis.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados

del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Los niveles de violencia derivados del conflicto armado entre el Estado filipino y el grupo armado de oposición NPA fueron parecidos a los del año anterior.

A finales de 2020, las Fuerzas Armadas declararon que a lo largo del año 201 miembros del NPA habían muerto en combate, otros 264 habían sido arrestados y otros 7.615 se habían rendido o entregado a las autoridades. Según cálculos a partir de fuentes periodísticas, a finales de 2021 habían muerto alrededor de 200 personas y muchas más habían resultado heridas. Aunque se desconoce cuántos combatientes del NPA decidieron acogerse a los programas de desmovilización y reintegración del Gobierno en 2021, Manila sostiene que el ritmo siguió siendo muy alto. A modo de ejemplo, solamente en el mes de noviembre, más de 200 combatientes se rindieron en las provincias de Davao y Leyte. En cualquier caso, en varias ocasiones las Fuerzas Armadas declararon que seguía vigente su objetivo de erradicar militarmente al NPA antes de la finalización del mandato de Rodrigo Duterte en junio de 2022. En cuanto a los principales episodios de confrontación armada entre las Fuerzas Armadas y el NPA, cabe destacar la muerte de 25 combatientes a mediados de agosto en la provincia de Samar Oriental durante una operación en la que el Ejército utilizó drones para identificar los campamentos del NPA y aviones militares para bombardear las posiciones del grupo. Según el Gobierno, las tres provincias que conforman la isla de Samar (Samar Occidental, Central y Oriental) son una de las principales zonas de influencia del NPA. En Samar Oriental, por ejemplo, hay 29 municipios en los que el grupo mantiene una fuerte presencia, mientras que en otros 45 el Gobierno la ha eliminado o reducido a la mínima expresión. En los meses de septiembre y octubre también se registraron numerosos enfrentamientos entre las partes, con 22 y 19 víctimas mortales respectivamente. Entre los fallecidos en el mes de octubre cabe destacar la muerte de Jorge Madlos, también conocido como Ka Oris, portavoz del grupo y uno de los máximos dirigentes del NPA en las últimas décadas. Según el Gobierno, la muerte de Madlos es un duro revés para el NPA. En el mes de diciembre las Fuerzas Armadas también utilizaron apoyo aéreo en una operación contra unos 70 combatientes que se habrían reunido cerca de la ciudad de Iloilo para celebrar el 53º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Filipinas, y en la que hasta una veintena de combatientes pudieron

haber muerto, según el Ejército. El Gobierno siguió acusando al NPA de violar el derecho internacional humanitario (especialmente por la utilización de minas antipersonas y por sus ataques a población civil), mientras que tanto el movimiento comunista como numerosas organizaciones de derechos humanos siguieron acusando al Gobierno de ejercer la represión contra determinadas personas acusadas de pertenecer al NPA o a su entorno. En este sentido, en marzo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su alarma por la ejecución de nueve activistas a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Según organizaciones de derechos humanos, cientos de personas han sido asesinadas acusadas de pertenecer a la insurgencia comunista desde la llegada al poder de Duterte en 2016.

Según un estudio⁸² sobre los patrones y dinámicas de la violencia ejercida por el NPA entre los años 2018 y principios de 2021, el grupo armado ha llevado a cabo una actividad armada regular y sostenida en 15 de las 17 regiones administrativas de Filipinas (en todas excepto en Metro Manila y en la Región Autónoma Bangsamoro del Mindanao Musulmán), siendo Bicol (Luzon), Caraga (Mindanao) y Visayas –este, centro y oeste– las regiones más afectadas. Estos datos son coherentes con las declaraciones del NPA durante el año, que dijo estar militarmente activo en 73 de las 81 provincias del país. En cuanto a su modus operandi, el 73% de sus acciones se llevan a cabo con armas pequeñas, y el 15% con artefactos explosivos improvisados o bien con minas antipersonas. La mayor parte de sus ataques se dirigen contra pequeños puestos policiales y militares o consisten en emboscadas contra convoyes de fuerzas de seguridad del Estado, aunque también llevan a cabo ataques contra población civil (normalmente funcionarios del Estado, líderes comunitarios acusados de colaborar con el Estado, que cometen “crímenes” contra la población o bien que rechazan colaborar con el NPA). El informe señala que el NPA también lleva a cabo numerosos ataques contra empresas, especialmente mineras, forestales, agrícolas, eléctricas y de telecomunicaciones. Un informe de las Fuerzas Armadas en 2017 estimaba que el NPA ingresaba alrededor de 50 millones de dólares al año por la extorsión a empresas agrícolas y mineras. Finalmente, cabe destacar que la agencia gubernamental antinarcóticos declaró que entre julio de 2016 y septiembre de 2021 habían muerto unas 6.200 personas en el marco de la llamada guerra contra las drogas que inició Rodrigo Duterte tras llegar al Gobierno, unas cifras inferiores a las que han ofrecido la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (8.663 entre julio de 2016 y junio de 2020); el Tribunal Penal Internacional (entre 12.000 y 13.000, entre julio de 2016 y marzo de 2019); o el centro de investigación ACLED (7.742 entre enero de 2016 y noviembre de 2021).

82. Anton Alifaldi, *Terrorism in the Philippines: Examining the data and what to expect in the coming years*, IHS Markit, 9 de marzo de 2021.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

No trascendieron cifras de mortalidad sobre el conflicto que enfrenta al Estado filipino con varias insurgencias de signo islamista en Mindanao, pero varios análisis sugieren que la intensidad y letalidad de los enfrentamientos se redujo en comparación con el año anterior. En el mes de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que desde principios de año habían muerto 41 combatientes del BIFF y otros cuatro de Abu Sayyaf. Los principales episodios de violencia se registraron en los meses de marzo, mayo y septiembre. En marzo, después de que el BIFF atacara varios destacamentos militares en Maguindanao, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva de gran envergadura en 10 municipios que provocaron la muerte de 24 combatientes y el desplazamiento de más de 66.000 personas en la región de Datu Saudi Ampatuan. En mayo, cinco miembros del BIFF murieron durante la contraofensiva del Ejército para recuperar el mercado público de la localidad de Datu Paglas (provincia de Maguindanao), que el grupo ocupó durante varias horas poco después de que el presidente Rodrigo Duterte hubiera visitado un campamento militar cercano. Después de los enfrentamientos, que provocaron la evacuación temporal

de parte de la población de Datu Paglas, el presidente instó a la Autoridad Transicional de Bangsamoro (el gobierno provisional de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada por el MILF) a controlar y combatir a los grupos armados que operan en la región para evitar la declaración de una ofensiva de alta intensidad por parte de las Fuerzas Armadas. En fechas parecidas, tres combatientes de Abu Sayyaf fueron abatidos por el Ejército en la localidad de Sumisip, en la isla de Basilan. En el mes de septiembre, 16 combatientes del BIFF (además de un soldado) murieron en varios enfrentamientos en la localidad de Shariff Saydona Mustapha, en la provincia de Maguindanao. Los combatientes formaban parte de la facción del BIFF liderada por Ustadz Karialan, una de las tres principales del grupo. Las otras dos facciones del grupo, lideradas respectivamente por Ismail Abubakar y Abu Turaife, sí declararon su lealtad a Estado Islámico, pero Karialan hasta el momento no lo ha hecho. El Ejército declaró que no estaba claro si el comandante Karialan se hallaba entre las personas que murieron. En este sentido, cabe señalar que durante el año murieron dos de los principales líderes del grupo Daula Islamiyah (también conocido como Grupo Maute), Usop Nasif – en abril, cerca de la ciudad de Marawi– y Salahuddin Hassan –en octubre, en la provincia de Maguindanao.

A pesar de todo lo mencionado, **tanto el Gobierno como algunos analistas señalaron en varias ocasiones que los distintos grupos armados de signo islamista que operan en Mindanao cada vez están más debilitados.** Según el Gobierno, tras los graves enfrentamientos entre el Estado y varios grupos armados que tomaron durante varios meses la ciudad de Marawi en 2017, el Estado ha incrementado de manera drástica y sostenida su presión militar contra dichos grupos, lo que habría comportado, entre otras cosas, el debilitamiento de sus fuentes de apoyo y financiación internacional, la reducción de las áreas de control o influencia de estos grupos, o el incremento en el número de desertiones, rendiciones o capturas de combatientes, lo que a su vez habría proporcionado valiosos datos de inteligencia sobre la actividad de los grupos. A finales de septiembre, el Gobierno declaró que unos 300 combatientes del BIFF se habían rendido desde principios de año. Además, en 2021 las Fuerzas Armadas tomaron algunos de los principales campamentos del BIFF o Abu Sayyaf. Según algunos medios de comunicación, en 2021 el BIFF atacó un mercado para abastecerse de alimentos, mientras que Abu Sayyaf habría atacado a población civil también para conseguir comida, un modus operandi que no era habitual tiempo atrás. Según estas mismas fuentes, el incremento de los ataques suicidas que se registró en la región desde el año 2019 podría guardar relación con este creciente debilitamiento de dichos grupos, al ser considerada una estrategia militar mucho más barata y efectiva que tratar de confrontar militarmente a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad. En este sentido, en diciembre de 2021 el Gobierno detuvo a nueve mujeres presuntamente vinculadas a Abu Sayyaf (entre ellas tres hijas de Hatib Hajan Sawadjaan, líder

de Abu Sayyaf que murió en julio de 2020) acusadas de querer perpetrar atentados suicidas. Además, otras fuentes sugieren que las medidas de restricción de la pandemia de la COVID-19 estarían dificultando la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao, un flujo que se habría incrementado tras el debilitamiento de ISIS en Siria e Iraq. En este sentido, el Gobierno de Filipinas, así como otros gobiernos del Sudeste Asiático, incrementó las medidas de seguridad en Mindanao tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán.

Finalmente, **algunos análisis señalan que el establecimiento de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada de manera transitoria hasta 2025 por el líder del MILF, Ebrahim Murad, habría erosionado también la legitimidad y membresía de los grupos armados que se oponen al acuerdo de paz de 2014.** De hecho, en febrero el propio Ebrahim Murad declaró públicamente estar en conversaciones con dos de las tres principales facciones del BIFF para que unos 900 combatientes se unan nuevamente al MILF y apoyen los esfuerzos del gobierno de transición. El BIFF se escindió del MILF por su oposición a las conversaciones de paz que desembocaron en el acuerdo de paz de 2014. En mayo, sin embargo, la Autoridad de Transición de Bangsamoro declaró que el Gobierno no entablará negociaciones con las facciones del BIFF, Abu Sayyaf o Daula Islamiyah que ya han rechazado cualquier posibilidad de diálogo o cooperación con el Gobierno de Bangsamoro.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado

especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

La situación en Myanmar se deterioró notablemente durante el año como consecuencia del golpe de Estado que la cúpula militar del país perpetró el 1 de febrero.

El golpe de Estado se produjo horas antes de que el Parlamento resultante de las elecciones de 2020 se conformara. Los militares adujeron que durante las elecciones de noviembre se había producido fraude electoral. El Gobierno se había negado a posponer la conformación del Parlamento después de que la comisión electoral hubiera rechazado las acusaciones de fraude. Aung San Suu Kyi, consejera de Estado y líder de la NLD, partido que resultó vencedor por una amplia mayoría en las elecciones, fue detenida junto a otros dirigentes políticos como el presidente U Win Myint. Los militares tomaron el control de los poderes legislativo y judicial y bloquearon el acceso a internet en el país. Si bien inicialmente tras el golpe se anunció que se celebrarían nuevas elecciones en el plazo de uno o dos años, en agosto el general Min Aung Hlaing anunció que las elecciones y transferencia de poder se llevarían a cabo en agosto de 2023, sobrepasando el límite de dos años establecido por la Constitución. El general anunció la formación de un Gobierno interino encabezado por él mismo como primer ministro y al mismo tiempo jefe del Consejo de Administración del Estado, es decir, ocupando simultáneamente los puestos de jefe de Estado y de Gobierno. En septiembre el Gobierno se renombró como “gobierno de la unión”. En respuesta al golpe de Estado, el 16 de abril la oposición proclamó un Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), nombrado por los parlamentarios elegidos en los comicios. A principios de mayo anunció la formación de su brazo militar, la Fuerza de Defensa Popular (PDF por sus siglas en inglés), en un intento de agrupar y coordinar a las diferentes milicias y grupos surgidos como consecuencia del golpe de Estado.

Tras el golpe se iniciaron amplias protestas sociales que fueron violentamente reprimidas. Decenas de miles de personas participaron en manifestaciones masivas y en diferentes acciones de resistencia no violenta y se produjeron también huelgas de empleados públicos. El 27 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad mataron a 158 personas, incluyendo 14 menores, que participaban en protestas pacíficas contra el golpe. **Desde que se produjo el golpe militar 1.964 personas murieron como consecuencia de la acción represiva de las fuerzas de seguridad del Estado según la organización Assistance Association for Political Prisoners, quien también denunció que 8.100 personas habían sido detenidas con cargos en relación a su actividad política en contra del golpe de Estado.** El Mecanismo de Investigación

Independiente para Myanmar, establecido por Naciones Unidas, señaló que los primeros indicios apuntaban a que el régimen militar había cometido crímenes contra la humanidad en su represión de las protestas sociales. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas nocturnas, detenciones masivas, detenciones de familiares de opositores para su utilización como rehenes, tortura y uso de armamento pesado en ciudades, entre otras estrategias de represión. A lo largo del año se repitieron las manifestaciones y los actos de desobediencia civil, que tuvieron lugar en las principales ciudades, pero también en zonas rurales. Sin embargo, se produjo un progresivo incremento de las acciones armadas contra el Gobierno. El 7 de septiembre, el NUG declaró una “guerra defensiva popular” contra el Gobierno militar y un mes después anunció la formación de una estructura de comando para coordinar la PDF con los grupos armados étnicos. Además, decenas de civiles formaron milicias que llevaron a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad. Desde el golpe de Estado se habrían formado unos 250 grupos, de tamaño y capacidad de acción muy diversas. Según el análisis del centro de investigación International Crisis Group, los diferentes grupos armados y de la resistencia llevaron a cabo acciones contra el Gobierno que han incluido asesinatos –hasta el mes de septiembre se habrían producido 800 asesinatos de personas vinculadas al Gobierno o las fuerzas de seguridad o acusadas de ser informantes–; cientos de explosiones de dispositivos explosivos improvisados contra edificios gubernamentales, negocios de personas consideradas cercanas al régimen militar y puestos policiales o militares; tiroteos desde vehículos contra las fuerzas de seguridad; y sabotajes de infraestructuras, como torres de telefonía o electricidad o líneas ferroviarias. Además, también se formaron grupos paramilitares para proteger a personas vinculadas al Gobierno y las fuerzas de seguridad. Los grupos armados étnicos también continuaron sus acciones y siguieron las operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad contra ellos. En septiembre, enfrentamientos entre la milicia Chin Defence Force y las Fuerzas Armadas en el estado Chin, que causaron la muerte a 30 soldados, provocaron el desplazamiento de más de 10.000 personas, de las que gran parte se refugió en la India. Entre octubre y noviembre se intensificó la violencia en diferentes zonas del país provocando el desplazamiento forzado de decenas miles de personas. En el estado Kayah miles de personas tuvieron que desplazarse después como consecuencia de la intensificación de los bombardeos militares contra varias poblaciones y de los enfrentamientos con los grupos armados KNDF y KA. A finales de diciembre 35 civiles, incluyendo dos trabajadores humanitarios de Save the Children, murieron en una masacre de las fuerzas de seguridad en la localidad de Moso. También se produjeron importantes enfrentamientos en el estado Shan con el grupo armado MNDAA. Además, se reanudaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado Arakan Army en el estado de Rakhine por primera vez desde noviembre de 2020, cuando se inició de forma no oficial un alto el fuego

después de dos años de intensos enfrentamientos. En diciembre 15.000 personas se desplazaron en el estado Karen (5.000 refugiándose en Tailandia) como consecuencia de la ofensiva militar contra el KNLA y la PDF. **El autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional señaló que entre junio y agosto la acción de la oposición armada había causado la muerte a 1.710 soldados**, que 1.300 soldados habían muerto en octubre y más de 400 habían resultado heridos en enfrentamientos con los diferentes grupos de resistencia y que esta cifra representaría aproximadamente el doble de los soldados muertos en septiembre. Por otra parte, el golpe de Estado dio paso a una crisis económica y humanitaria de enorme gravedad, con un alarmante incremento de los niveles de pobreza y de falta de acceso a alimentos y servicios sociales básicos, en un contexto de creciente impacto de la pandemia por la COVID-19.

En lo que respecta a la situación de Aung San Suu Kyi, tras su detención y la de U Win Myint fueron acusados con varios cargos que incluyeron la sedición, la violación de las restricciones por la pandemia, así como corrupción y quebramiento de la ley de secretos oficiales entre otros. El Gobierno militar impuso numerosos obstáculos al contacto con sus abogados, que señalaron que se trataba de cargos inventados sin fundamento. Además, durante el juicio se impidió a los abogados de Aung San Suu Kyi hacer declaraciones a los medios, después de que estos revelaran que el presidente U Win Myint había declarado en el tribunal que los militares le habían amenazado con forzarle a dimitir durante el golpe, lo que demostraría la ilegalidad del acceso al poder por parte de la cúpula militar. En octubre se produjo la primera condena a un alto dirigente de la NLD, con la sentencia a 20 años de cárcel por alta traición a U Win Htein. El Gobierno también anunció que planeaba la disolución de la NLD alegando haber hallado evidencias de que el partido manipuló las elecciones de noviembre de 2020, sin embargo, trascendió que China habría manifestado que una de sus condiciones para seguir apoyando al régimen era la no disolución del partido de Aung San Suu Kyi. En diciembre Aung San Suu Kyi y U Win Myint fueron sentenciados a cuatro años de prisión, que posteriormente fueron recortados a dos en un indulto parcial por parte del primer ministro, el general Min Aung Hlaing. La sentencia señalaba que cumplirían su condena en su “actual ubicación de detención”, por lo que se desconocía si serían enviados a prisión o permanecerían bajo arresto domiciliario.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En un marco de parálisis de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición BRN, los niveles de violencia fueron ligeramente superiores a los del año anterior. Según el centro de investigación Deep South Watch, al finalizar el año habían muerto 113 personas y otras 190 habían resultado heridas. Respecto del año anterior, el número de personas fallecidas prácticamente fue el mismo (116 en 2020 y 113 en 2021), pero se incrementaron el total de víctimas (277 en 2020 y 303 en 2021) y se registró un incremento notable en el número de episodios de violencia, que pasaron de 335 a 481 (un aumento del 44%). **Es la primera vez desde el 2012, año en el que se registraron 1.850 episodios de violencia, en el que el número de incidentes se incrementa respecto del año anterior.** Cabe señalar, sin embargo, que en 2020 el impacto social de la pandemia de la COVID-19 fue superior al de 2021, especialmente por los confinamientos y otras medidas de restricción de la movilidad, y también que en abril de 2020 el BRN declaró un cese de hostilidades. **Con un total de 21.328 incidentes de violencia, desde el año 2004 hasta finales de 2021 el número de personas fallecidas a causa del conflicto armado era de 7.314, y el de personas heridas de 13.584.** Aunque durante el año un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que el 95% de los episodios de violencia en el sur del país estaban relacionados con el comercio ilegal y la delincuencia, en el mes de septiembre el Gobierno volvió a prolongar el decreto de emergencia que rige solamente en el sur del país y que, desde su imposición en 2005, ha sido renovado en 65 ocasiones. Este decreto, que otorga poderes especiales a las Fuerzas Armadas (como la detención de personas sin presentar cargos durante 30 días), fue criticado por grupos locales y organizaciones de derechos humanos. Además, según informes aparecidos en prensa, entre el 2004 y 2016 el coste de la actividad del Ejército en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana, con unos 70.000 efectivos desplegados, fue de 8.600 millones de dólares. Según estos mismos informes, tras la llegada de la junta militar en 2014, el gasto militar en el sur del país se habría duplicado. En cuanto a

los episodios de violencia acontecidos durante el año, los meses con mayor mortalidad asociada al conflicto fueron enero y septiembre, con 14 víctimas mortales en cada uno de estos meses. En el mes de noviembre, el BRN, que según algunos medios cuenta con entre 8.000 y 9.000 miembros, habría llevado a cabo algunas acciones con el objetivo de influenciar el funcionamiento de las elecciones locales que se llevaron a cabo el 28 de noviembre. En buena parte de los ataques insurgentes que provocaron mayor atención mediática se utilizaron artefactos explosivos improvisados. En marzo, por ejemplo, ocho voluntarios fueron heridos tras estallar un artefacto explosivo, pocos días antes de que dos policías resultaran heridos en una explosión en una carretera. En julio, cinco policías fueron heridos en una explosión similar en el distrito de Sai Buri, en la provincia de Pattani. En septiembre, dos policías murieron y otros cuatro resultaron heridos tras ser detonado a distancia un artefacto explosivo. En varios momentos del año, también se produjeron ataques contra trenes. A mediados de diciembre, por ejemplo, tres personas resultaron heridas tras el estallido de una bomba en un tren con unos 300 pasajeros en la localidad de Khok Poh.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto se mantuvo en niveles reducidos de combate directo y mortalidad, si bien aumentó la crisis militar entre Ucrania y sus aliados occidentales y Rusia, con un despliegue masivo de tropas rusas junto a su frontera con Ucrania y alertas de Ucrania y EEUU sobre una posible ofensiva rusa. En 2021 murieron 149 personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, en línea con el centenar registrado en 2020 (frente a los 400 de 2019). Frente a cierta reducción de la violencia en la segunda mitad de 2020 por el acuerdo en julio de ese año de medidas de fortalecimiento del alto el fuego, en 2021 se incrementaron las violaciones del alto del alto el fuego, con un mayor impacto en la población de la zona de conflicto y en la infraestructura civil. Asimismo, de las tres áreas designadas en años anteriores como zonas de retirada de fuerzas (Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske), se registraron violaciones del alto el fuego a lo largo del año en Petrivske y en menor medida en Zolote. A finales de diciembre, Ucrania y las fuerzas de Lugansk y Donetsk acordaron adherirse de nuevo al alto el fuego de 2020.

La tensión militar internacional en torno al conflicto escaló en varios momentos, incluyendo en abril por el despliegue de varias decenas de miles de tropas rusas y equipamiento militar cerca de la frontera con Ucrania. Según datos de la agencia de información de inteligencia James publicados en el periódico británico *The Guardian*, Rusia desplegó 40.000 tropas en la región de Voronezh, otras tantas en Crimea y equipamiento militar en ambas zonas y en la región de Rostov. Entre el material desplegado se incluían tanques, artillería de largo alcance y sistema de misiles balísticos de corto alcance, y se fortaleció la flota del Mar Negro, según las mismas fuentes. Rusia enmarcó el despliegue en la realización de ejercicios militares así como en una respuesta a supuestas provocaciones y a una escalada militar de Ucrania, acusaciones desmentidas por los informes de observación de la OSCE. El despliegue generó alerta en Ucrania así como en la UE y EEUU, entre otros, sobre el riesgo de ofensiva. El Gobierno ucraniano redobló sus demandas de ingreso en la OTAN. En paralelo, Rusia advirtió que el ingreso de Ucrania en la OTAN tendría consecuencias irreversibles para la condición de Estado de Ucrania. Rusia retiró sus tropas a finales de abril, reduciéndose la tensión militar. En junio en la cumbre anual de la OTAN, esta continuó instando a Ucrania a reformas internas previas a la integración, sin invitarle aún a un plan de acción para la adhesión.

La crisis militar internacionalizada se intensificó de nuevo a finales de año, con alertas a partir de noviembre de representantes ucranianos y estadounidenses sobre el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania –entre 85.000 y 100.000 efectivos con armamento pesado, según fuentes de inteligencia de ambos países– y riesgos de una posible invasión a principios de 2022 – que según las mismas fuentes podría llegar a involucrar

a 175.000 tropas. Rusia lo calificó de desinformación y, a su vez, denunció la militarización de Ucrania con apoyo occidental, le acusó de movilizar armamento pesado hacia la línea del frente así como de enviar un buque militar hacia el estrecho de Kerch –que Ucrania alegó era un barco de salvamento. La marina ucraniana denunció que Rusia había bloqueado cerca del 70% del Mar Azov. Los presidentes ruso y estadounidense abordaron la crisis en una reunión por videoconferencia a principios de diciembre y de nuevo a finales de mes. Rusia reclamó garantías jurídicas de no ampliación de la OTAN hacia el Este de Europa –incluyendo Ucrania– y prohibición de establecimiento de tropas y armamento fuera de las fronteras de la OTAN de 1997, entre otras demandas. Además, señaló a Ucrania como responsable de la no implementación de los acuerdos de Minsk. Joe Biden advirtió con una respuesta económica y de otro tipo en caso de escalada militar sobre Ucrania. Ambos presidentes acordaron que sus equipos seguirían reuniéndose con el fin de desescalar la crisis y estaban previstas negociaciones entre EEUU y Rusia, la OTAN y Rusia y la OSCE y Rusia a comienzos de enero. La crisis militarizada tenía como foco la soberanía estatal e integridad territorial de Ucrania y, además, ponía de manifiesto un pulso entre Rusia y los países euroatlánticos en torno a la arquitectura de seguridad del continente, bajo amenaza militar rusa.⁸³

En relación a la dimensión humanitaria del conflicto, durante el año tan solo dos puntos de cruce siguieron abiertos (Stanytsia Luhanska y Novotroitske/Olenivka), por las restricciones impuestas por las fuerzas rebeldes. Como alertó OCHA, el cierre mayoritario de la línea de contacto dificultó a cientos de miles de personas el desplazamiento para el acceso a servicios esenciales, lo que llevó a una reducción drástica de los desplazamientos por esa vía, mientras se incrementó el tránsito a través de Rusia, más costoso para población en situación de vulnerabilidad. **OCHA alertó de las necesidades de alojamiento y de ingresos para la población desplazada por el conflicto.** 1,5 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno. Factores como el impacto económico de la pandemia, las restricciones de movimiento y el incremento del precio de la electricidad y de otros servicios, entre otros, agravaron su situación. Además, 3,4 millones de civiles continuaban afectadas por el conflicto, según ACNUDH. La población cerca de la línea de contacto afrontaba problemas como dificultades económicas y de acceso a transporte, agua potable y salud. Las fuerzas rebeldes de Donetsk y Lugansk impusieron nuevos decretos de reclutamiento militar forzado de hombres. Además, ACNUDH se hizo eco de denuncias de amenazas en las áreas bajo control rebelde contra quienes no solicitasen la ciudadanía rusa. Por otra parte, durante el año Ucrania incrementó la presión contra el principal partido opositor, Plataforma de Oposición-Por la Vida, aliado del Kremlin en Ucrania –y considerado como una vía para Rusia de influir en la dinámica política de

83. Véase el resumen sobre Ucrania en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Ucrania- contra su co-líder Víktor Medvedchúk, cercano al presidente ruso. Entre las medidas, el cierre en febrero de tres canales televisivos por decreto presidencial acusados de desinformación pro-rusa y embargo de activos de la familia de Medvedchúk ese mes, sanciones contra Medvedchúk en abril, y su arresto domiciliario en mayo, acusado de alta traición y saqueo de recursos en Crimea. El presidente ruso criticó su detención como una purga que amenazaba con convertir Ucrania en la antítesis de Rusia y advirtió que Rusia daría respuesta.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Turquía y el PKK continuó activo en el sudeste de Turquía y en el norte de Iraq, donde el Ejército turco lanzó nuevas operaciones militares contra el grupo armado kurdo, mientras se intensificó la persecución política, judicial y policial contra actores políticos y sociales kurdos. Entre enero y mediados de diciembre fallecieron 391 personas por el conflicto (el 79% miembros del PKK), según ICG, que contabiliza la mortalidad asociada al conflicto con el PKK en Turquía e Iraq (376 en 2020). ACLED

contabilizó 296 muertes dentro de Turquía (545 en 2020). El Ejército llevó a cabo operaciones militares durante el año en el sudeste de Turquía, incluyendo zonas de las provincias de Mardin, Diyarbakir, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Hakkari, Tunceli y Sirnak. En septiembre, el Ministro de Interior turco, Suleyman Soylu, señaló que por vez primera el número de miembros del PKK dentro de Turquía era inferior a 200 –sin contraste independiente–. En su informe anual sobre Turquía, la Comisión Europea señaló que la situación de seguridad en las áreas fronterizas de Turquía continuó siendo frágil, con “actos terroristas recurrentes” del PKK.

Como en 2020 y en los últimos años, uno de los principales escenarios del conflicto entre Turquía y el PKK fue el norte de Iraq. ICG contabilizó allí 254 muertes asociadas al conflicto (65% del total). En febrero Turquía lanzó la operación militar aérea y terrestre Garra de Águila 2 contra la montaña de Gare (provincia de Duhok, norte de Iraq).⁸⁴ Incluía entre sus objetivos liberar 13 rehenes (identificados como militares y policías mayoritariamente) en manos del PKK desde 2015-2016 tras la ruptura del proceso de paz. La operación se saldó con la muerte de todos ellos. Turquía acusó al PKK de ejecutar a las 13 personas secuestradas antes de poder ser liberadas y el PKK responsabilizó de su muerte a los bombardeos de Turquía contra la base del PKK. Además de los rehenes, 48 miembros del PKK y tres soldados turcos murieron, según Turquía. El partido pro-kurdo de Turquía HDP reclamó a todas las partes una investigación y acceso al área a una delegación independiente. En abril y mayo se intensificaron de nuevo las operaciones militares terrestres y aéreas de Turquía en el norte de Iraq (Operaciones Garra-Ray y Garra-Relámpago). El PKK admitió 18 víctimas mortales propias en ambas operaciones y Turquía nueve. En meses posteriores continuaron los bombardeos de Turquía contra el PKK en áreas kurdas de Iraq, incluyendo contra la zona montañosa de Asos (provincia Suleimaniya y frontera con Irán). Algunos análisis señalaron en agosto que esos ataques suponían una expansión más allá de las áreas fronterizas, de hasta 200 kilómetros en territorio de Iraq. Por otra parte, también en el plano regional, Turquía continuó asociando a las fuerzas kurdas de Siria YPG con el PKK, entendiéndolas como un mismo actor. En ese contexto, Turquía y las YPG llevaron a cabo ataques y acusaciones mutuas, en un año en que entre septiembre y octubre se incrementaron las alertas sobre una posible operación a gran escala de Turquía contra áreas kurdas de Siria que finalmente no se materializó.⁸⁵

En el ámbito político y social se mantuvo e incluso agravó la persecución contra actores políticos y sociales kurdos de Turquía, con centenares de detenciones durante el año. Según el informe anual de la Comisión Europea sobre Turquía, en torno a 4.000 miembros y cargos del partido HDP estaban en prisión, incluyendo

84. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

85. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

parlamentarios/as electos. **Se agravó la situación ante el inicio de un proceso judicial contra el HDP, iniciado con la presentación de acusación por la Fiscalía contra la tercera fuerza política del país**, atribuyéndole el objetivo de atentar contra la unidad del Estado y la nación –y solicitando su cierre–, acusación aceptada a trámite por el Tribunal Constitucional. **ONG de derechos humanos continuaron denunciando graves vulneraciones. Turquía continuó rechazando implementar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativas a casos como el del líder opositor kurdo Selahattin Demirtaş. El TEDH dictaminó la liberación inmediata de Demirtaş** al considerar su prolongada detención preventiva como motivada políticamente. En su conjunto, el conflicto transcurrió en un contexto de agravamiento de la situación política y económica en Turquía, de demanda de elecciones anticipadas por la oposición, y de continuas detenciones de personas por supuestos vínculos con ISIS.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen ⁸⁶	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra

el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda

Yemen continuó siendo escenario de uno de los conflictos armados más graves a nivel mundial y las hostilidades siguieron afectando todo el país, sin que se lograra avanzar en un acuerdo de cese el fuego de alcance nacional. El conflicto armado provocó más de 22.000 víctimas mortales en 2021 (22.154 según las cifras del centro de investigación ACLED). Esta cifra es similar a la registrada en los dos años previos: 20.000 en 2020 y 23.000 en 2019. Civilian Impact Monitoring Project –iniciativa que investiga los impactos de la violencia en la población civil yemení para Naciones Unidas– documentó 2.508 víctimas civiles en 2021, principalmente a causa de ataques aéreos, fuego de artillería y armas ligeras. De este total, al menos 769 personas perdieron la vida, incluyendo 131 menores y 56 mujeres.⁸⁷ Los datos revelaron un significativo aumento de las víctimas civiles en el último trimestre del año. La violencia continuó motivando masivos desplazamientos de población, sobre todo de carácter interno y en muchos casos reiterados. Solo en Maarib, una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos en 2021, entre enero y noviembre más de 65.000 personas –unas 10.000 familias– se habían visto obligadas a abandonar sus hogares.⁸⁸ El conflicto armado amenazaba con desembocar en un total colapso económico y siguió agravando la dramática situación humanitaria en el país. Según los datos de OCHA, al finalizar 2021 más de 20 millones de yemeníes requerían ayuda humanitaria, la mitad con carácter urgente. Durante el año Naciones Unidas reiteró sus denuncias sobre la situación de los menores. En un informe publicado en agosto sobre hechos ocurridos en 2019 y 2020, la ONU identificó 8.526 vulneraciones graves contra niños y niñas perpetradas

86. En ediciones anteriores del informe el conflicto armado protagonizado por los al-houhtistas y el de AQPA se abordaban por separado. Este año se analizan conjuntamente por la convergencia en las dinámicas de conflictividad.

87. Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), *Civilian impact incidents and civilian casualties per hub per month y CIMP Quarterly reports - 2021*, 1 de febrero de 2022.

88. OCHA Yemen, "Aid agencies ramp up aid efforts in Ma'rib as tensions persist", *Humanitarian Update no.11*, noviembre de 2021.

por diversos actores armados del conflicto, la mayoría de ellas relacionadas con la denegación de acceso de ayuda humanitaria, reclutamiento forzado, o hechos de violencia que resultaron en la muerte o heridas a menores. El total de menores fallecidos entre 2019 y 2020 –principalmente a causa de ataques de mortero y artillería, batallas con armas ligeras y remanentes de explosivos– asciende a 2.612, de los cuales 1.889 niños y 723 niñas.⁸⁹

Respecto a la **evolución de las hostilidades**, los enfrentamientos de los al-houthistas con las tropas gubernamentales –apoyadas por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita– y otras fuerzas del frente anti al-houthistas –incluyendo los separatistas del sur y fuerzas tribales– se produjeron en múltiples frentes. Uno de los más activos del año fue Maarib, en especial a partir de febrero, cuando los al-houthistas intensificaron su ofensiva para intentar controlar esta zona, el último bastión del Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi en el norte del país y donde se ubican importantes pozos petroleros. Las hostilidades en torno a Maarib oscilaron en intensidad y se recrudecieron en octubre, después de que los al-houthistas consolidaran su control en la adyacente región de al-Bayda. Otros focos de la disputa fueron al-Dhala, Taiz, Hajja, Shebwa, Lahj, al-Bayda y también Hodeidah. En esta última localidad, el sorprendente repliegue de fuerzas aliadas a Arabia Saudita y al Gobierno de Hadi –las Joint Resistance Forces– llevaron a un rápido despliegue de los al-houthistas en las posiciones abandonadas. La misión de la ONU que supervisa el cumplimiento del acuerdo sobre Hodeidah (UNMHA) –uno de los componentes del Acuerdo de Estocolmo de 2018– aseguró que no había sido informada del repliegue, que modificó la correlación de fuerzas en terreno.

En las semanas siguientes se produjeron nuevos enfrentamientos, los peores en la costa del Mar Rojo desde 2018, incluyendo ataques aéreos saudíes en apoyo a sus fuerzas aliadas en Hodeidah y también en otras zonas como Sanaa, Saada y Maarib. Durante todo el año, los al-houthistas lanzaron ataques transfronterizos hacia territorio saudí. **Los intentos por propiciar un cese el fuego en todo Yemen continuaron bloqueados en 2021**, pese a las gestiones desplegadas por la ONU y por Omán, y a la mayor iniciativa diplomática exhibida por EEUU.⁹⁰ Después de que la administración de Donald Trump declarara a los al-houthistas como grupo terrorista a

El nuevo enviado especial de la ONU para Yemen alertó sobre la deriva del conflicto, ante la persistente violencia y el riesgo de que la confrontación evolucione a una disputa aún más fragmentada

principios de 2021, el nuevo Gobierno de Joe Biden revirtió esta decisión, suspendió temporalmente la cooperación militar con Riad –en concreto en lo que respecta a las “operaciones ofensivas” de la coalición liderada por los saudíes– y nombró a un enviado especial para Yemen. Sin embargo, al finalizar el año y tras numerosas reuniones con actores locales y regionales con intereses en el conflicto, se mantenían las distancias entre el Gobierno de Hadi respaldado por Arabia Saudita y los al-houthistas. Estos últimos reiteraron su exigencia de apertura del puerto de Hodeidah y el aeropuerto de Sanaa, junto a la retirada de fuerzas foráneas del país, como precondition para el diálogo.

En paralelo, **durante 2021 se mantuvo activo un segundo eje de confrontación en el país, entre el Gobierno de Hadi y las fuerzas del Southern Transitional Council (STC)** –separatistas de la zona meridional–, pese al Acuerdo de Riad suscrito entre las partes en 2019 y la conformación de un gobierno de unidad a finales de 2020. A lo largo de todo el año se evidenciaron las tensiones entre estos sectores, con acusaciones cruzadas de designaciones unilaterales en puestos de gobierno o de seguridad, duras críticas del STC a Hadi y su entorno, una creciente concentración de tropas y vehículos pesados por parte de ambos bandos en la región de Abyan y periódicas manifestaciones en el sur de Yemen por el incremento de precios, los cortes de electricidad y problemas en la distribución de agua, ayudas y servicios médicos. Pese a los intentos de mediación de Riad, las protestas se intensificaron a partir de septiembre, derivando en choques con las fuerzas de seguridad con varias víctimas mortales.

También hubo otros hechos de violencia, incluyendo ataques con coche bomba. Adicionalmente, **durante 2021 continuó activo el grupo armado al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)**, aunque sus actividades quedaron eclipsadas por el resto de dinámicas de violencia y conflicto en el país. Según trascendió, durante el año fuerzas de AQPA se enfrentaron con las Security Belt Forces y otros grupos próximos a EAU y a Arabia Saudita en las regiones de Shebawah y Abyan y con los al-houthistas en al-Bayda.⁹¹ Algunos análisis subrayaron el declive del grupo –la frecuencia de sus operaciones sería menos del 10% respecto al punto más alto de actividades en 2017–, aunque no su desaparición.⁹² AQPA mantendría su implantación en la zona centro y este del país y, según estimaciones de la ONU, contaría con unos 7.000 combatientes. Mientras, la filial de ISIS se habría debilitado significativamente

89. UN Report of the Secretary General, *Children and armed conflict in Yemen*, S/2021/761, 27 de agosto de 2021.

90. Véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

91. UN Security Council, *Twenty-eighth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities*, S/2021/655, 21 de julio de 2021.

92. Elizabeth Kendall, *Where is AQAP Now?*, Sanaa Center, 21 de octubre de 2021.

en los últimos años a causa de sus enfrentamientos con los al-houthistas y AQPA y contaría solo con unos cientos de milicianos.⁹³

En este contexto, al finalizar el año **el nuevo enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, alertaba sobre la deriva alarmante en el país, fruto de la escalada militar y la continua violencia y el riesgo de que la confrontación deviniera en un conflicto armado aún más fragmentado** y sangriento. Una de las principales inquietudes era Maarib, por el aumento de las hostilidades y la posibilidad de que los combates en la ciudad derivaran en una guerra urbana con consecuencias aún más graves para la población civil.

Asimismo se alertó sobre el creciente número de prisioneros retenidos por las partes en conflicto, por las severas consecuencias económicas de la crisis y por la drástica regresión en los derechos de las mujeres a causa del conflicto.⁹⁴ Finalmente, y en esta misma línea, cabe destacar que la comisión de investigación de expertos independientes sobre Yemen del **Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en septiembre su cuarto informe, subrayando el amplio abanico de abusos perpetrados por los diversos actores implicados en la contienda**: ataques que vulneran los principios más básicos del derecho internacional humanitario, obstáculos para el acceso de comida y productos sanitarios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, torturas, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otras prácticas.

La comisión también deploró que, pese a las denuncias y llamamientos realizados en los últimos años, terceros países –entre los que menciona a Canadá, Francia, Irán y Reino Unido– continuaran con el suministro de armas y el apoyo militar a las partes del conflicto, contribuyendo así al ciclo de violencia y al sufrimiento de la población yemení. Ante las evidencias, la comisión llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a derivar el caso yemení a la Corte Penal Internacional para asegurar que no habrá impunidad para los abusos más graves.⁹⁵ Sin embargo, el mandato de la misión –que inició su trabajo de investigación en 2017– no fue renovado en octubre, en una decisión que fue considerada como un severo retroceso para las víctimas del conflicto armado y para las perspectivas de rendición de cuentas, y como un reflejo de la falta de voluntad política para abordar la situación en Yemen.⁹⁶ Según trascendió, Arabia Saudita –señalada expresamente en los últimos años por su responsabilidad en las víctimas civiles del conflicto yemení– desplegó una combinación de amenazas e incentivos para bloquear el trabajo de la comisión.⁹⁷

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnaf Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que se desarrolla principalmente en el Sinaí entre las fuerzas de seguridad egipcias y el grupo armado Estado Islámico (ISIS) presentó unos niveles de violencia similares o relativamente inferiores a los del año anterior, con periódicos incidentes de baja intensidad. El análisis del conflicto continuó viéndose afectado por la falta de acceso de periodistas e investigadores independientes y por informaciones imprecisas sobre el impacto de algunos hechos de violencia. Pese a ello, recuentos informales a partir de los datos disponibles apuntan a un balance de más de 150 personas fallecidas en diversos incidentes a lo largo del año. El centro de estudios ACLED, en tanto, contabilizó más de 220 muertes en Egipto en 2021

93. Kali Robinson, *Yemen's Tragedy: War, Stalemate, and Suffering*, Council on Foreign Relations, 2 de septiembre de 2021.

94. OSESGY, *Briefing to United Nations Security Council by the Special Envoy for Yemen*, 14 de diciembre de 2021.

95. OHCHR, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen presents its fourth report to the Human Rights Council: A nation abandoned. A call to humanity to end Yemen's suffering*, 14 de septiembre de 2021.

96. OHCHR, *Statement by Group of Experts on Yemen on HRC rejection of resolution to renew their mandate*, 8 de octubre de 2021.

97. Stephanie Kirchgaessner, "Saudis used 'incentives and threats' to shut down UN investigation in Yemen", *The Guardian*, 1 de diciembre de 2021.

como consecuencia de enfrentamientos y detonaciones de explosivos. Estas cifras son coincidentes con las observadas el año anterior a partir de recuentos informales –entre 150 y 200 personas fallecidas–, pero menores si se tienen como referencia los datos de ACLED, que en 2020 identificó más de 600 muertes. Pese a las dificultades de precisar el balance, los datos apuntan a unos niveles de violencia más bajos que en años previos, en los que se constataron unas cifras de letalidad mucho más elevadas.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la violencia se manifestó en forma de acciones armadas de ISIS contra las fuerzas de seguridad o equipamiento militar, operaciones de las fuerzas de seguridad contra el grupo armado, atentados explosivos detonados a distancia, emboscadas, acciones de francotiradores, ofensivas contra gaseoductos y ataques contra población civil, incluyendo asesinatos y secuestros. Durante 2021 destacaron las informaciones sobre incidentes violentos protagonizados por ISIS y milicias tribales progubernamentales. ISIS continuó difundiendo imágenes y videos de ejecuciones de milicianos tribales y de civiles como vía de propaganda y terror. Los hechos de violencia continuaron concentrándose en localidades como Al Arish, Rafah (fronteriza con Gaza), Sheikh Zuweid y Maghara (centro Sinaí). Las autoridades egipcias anunciaron la construcción de un muro para proteger la zona de Sharm el Sheikh (sur del Sinaí) de la violencia del conflicto armado, que tiene lugar sobre todo en el norte de la provincia. Asimismo, trascendió un acuerdo entre Israel y Egipto para fortalecer la presencia militar egipcia en el cruce fronterizo con la Franja de Gaza, Rafah, un movimiento que requería de acuerdo entre las partes por las disposiciones del tratado de paz de 1979. Durante 2021 el Gobierno también informó de la muerte de varios altos cargos de ISIS en acciones armadas y, en agosto, afirmó haber dado muerte a 89 presuntos miembros del grupo armado en una operación militar. **La difusión de un video por las propias Fuerzas Armadas en el que se registra la muerte de dos hombres desarmados motivó denuncias de organizaciones de derechos humanos, que alertaron sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad bajo acusaciones de “terrorismo”.** Human Rights Watch denunció en un informe que muchos supuestos militantes fueron ejecutados sin suponer una amenaza para las fuerzas de seguridad o cuando ya estaban en custodia y también alertó que en 2021 el Ejército egipcio continuó demoliendo centenares de viviendas en el marco de su lucha contra ISIS, una práctica que podría constituir un crimen de guerra.⁹⁸

Durante 2021 el Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi

fue objeto de numerosas críticas por la situación de derechos humanos en el país.⁹⁹ En este contexto, pese a los anuncios de que no habría más “cheques en blanco” para al-Sisi, **el nuevo Gobierno de EEUU decidió suspender solo parcialmente la ayuda militar a Egipto, transfiriendo más de la mitad de los fondos comprometidos –170 millones de dólares– para actividades de contraterrorismo, control de fronteras y no proliferación.** EEUU condicionó la entrega de los otros 130 millones a la respuesta sobre requerimientos en materia de derechos humanos, pero la medida generó decepción y críticas entre activistas de derechos humanos, que la consideraron más simbólica que sustantiva. Legisladores estadounidenses exigieron que se aclare si algunas de las armas proporcionadas por Washington han sido utilizadas en los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad egipcias. Análisis subrayaron que el Gobierno egipcio utiliza la amenaza yihadista para asegurar los flujos de ayuda militar, estigmatizar a la oposición política y dar cobertura a sus prácticas represivas y destacaron que los indicios de abusos no han frenado la cooperación por parte de países occidentales, como en el caso de EEUU.¹⁰⁰ En este contexto, **el Gobierno egipcio anunció el 25 de octubre el levantamiento del estado de emergencia vigente en el país desde abril de 2017,** cuando un ataque explosivo de ISIS contra dos iglesias coptas causó la muerte de 47 personas. El estado de emergencia, renovado trimestralmente desde entonces bajo el argumento de que era una medida necesaria para “combatir el terrorismo”, permitía a las autoridades imponer restricciones a derechos como la libertad de expresión y asamblea, llevar a cabo arrestos y registros sin órdenes judiciales y censurar medios de comunicación, entre otras prácticas. El presidente egipcio aseguró que la medida ya no era necesaria porque el país se había convertido en un “oasis” de estabilidad y seguridad en la región gracias a su población y sus “hombres leales”. Voces críticas recibieron el levantamiento del estado de emergencia con escepticismo y destacaron que por sí sola la medida no alteraba el sistema represivo vigente en el país.¹⁰¹ En las semanas siguientes, grupos de derechos humanos renovaron sus denuncias contra el Gobierno egipcio después de que éste aprobara una serie de medidas que, en la práctica, perpetúan las restricciones impuestas en el estado de emergencia y las medidas que han permitido intensificar la represión a la disidencia. A principios de octubre, el Gobierno también aprobó un decreto que transfiere poderes al Ministerio de Defensa para administrar la provincia de Sinaí, permitiéndole imponer toques de queda y restricciones de movimiento y comunicaciones. Al finalizar el año ISIS se mantenía activo y persistían los hechos de violencia en el Sinaí.

98. Human Rights Watch, *Egypt: ‘Shootouts’ Disguise Apparent Extrajudicial Executions*, 7 de septiembre de 2021; y “Egypt: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

99. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

100. Michael Wahid Hanna, *How the Counter-terrorism Imperative Has Warped U.S.-Egyptian Ties*, International Crisis Group, 13 de septiembre de 2021.

101. Vivian Yee, “Egypt’s Leader Ends State of Emergency, Says It’s No Longer Needed”, *The New York Times*, 25 de octubre de 2021.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

El conflicto armado en Iraq presentó unos niveles de violencia y letalidad de alta intensidad similares a los observados el año anterior y siguió caracterizándose por múltiples dinámicas de violencia protagonizadas por actores armados, locales y foráneos. Según los datos del centro especializado Iraq Body Count (IBC) en 2021 se registraron 1.610 personas fallecidas por el conflicto, de las cuales 941 eran combatientes y 669 civiles. En su balance IBC subrayó el gravísimo impacto de las hostilidades en los menores de edad, destacando que en 2021 perdieron la vida 70 menores, 10,4% de todas las víctimas civiles, un porcentaje mucho más alto que el registrado en 2020 y 2019 (3,5 y 3,8%, respectivamente). Los datos del centro de estudios ACLED arrojaron una cifra de letalidad más elevada, al identificar un total de 2.511 víctimas mortales en 2021 a causa de enfrentamientos, ataques explosivos

y otros hechos de violencia. Esta cifra coincide con el balance de letalidad del año anterior –2.500 personas– y es inferior al de años previos. Según los datos de OCHA, al finalizar el año 1,2 millones de personas permanecían en situación de desplazamiento interno y 4,1 millones requerían asistencia humanitaria.

La violencia en el país continuó estando protagonizada por múltiples actores. **El grupo armado Estado Islámico (ISIS) siguió activo durante todo el año y perpetró ofensivas principalmente en las provincias de Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa y Salah al-Din.** ISIS se enfrentó a las fuerzas de seguridad iraquíes y también a las fuerzas kurdas (peshmergas) y lanzó ataques contra líderes comunitarios y civiles acusados por el grupo de colaborar con las autoridades. ISIS lanzó uno de sus ataques más cruentos en Bagdad, en enero, cuando un doble ataque suicida causó 32 víctimas mortales y más de un centenar de heridas, en la ofensiva más grave en la capital iraquí en años. Un ataque similar de ISIS en julio, en vísperas de la festividad de Eid al Adha, provocó la muerte de otras 35 personas en Bagdad. Paralelamente, continuaron los ataques contra objetivos estadounidenses y de la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU, con periódicos lanzamientos de cohetes sobre el aeropuerto de Bagdad y Erbil y otras bases áreas militares (como la de Ayn al-Asad, en la provincia de Anbar). Muchas de estas ofensivas no fueron reivindicadas, pero otras sí fueron reclamadas o atribuidas a milicias pro-iraníes. En este sentido, **Iraq continuó siendo un escenario de confrontación indirecta entre Irán y Occidente, en particular con EEUU, como ha quedado especialmente en evidencia desde el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en una operación estadounidense en Bagdad en enero de 2020.** Durante 2021 también se informó de ataques contra milicias respaldadas por Irán en acciones atribuidas a EEUU.

Además, a lo largo del año se informó frecuentemente de hostilidades protagonizadas por Turquía y fuerzas del PKK desplegadas en el norte de Iraq con diversas víctimas mortales de ambos bandos,¹⁰² junto a enfrentamientos más esporádicos entre actores kurdos, principalmente PKK y KRG. Paralelamente, cabe destacar que a lo largo de todo el año prosiguieron las protestas, sobre todo en el sur del país, y se informó de asesinatos y otras agresiones contra activistas, periodistas y luego contra aspirantes a las elecciones de octubre. Estos comicios estaban previstos para 2022, pero se adelantaron en respuesta a la ola de protestas que sacudió al país en 2019, en el marco del conocido como “movimiento Tishreen”. Human Rights Watch alertó sobre el clima de impunidad y el fracaso de las autoridades iraquíes a la hora de perseguir a los responsables de los abusos contra manifestantes y voces críticas de las élites políticas y los grupos paramilitares; abusos que han incluido detenciones

102. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

arbitrarias, desapariciones y asesinatos extrajudiciales. HRW resaltó que entre finales de 2019 y 2020 murieron 487 manifestantes en Bagdad y ciudades del sur del país y que al finalizar 2021 el comité creado (en mayo de 2020) por el Gobierno iraquí para investigar estas muertes aún no había presentado sus resultados.¹⁰³

Más allá del clima de violencia persistente en el país, **la situación en Iraq experimentó una creciente tensión en el último trimestre con motivo del proceso electoral.** Los comicios, validados por los observadores de la ONU y la UE, contaron con una participación del 36%, la más baja desde que se instaló el nuevo sistema político tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003 y considerada como un reflejo de la desafección y apatía de los votantes iraquíes. A lo largo del año, sectores vinculados al movimiento Tishreen habían llamado a boicotear los comicios por diversas razones, entre ellas porque consideraban que carecían de legitimidad, no ofrecían igualdad de oportunidades y por los ataques contra activistas.

El primer ministro iraquí sobrevivió a un ataque con drones, en un contexto de creciente tensión por los resultados electorales

La votación –que se realizó con un nuevo sistema electoral– arrojó un resultado inesperado, otorgando la victoria al movimiento del clérigo shíí Muqtada al Sadr, que en agosto se retractó de su decisión de boicotear las elecciones y que pasó de 58 a 73 escaños. La principal fuerza perdedora de las elecciones fue Alianza Fatah, alineada con Irán –pasó de 48 a 18 escaños– que representa los intereses de grupos paramilitares creados en 2014 para apoyar la lucha contra ISIS. Pese a los resultados, análisis destacaron que Fatah mantenía capital coercitivo y capacidad de influencia en la formación del nuevo gobierno.¹⁰⁴ Tras las elecciones, un grupo de fuerzas shííes vinculados a las facciones armadas que sufrieron reveses electorales –incluyendo Alianza Fatah– cuestionaron los resultados de las elecciones, denunciaron fraude y durante semanas protagonizaron protestas en la Zona Verde de Bagdad que derivaron en hechos de violencia. Ante la muerte de dos manifestantes en choques con las fuerzas de seguridad a principios de noviembre, el líder de una de estas facciones, el grupo Asaib Ahl al-Haq, lanzó amenazas contra el primer ministro, Mustafa al-Khadimi.

Días más tarde, **al-Khadimi sobrevivía a un intento de asesinato –su domicilio fue objeto de un ataque con drones– que no fue reivindicado, pero que fue ampliamente atribuido a milicias shííes** y leído como un mensaje para que no repostulara al cargo. El incidente alentó muestras de apoyo internacional al premier y motivó que el jefe de las Brigadas al-Quds

de Irán, Email Ga’ani (sucesor de Soleimani) viajara a Bagdad para dejar patente su condena y explicitar que esta acción traspasaba las “líneas rojas” de Teherán.¹⁰⁵

Los resultados electorales fueron interpretados como una señal del deseo de la población iraquí de refrenar y dominar a los numerosos grupos armados que han proliferado en Iraq en los últimos años y que han caído en prácticas de extorsión, intimidación y asesinatos de civiles.¹⁰⁶ El clérigo al-Sadr, considerado como un líder nacionalista que recela tanto de la influencia de EEUU como de Irán en el país, se había mostrado partidario de poner el uso de las armas bajo control y crítico con las milicias que considera “indisciplinadas”, incluyendo algunas formalmente afiliadas al Estado iraquí (Unidades de Movilización Popular, UMP).

En noviembre instó a las milicias a desmantelarse y someterse al control del primer ministro y las instituciones.

Como señal de buena voluntad anunció la disolución de la Promise Day Brigade, un grupo armado leal al clérigo. Otra organización armada vinculada a al-Sadr, Saraya al-Salam –antes conocida como Ejército al-Mahdi– ya formaba parte de las fuerzas de Hashd al-Shaabi, organización formalmente bajo control del primer ministro creada hace años para institucionalizar el control de las fuerzas paramilitares. Al finalizar el año, tras rechazar las alegaciones de fraude, las autoridades electorales iraquíes ratificaron los resultados de los comicios, aunque persistía la incertidumbre sobre la formación de gobierno. El ex primer ministro Nouri al-Maliki, con el apoyo de otras fuerzas políticas, aparecía como uno de los candidatos con opciones para desafiar el dominio de al-Sadr. Finalmente, cabe destacar que en 2021 los Gobiernos de Iraq y EEUU continuaron el “diálogo estratégico” establecido el año anterior y acordaron que las tropas estadounidenses pondrían fin a su misión de combate en el país. Así, **a principios de diciembre se anunció que todas las fuerzas de EEUU en Iraq –unos 2.500 efectivos– se limitarían a partir de entonces a tareas de entrenamiento y asesoría.** Fuentes diplomáticas y de seguridad aclararon, sin embargo, que el anuncio no supone un cambio significativo en las actividades de las fuerzas estadounidenses en el país, que en los últimos dos años habían tenido un papel muy limitado en las operaciones de combate. Grupos paramilitares proiraníes criticaron la continuidad de las tropas estadounidenses en Iraq. En este contexto, continuaron los ataques contra objetivos de EEUU, incluyendo la embajada en Bagdad.

103. Human Rights Watch, *Iraq: Impunity for Serious Abuses*, HRW, 13 de enero de 2022.

104. Renad Mansour y Victoria Stewart Jolley, *Explaining Iraq’s election results*, Chatham House, 22 de octubre de 2021.

105. Nussaibah Younis, *Iraq election: How a failed assassination attempt could break the political deadlock*, European Council on Foreign Relations, 10 de noviembre de 2021.

106. Nussaibah Younis, *Iraq vote to restrain armed groups*, European Council on Foreign Relations, 15 de octubre de 2021.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ¹⁰⁷
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Durante 2021 la violencia directa asociada al conflicto palestino-israelí y a la ocupación israelí de territorio palestino se incrementó y provocó los peores niveles de letalidad de los últimos siete años. Según los datos de OCHA, las muertes ascendieron a 350 en 2021, de las cuales 339 eran palestinas y 11 israelíes.¹⁰⁸ Esta cifra representa un incremento significativo en comparación a lo registrado en los dos años anteriores –35 en 2020, 147 en 2019–, es similar a la contabilizada en 2018 –313– y la más elevada desde 2014.¹⁰⁹ La gran mayoría de las víctimas de 2021 se registró en mayo, después de que una serie de incidentes en Jerusalén Oriental derivaran en una intensa escalada de hostilidades en Gaza, mientras en paralelo se producían manifestaciones, enfrentamientos y hechos de violencia en Cisjordania y ciudades con alta presencia de población palestina con ciudadanía israelí. La movilización en distintos puntos de la Palestina histórica, pese al escenario de fragmentación

En tan solo 11 días los ataques israelíes en Gaza provocaron la muerte a 260 palestinos y palestinas, además de otras 2.200 heridas y más de 100.000 desplazadas

impuesto por la ocupación israelí, fue considerado como un hecho inédito, una señal de erosión del status quo y del hartazgo ante las múltiples formas de represión, desposesión y discriminación que padece la población palestina. Esta evolución se dio en un contexto de continuidad en las políticas israelíes pese al cambio de gobierno –en junio Benjamin Netanyahu fue reemplazado por un nuevo gobierno multipartidista liderado por el ultranacionalista Neftalí Bennet–, persistente división política de la dirigencia palestina y ausencia de perspectivas sobre un proceso de paz que ha devenido en irrelevante.¹¹⁰

Durante los primeros meses del año los focos de tensión más significativos se centraron en Jerusalén Oriental y estuvieron relacionados con los intentos de expulsión de familias palestinas del emblemático barrio de Sheikh Jarrah, amenazas de demoliciones de más de un millar de viviendas palestinas en la zona de Silwan, manifestaciones de judío-israelíes ultranacionalistas reivindicando Jerusalén como su capital y cánticos de “muerte a los árabes” en el centro histórico de la ciudad y la represión de palestinos y palestinas por parte de las fuerzas israelíes durante el Ramadán, incluyendo uso de la violencia en la Mezquita de al-Aqsa. Ante estos hechos, que resultaron en más de un millar de personas heridas –la inmensa mayoría palestinas– Hamas lanzó un ultimátum a Israel el 10 de mayo, exigiendo la retirada de sus fuerzas de la Explanada de las Mezquitas, de Sheikh Jarrah y la excarcelación de los palestinos detenidos en el marco de las manifestaciones. Horas más tarde, el grupo palestino lanzó varios cohetes desde la Franja a Jerusalén, hecho que dio paso a una intensa ofensiva por parte de Israel. **En tan solo 11 días, los ataques israelíes en Gaza –en el marco de la denominada Operación Guardián de los Muros– provocaron la muerte de 260 palestinos y palestinas**, de los cuales la mitad (129) eran civiles, entre ellos 66 menores de edad.¹¹¹

Otras 2.200 personas resultaron heridas en la Franja, incluyendo 685 menores y 480 mujeres, y unas 113.000 se vieron obligadas a desplazarse internamente a causa de la violencia. En numerosas ocasiones Israel no emitió alertas de evacuación para civiles y sus ofensivas también destruyeron numerosas infraestructuras –centros de salud, edificios residenciales, comercios, escuelas, sedes de medios de comunicación y la precaria red eléctrica– y afectaron a personal médico, incluyendo un alto responsable de la respuesta a la COVID-19 en Gaza que murió junto a otros 12 miembros de su familia.¹¹² En el mismo período, Hamas lanzó más de 4.000 cohetes hacia Israel que

107. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

108. OCHA OPT, *Data on casualties*, 01 enero de 2022.

109. En 2014, principalmente como consecuencia de una cruenta ofensiva israelí sobre Gaza, murieron un total de 2.329 palestinos y palestinas, mientras que otros 88 israelíes perdieron la vida en hechos de violencia en el mismo período.

110. Véase el análisis sobre Palestina e Israel-Palestina en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

111. OHCHR, *Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, A/76/433, 22 de octubre de 2021.

112. International Crisis Group y USMEP, *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, Middle East Report no.225, 10 de agosto de 2021.

resultaron en la muerte de 12 personas, entre ellas dos menores.

Paralelamente, las protestas en Cisjordania por la ofensiva israelí en Gaza fueron reprimidas con fuego real por las fuerzas israelíes y derivaron en algunos enfrentamientos que solo en mayo resultaron en 34 víctimas mortales palestinas, la cifra más alta en un mes en toda una década,¹¹³ y en más de 1.700 heridas. Los hechos en Jerusalén, al-Aqsa y Gaza también motivaron numerosas manifestaciones de la población palestina con ciudadanía israelí en ciudades como Lod/al-Lid, Tel Aviv/Jaffa y Haifa, entre otras, y hechos de violencia inéditos en su extensión, que resultaron en la muerte de dos judío-israelíes y dos palestinos, además de decenas de personas heridas. Los incidentes incluyeron represión violenta de las protestas palestinas; ataques de ultranacionalistas judío-israelíes a población palestina, mezquitas y cementerios musulmanes ante la inacción de la policía israelí; y agresiones de palestinos a judío-israelíes y ataques incendiarios a sinagogas o coches policiales. Observadores destacaron que la violencia perpetrada por judío-israelíes fue significativamente menos perseguida: un 92% de las 2.142 personas detenidas por estos incidentes eran palestinos, y un 90% de las 170 personas contra las cuales se presentaron cargos eran palestinas.¹¹⁴ En este contexto, el 18 de mayo tuvo lugar una huelga sin precedentes en toda la Palestina histórica, que fue interpretada como una señal de unidad contra las políticas coloniales israelíes. En los meses siguientes se mantuvo el frágil cese el fuego en Gaza, pero continuaron produciéndose diversos hechos de tensión y violencia, tanto en la Franja, como en Cisjordania y Jerusalén Oriental.

A lo largo del año numerosos incidentes estuvieron asociados a la política de expansión de asentamientos ilegales y anexión de facto de territorios ocupados palestinos promovida por las autoridades israelíes, que a lo largo de 2021 anunciaron nuevos planes de ampliación que incluyen miles de viviendas. Expertos de Naciones Unidas y ONG de derechos humanos también **alertaron sobre el aumento de la violencia de colonos israelíes en 2021, en el nivel más alto de los últimos años, y denunciaron la complicidad de las autoridades israelíes** por su política de apoyo a los asentamientos y su inacción ante los numerosos abusos, que en algunos casos cuentan con la connivencia y apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes. Solo en los primeros diez meses del año se contabilizaron 410 ataques de colonos contra población palestina –agresiones, intimidaciones, tiroteos, vandalismo contra propiedades, destrucción de

árboles y cultivos, entre otras prácticas, especialmente en zonas rurales próximas a los asentamientos–, frente a 358 agresiones en 2020 y 335 en 2019. Una cuarta parte de los ataques en 2021 afectaron a personas y derivaron en la muerte de cuatro palestinos. La inmensa mayoría de los ataques de colonos quedan impunes –según la organización de derechos humanos israelí Yesh Din el 91% de las investigaciones entre 2005 y 2019 fueron cerradas por las autoridades israelíes sin cargos contra los colonos– y ante la falta de perspectivas de obtener justicia numerosos palestinos deciden no denunciar.¹¹⁵

Adicionalmente, a lo largo de 2021 Israel mantuvo su política de restricción de movimientos, intensificada con motivo de la pandemia de la COVID-19, con numerosas repercusiones para la población palestina. Las consecuencias incluyeron crecientes obstáculos para el acceso a la salud, en especial para las personas enfermas de Gaza pendientes de permisos de salida para someterse a tratamientos fuera de la Franja. Cabe destacar que durante el año **las autoridades israelíes también fueron acusadas de discriminación institucionalizada en sus políticas de respuesta al coronavirus**, en especial en lo que respecta a la vacunación de la población palestina de los territorios ocupados.¹¹⁶ **Israel también intensificó la persecución y criminalización de organizaciones de la sociedad civil palestina.**

En octubre, a través de una orden militar, el Gobierno israelí designó como terroristas a seis ONG palestinas destacadas en su trabajo en materia de derechos humanos –Adameer, al-Haq, Defense for Children in Palestine, Union Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development y Union of Palestinian Women Committees–, medida que supone la ilegalización de estas entidades, autoriza a la clausura de sus oficinas y detención de sus trabajadores y prohíbe el financiamiento y apoyo público a sus actividades. Esta decisión fue ampliamente denunciada a nivel internacional por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que consideraron que la medida se había visto favorecida por el fracaso de la comunidad internacional para confrontar los múltiples abusos a los derechos humanos cometidos por Israel.¹¹⁷ Cabe destacar que durante 2021, después de años de deliberaciones, la **Corte Penal Internacional ratificó su jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados palestinos y en marzo la fiscalía anunció el inicio de una investigación de hechos ocurridos a partir de junio de 2014.**

113. Al-Jazeera, “Israeli forces open fire on Palestinians; hundreds wounded”, *Al-Jazeera*, 9 de julio de 2021.

114. CG y USMEP, op.cit.

115. OHCHR, *UN experts alarmed by rise in settler violence in occupied Palestinian territory*, 10 de noviembre de 2021.

116. Amnesty International, *Denying COVID-19 vaccines to Palestinians exposes Israel's institutionalized discrimination*, 6 de enero de 2021; Human Rights Watch, *Israel's Discriminatory Vaccine Push Underscores Need for Action*, 19 de marzo de 2021. Para más información, véase también el observatorio *Conflictos, paz y COVID-19* de la Escola de Cultura de Pau.

117. Amnesty International y Human Rights Watch, *Israel/Palestine: Designation of Palestinian Rights Groups as Terrorists. Attack on the Human Rights Movement*, 22 de octubre de 2021.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

A una década de su inicio, el conflicto armado en Siria continuó caracterizándose por dinámicas de violencia que implicaron a numerosos actores armados locales, regionales e internacionales; enfrentamientos y ataques que afectaron a distintas zonas del país; elevados niveles de mortalidad y otras graves consecuencias en la población civil. Como en años previos, persistieron las dificultades para realizar un balance detallado del impacto de las hostilidades en el país. Pese a los umbrales divergentes ofrecidos por diferentes fuentes, en términos generales los datos recopilados confirmaron los altos niveles de letalidad del conflicto armado, aunque con cifras significativamente inferiores a las registradas en años previos. Según el seguimiento realizado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), en 2021 murieron al menos

3.882 personas a causa de las hostilidades, de las cuales 1.558 serían civiles, incluyendo 383 menores y 193 mujeres.¹¹⁸ Los informes periódicos del secretario general de la ONU constataron la muerte de 764 civiles en incidentes ocurridos en todo el territorio sirio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, entre ellas 205 menores y 86 mujeres, además de miles de personas heridas.¹¹⁹ Siguiendo la tónica de años previos, el balance de ACLED fue superior y apuntó a un total de 5.737 víctimas mortales a causa del conflicto sirio en 2021. La tendencia apunta a una reducción de la letalidad si se tienen en cuenta los gravísimos recuentos en el último lustro: entre 7.000 y 8.000 personas en 2020, 15.000 en 2019, 30.000 en 2018, 10.000 en 2017 y 17.000 en 2016. SOHR destacó que el balance de letalidad de 2021 era el más bajo desde el estallido de la revuelta contra al-Assad en 2011.

A lo largo del año, la ONU continuó documentando ataques deliberados o indiscriminados contra objetivos civiles y denunció que las partes del conflicto siguieron perpetrando –de manera sistemática– abusos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, secuestros, vulneraciones a la libertad de movimiento, manifestación y expresión, entre otros. Mujeres y niñas continuaron enfrentando múltiples formas de violencia de género, incluyendo matrimonios forzados. Asimismo, se documentaron gravísimas vulneraciones contra menores en el marco del conflicto armado, incluyendo muertes y heridas –mayoritariamente (72%) en la zona noroeste–, un extendido y sistemático reclutamiento y utilización de niños y, en menor medida, de niñas por decenas de actores armados, secuestros, violencia sexual y ataques a escuelas y hospitales.¹²⁰ El secretario general de la ONU subrayó que los crímenes en Siria no pueden continuar en la impunidad e insistió en su llamado a derivar el caso a la Corte Penal Internacional. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos informó que había completado un registro de 350.209 individuos muertos en el conflicto de Siria entre marzo de 2011 y marzo de 2021, que se considera como el número mínimo verificable y por debajo de la cifra real de fallecidos.

Respecto a la evolución de las hostilidades, en 2021 continuaron activos diversos frentes de batalla con enfrentamientos de intensidad variable y protagonizados por variados actores armados. En el **frente noreste**, las hostilidades enfrentaron principalmente a las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), lideradas por las milicias kurdas YPG/YPJ, con Turquía y grupos próximos a Ankara, y también con fuerzas del régimen de Bashar al-

118. Syrian Observatory for Human Rights, *Lowest yearly death toll ever. 3,882 people killed across Syria in 2021*, SOHR, 31 de diciembre de 2021.

119. Naciones Unidas, *Report of the Secretary General on implementation of council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020) and 2585 (2021)*, informes bimensuales de enero a diciembre de 2021.

120. Naciones Unidas, *Report of the Secretary General on children and armed conflict in the Syrian Arab Republic*, 23 de abril de 2021, S/2021/398, 23 de abril de 2021. El informe analiza el período de 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020.

Assad. Los hechos de violencia en esta zona afectaron a localidades como Qamishli, Hassakeh, Ras al-Ayn o Ain Issa e incluyeron ataques aéreos turcos. En Manjib también se registraron tensiones y hechos de violencia –con más de una decena de personas fallecidas– entre fuerzas de seguridad kurdas y población árabe debido a una medida de conscripción obligatoria que, finalmente, fue revertida por las autoridades kurdas. En el **noroeste**, formalmente se mantuvo la tregua acordada en marzo de 2020 por Rusia y Turquía en torno a Idlib, pero en un contexto marcado por periódicos incidentes. Entre ellos, enfrentamientos, intercambios de fuego de artillería y continuos ataques aéreos rusos en la zona sur de Idlib, y en las provincias de Hama y Latakia. En agosto, representantes de la ONU advirtieron sobre una escalada en los bombardeos, la más significativa desde el acuerdo de alto el fuego. En esta área continuaron activos grupos armados como Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que prosiguió su campaña contra grupos rivales como Hurras al-Din –vinculado a al-Qaeda–, Jundallah, Jabal al-Turkman y Junud al-Sham y se informó de ataques aéreos de EEUU contra posiciones de grupos vinculados a al-Qaeda. También se registraron hechos de violencia que involucraron a fuerzas turcas y kurdas en Afrin, Azaz y Tel Rifaat (norte de Aleppo). Destacó un ataque contra un hospital en Afrin, en junio, que causó serios daños y la muerte de 18 personas. Las tensiones en esta área se intensificaron en el último trimestre, alentando especulaciones sobre una nueva ofensiva de gran escala de Ankara contra las YPG/YPJ y una posible confrontación militar significativa entre fuerzas de Turquía, por un lado, y de Siria y Rusia, por otro.¹²¹ La **zona centro** de Siria, además del área este, fue donde el grupo armado Estado Islámico concentró sus actividades –especialmente en Deir-er Zor, Hassakah y la zona rural de Homs– con ofensivas y choques con tropas y grupos progubernamentales, milicias respaldadas por Irán y combatientes de las SDF. A lo largo de todo el año, se constataron ataques aéreos rusos contra presuntas posiciones de ISIS. Las informaciones sobre los periódicos incidentes en esta región apuntaron a decenas y decenas de fallecidos.

En el **suroeste**, en tanto, se produjeron numerosos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y excombatientes opositores, en especial en localidades en la provincia de Deraa, además de asesinatos de ex milicianos disidentes involucrados en acuerdos de “reconciliación” con el régimen. La violencia en el suroeste se intensificó tras las elecciones presidenciales de mayo que ratificaron a Bashar al-Assad por un cuarto mandato con un 95% de la votación, en unos comicios denunciados como fraudulentos por diversos actores de la comunidad internacional. A mediados de año, las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques de artillería

y una ofensiva terrestre contra barrios asediados, y se multiplicaron los choques armados en toda la provincia, provocando numerosas víctimas civiles y desplazamientos forzados de miles de personas. La violencia no se redujo hasta septiembre, tras un acuerdo facilitado por Rusia que exigía la rendición de los insurgentes, aunque hasta finalizar el año continuaban registrándose asesinatos, ataques del régimen y detonaciones de explosivos. Moscú ya había mediado en esta zona a principios de año y también intervino en acuerdos de cese de hostilidades entre otros actores armados en Siria a lo largo de 2021, por ejemplo, entre el Gobierno y las SDF en el noreste. Adicionalmente, cabe señalar que en octubre **Damasco** fue escenario del ataque más letal desde 2017 –un autobús que transportaba personal militar fue objeto de una explosión que causó la muerte a una quincena de soldados– y que a lo largo de 2021 continuaron los ataques israelíes contra objetivos e infraestructuras iraníes y de Hezbollah en Siria –con cifras indeterminadas de víctimas mortales, incluyendo civiles–, además de

algunas ofensivas de EEUU. El campo de al-Hawl que alberga a personas refugiadas y a familias de presuntos combatientes de Estado Islámico –casi 60.000 personas, 94% mujeres y menores– continuó siendo objeto de atención en 2021. La situación continuó deteriorándose y se informó de numerosos hechos de violencia, incluyendo 86 asesinatos entre enero y noviembre

Tras una década de conflicto y en un contexto de grave crisis económica y humanitaria, se estima que 90% de la población siria vivía en situación de pobreza y 60% afrontaba inseguridad alimentaria

La población siria afrontó un panorama crítico debido a las consecuencias directas e indirectas del conflicto armado, la severa crisis económica, el impacto de la COVID-19 y otros factores que afectaron la situación humanitaria. El conflicto continuó teniendo graves repercusiones en términos de desplazamiento forzado, que en tras una década de conflicto ha afectado a más del 60% de la población siria. Al finalizar 2021 un total de 6,7 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento interno, mientras que otras 6.6 se habían visto obligadas a abandonar el país –la inmensa mayoría, 5,6 millones, permanecía refugiada en países próximos a Siria. El Gobierno sirio y algunos grupos armados continuaron imponiendo obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria y la asistencia internacional siguió afrontando dificultades logísticas y operativas por la reducción a un solo acceso fronterizo desde 2020. Al finalizar el año el total de población necesitada de asistencia se elevaba a 13,4 millones de personas, un 21% más que el año anterior. Los indicadores de inseguridad alimentaria se agravaron en 2021 ante el acusado incremento de precios de productos básicos –el valor de los alimentos era en octubre un 128% más alto que el año anterior– y también se disparó el precio de los combustibles. Se estima que un 90% de la población siria vivía en situación de pobreza y que 12,4 millones

121. Security Council Report, *Syria: November 2021 Monthly Forecast*, 29 de octubre de 2021.

de personas afrontaban inseguridad alimentaria (casi 60% de la población) tras una década de conflicto armado y grave deterioro de la economía. Millones de personas, en especial en el norte y noreste de Siria, se vieron afectadas también por la falta de acceso a agua potable de manera regular y a un incremento de las enfermedades asociadas a esta carencia. La ONU alertó además sobre las tasas de infección por la pandemia de COVID-19, mucho más elevadas que las reconocidas en los informes oficiales, y a partir del segundo semestre de 2021 identificó un importante aumento en el número de contagios y en las tasas de mortalidad. Al

finalizar el año, menos de un 3% de la población en Siria había recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Cabe mencionar que, en el décimo aniversario de la revolución, sectores de la oposición siria reivindicaron sus demandas y se manifestaron contra el régimen, con protestas en ciudades como Idlib y Deraa. Las negociaciones auspiciadas por la ONU, en tanto, transcurrieron de manera accidentada y no mostraron avances en 2021.¹²² Mientras, continuaron los intentos por rehabilitar al régimen sirio en la escena internacional. Así, por ejemplo, EAU llamó en marzo a readmitir a Damasco en la Liga Árabe.

122. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.